

Problemáticas en la Judicialización de la Violencia basada en Género en el Proceso Penal Especial de Justicia y Paz

Alait De Jesús Freja Calao

Libro digital



C O R P O R A C I O N
UNIVERSIDAD
DE LA COSTA
1970
VIGILADA MINEDUCACION

Problemáticas en
la judicialización
de la violencia
basada en género
en el proceso
penal especial de
justicia y paz

Freja Calao, Alait de Jesús
Problemática en la judicialización de la violencia
basada en género en el proceso penal
Especial de justicia y paz / Alait de Jesús Freja
Calao. – Barranquilla, Educosta, 2017
224 páginas (Ebook, Formato pdf)
ISBN 978-958-8921-40-2

1. Derecho penal 2. Proceso penal
3. Violencia (Derecho) 4. Procedimiento penal

345.05 F849

Co-BrCuC

Problemáticas en la judicialización de la violencia basada en género en el proceso penal especial de justicia y paz

Alait De Jesús Freja Calao



2017



Problemáticas en la judicialización de la violencia basada en género en el proceso penal especial de justicia y paz

Autor: Alait De Jesús Freja Calao

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA
Barranquilla - Colombia - Sur América

ISBN (Digital): 978-958-8921-40-2

Primera Edición
Editorial Corporación Universidad de la Costa,
EDUCOSTA
Departamento de Gestión Editorial y Publicaciones
Corporación Universidad de la Costa
Calle 58 No. 55-66
Teléfono: (575) 336 2272
educosta@cuc.edu.co

Lauren J. Castro Bolaño
Directora Departamento de
Gestión Editorial y Publicaciones

Carolina Mercado Porras
Auxiliar Departamento de
Gestión Editorial y Publicaciones

Corrección de Estilo
Diagramación
Diseño de Portada:
Dolores López

Hecho el depósito que exige la ley.

©Todos los derechos reservados, 2017

Esta obra es propiedad intelectual de sus autores y los derechos de publicación han sido legalmente transferidos al editor. Queda prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio sin permiso por escrito del propietario de los derechos del copyright®

FUNDADORES

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC

EDUARDO CRISSIÉN SAMPER
RUBÉN MAURY PERTUZ (q.e.p.d)
NULVIA BORRERO HERRERA
MARÍA ARDILA DE MAURY
RAMIRO MORENO NORIEGA
RODRIGO NIEBLES DE LA CRUZ (q.e.p.d)
MIGUEL ANTEQUERA STAND

PERSONAL DIRECTIVO

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC

TITO JOSÉ CRISSIÉN BORRERO Rector	CARMEN MEZA ESTRADA Departamento Arquitectura y Diseño
GLORIA CECILIA MORENO GÓMEZ Vicerrectora Académica	LIGIA ROMERO MARÍN Departamento de Derecho y Ciencias Política:
HENRY MAURY ARDILA Vicerrector de Investigaciones	NOEL VARELA IZQUIERDO Departamento Gestion Industrial, Agroindustrial y Operaciones
JORGE MORENO GÓMEZ Vicerrector de Extensión	LISETTE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Departamento de Gestion Organizacional
JAIME DÍAZ ARENAS Vicerrector Administrativo	ALICIA INCIARTE GONZÁLEZ Departamento de Humanidades
ROSMEY TURBAY MIRANDA Vicerrectora de Bienestar	MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ Departamento de Psicologia del Individuo
HERNANDO ANTEQUERA MANOTAS Vicerrector Financiero	MARINA MARTINEZ GONZÁLEZ Departamento de Psicologia de las Interacciones Sociales
ALFREDO GÓMEZ VILLANUEVA Facultad de Arquitectura	JENNY ROMERO DE CUBA Departamento Economia, Contabilidad y Finanzas
JAVIER MORENO JUVINAO Facultad de Ciencias Economicas	JUAN CABELLO ERAS Departamento de Energia
JOSÉ LOZANO JIMENEZ Facultad de Ciencias Sociales y Humanas	EMIRO DE LA HOZ FRANCO Departamento de Ciencias de la Computación y Electronica
ALFREDO PEÑA SALOM Facultad de Derecho	ALDEMAR DE MOYA CAMACHO Departamento de Ciencias Naturales y Exacta
FAIRUZ OSPINO VALDIRIS Facultad de Ingenieria	LUIS SILVA OLIVEIRA Departamento de Civil y Ambiental

A Jacqueline Ramón Serra, mi esposa,
quien me ha apoyado incondicionalmente;
a mis hijos Giancarlo y Kerygma, quienes
representan el valor de mis esfuerzos; a
quienes tanto debo en la academia por
permitir una enriquecedora interlocución.

Agradecimientos

Agradecimientos especiales a la Universidad de la Costa de la cual soy orgullosamente egresado y me permite, por este medio, la manifestación libre de ideas que considero aportan a la academia y a la construcción de un mejor país.

En el conflicto armado colombiano, la agresión a las víctimas por razones de género (violencia basada en género [VBG]) ha sido objeto de judicialización en el proceso penal especial de Justicia y Paz enmarcado por la Ley 975 de 2005, por casos atribuidos a grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) en un escenario judicial de justicia transicional. En el presente documento se aborda la judicialización de formas de VBG, estándares internacionales sobre la punibilidad, su conceptualización e incorporación en normatividad nacional para señalar las problemáticas que se generan en el proceso penal especial.

Prólogo

Un trabajo resultado de investigación como el que tengo el gusto de prologar, constituye un relevante aporte sobre el análisis de lo que ocurre en un contexto específico como el desarrollado en el marco de la ley de Justicia y Paz en Colombia, porque en circunstancias conectadas con el conflicto armado y el accionar de los grupos que intervienen, se instrumentaliza y recurre a diversas formas de *violencia basada en género* [VBG] que, invisibilizada o relegada como asunto en segundo, tercer rango, o sin ninguna prelación en el proceso, en las circunstancias actuales, se ha hecho posible la investigación y sanción de personas que son responsables por cometer conductas que caben en formas de violencia caracterizada por fundamentarse en el género.

En las líneas del documento se describe la normativa nacional en correspondencia con estándares internacionales, lo que deja ver la transformación y evolución del tema con clara incidencia sobre la práctica judicial para hacer frente a la VBG. Lo expuesto pone en evidencia que lo propugnado para contrarrestar la impunidad proveniente de reclamaciones hechas por distintas organizaciones y personas durante la aplicación de la Ley 975 de 2005 en lo ocurrido y experimentado en el proceso han hecho eco para alcanzar un cambio manifestado en respuestas legislativas, reorientación en el enfoque de investigación y de atribución de responsabilidades, y entre otros elementos, se tiene en cuenta en el proceso la aplicación del “enfoque” que concentra la atención sobre el fenómeno de VBG.

Asimismo, se destaca la presentación de la conceptualización que amplía la categoría ‘genero’ a circunstan-

cias que trascienden el sexo, para reconocerle como construcción cultural y social, lo que significa que puede ser y es cambiante, es decir, si algún comportamiento cuya valoración sobre el género deba ser transformado, tiene la posibilidad de hacerse con la tranquilidad y en concordancia con los principios democráticos de inclusión, reconocimiento y respeto por la diferencia. De igual manera, se resalta la transparencia de la exposición sobre la "orientación" e "identidad", que amplía el alcance de la categoría 'género' para concentrar la atención en la existencia de la "diversidad", elemento que lamentablemente, amparado dentro de las claras y reconocidas violencias ocurridas en el conflicto armado, conlleva victimizaciones de población LGBTI por razón de patrones de discriminaciones que culminan con la ejecución de hechos delictivos.

Ampliado el concepto de 'género', también se expande el alcance interpretativo de la violencia que supera su identificación con la mujer y las formas de agresión limitadas a la violencia sexual. Y, los resultados de la investigación lo presentan con lo ocurrido en el proceso para la judicialización de distintas formas de VBG con casos objeto de sentencias, situación que muestra la forma de incrementos desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo para incorporar el enfoque de género en el proceso de Justicia y Paz.

Barranquilla, 25 de noviembre de 2016
(Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer)

EDWIN MAURICIO CORTÉS SÁNCHEZ

Investigador de la Universidad de la Costa (CUC)
Consultor de la cooperación internacional
en temas de VBG en el conflicto armado

Contenido

Introducción	17
---------------------	----

Capítulo 1

Estándares sobre punibles en relación con violencias basadas en género	23
---	----

Conceptualización sobre género y VBG	24
--------------------------------------	----

Estándares internacionales sobre VBG y conductas punibles	29
---	----

Fuentes del bloque de constitucionalidad	30
--	----

La tipificación de conductas constitutivas de VBG en el DPI	36
---	----

El “feminicidio” y sus implicaciones	37
--------------------------------------	----

VBG y conductas punibles en la legislación colombiana. Reconocimiento de sus ajustes en relación con los estándares internacionales	39
---	----

Tipos penales relacionados con VBG en la legislación nacional	40
---	----

La incorporación de tipos penales y la descripción de los crímenes de guerra y lesa humanidad	42
---	----

El feminicidio como tipo penal	46
--------------------------------	----

Capítulo 2

Problemáticas en la judicialización de la violencia basada en género en el proceso penal especial de justicia y paz (ley 975 de 2005)	55
--	----

Proceso penal especial de Justicia y Paz y persecución de la violencia basada en género	55
---	----

De las problemáticas en general sobre la judicialización de la VBG en el proceso penal especial de Justicia y Paz_____	59
Respuesta normativa para solucionar el tema de género en el proceso penal especial de Justicia y Paz_____	71
Respuesta jurisprudencial y “evolución” paulatina frente al tema de género en providencias judiciales en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz_____	73
Conceptualizaciones sobre género y VBG presentes en jurisprudencia del proceso penal especial de Justicia y Paz_____	75
Formas de VBG descritas en jurisprudencia del proceso penal especial de Justicia y Paz_____	84
El reconocimiento paulatino del marco normativo para la judicialización de la VBG en jurisprudencia del proceso penal especial de Justicia y Paz_____	126
Principales conductas punibles constitutivas de VBG en la jurisprudencia del proceso penal especial de Justicia y Paz_____	144
Problemáticas puntuales de la judicialización de las conductas VBG en el proceso especial de justicia y paz_____	156
Ausencia inicial de estrategias de priorización_____	158
Falta de cuidado para la reserva de los nombres e identidades de las víctimas_____	165
Ausencia de reconocimiento de patrones en relación con la VBG_____	166

Falta de cuidado en casos en los que no se menciona la autoría en hechos constitutivos de VBG	179
---	-----

Conclusiones	182
---------------------	-----

Recomendaciones	187
------------------------	-----

Referencias	227
--------------------	-----

Anexo

Sistematización de la jurisprudencia proferida en los casos judicializados en el proceso penal especial de justicia y paz	212
---	-----

Índice de Tablas

Tabla 1.	
Sentencias y número de hechos	
que involucran descripciones sobre VBG	144
Tabla 2.	
Conductas constitutivas de VBG judicializadas	
en el proceso penal especial de Justicia y Paz	146
Tabla 3.	
Otras conductas judicializadas en	
los hechos en los cuales ocurrió VBG	149
Tabla 4.	
Circunstancias de mayor punibilidad	
(art. 58 del CP) acreditadas en los hechos	150
Tabla 5.	
Sentencias de la Sala de Justicia y Paz	
del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá	
que no judicializan conductas de VBG	157

Índice de Siglas y Acrónimos

ACMM	Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio
CEJIL	Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CLADEM	Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
Corte IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CP	Código Penal
CPI - ICC	Corte Penal Internacional - International Criminal Court
CSJ	Corte Suprema de Justicia
DDHH	Derechos Humanos
DFNEJT	Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional
DIH	Derecho Internacional Humanitario
DPI	Derecho Penal Internacional
E. de R.	Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
ELN	Ejército de Liberación Nacional
ERG	Ejército Revolucionario Guevarista
FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
GAOML	Grupo(s) Armado(s) Organizado(s) al Margen de la Ley
IMP	Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz
JyP	Justicia y Paz

LGBTI	Lesbianas, Bisexuales, Gais, Trans e Intersexuales
OACNUDH	Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OEA	Organización de Estados Americanos
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ONU - Mujeres	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
p.	Página
par.	Paragraph
párr.	Párrafo
SIDH	Sistema Interamericano de Derechos Humanos
ss.	Siguientes
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TPIR	Tribunal Penal Internacional para Ruanda
TPIY	Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia
UNJYP	Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz
UP	Unión Patriótica (partido político colombiano)
VBG	Violencia(s) Basada(s) en Género
VBOSIGD	Violencia basada en la orientación sexual o la identidad de género diversas
VS	Violencia Sexual

Introducción

La lucha por los derechos de poblaciones vulnerables cuenta con largos procesos históricos para alcanzar su reconocimiento, y esto sucede en el caso puntual de poblaciones con características especiales como los indígenas, las negritudes, la niñez, y éstas, directamente, vinculadas con las distinciones en razón de género, con las mujeres y niñas. Ahora bien, con sustento en una definición de *género* que trascienda su identificación con la *mujer*, es decir, al superar la equiparación de los conceptos *género* y *mujer*, se amplía el espectro para comprender, además de las mujeres y niñas, a hombres y niños. Asimismo, dada la *identidad y orientación* de género, la categoría se hace extensiva frente a las *Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales* (LGBTI).

Al tener presente los derechos que le asisten a las personas en relación con el género, aunque reconocidos por instrumentos y estándares internacionales, estos no se logran a plenitud por las inequidades que persisten en marcadas diferencias derivadas del tratamiento de “roles de género” porque por claras distinciones entre lo masculino y femenino, o por identidad u orientación de género, durante la ejecución de procesos judiciales en un proceso de paz con grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), como el enmarcado en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), se permite identificar en lo corrido del proceso distintas problemáticas en la judicialización de conductas constitutivas de *violencia(s) basada(s) en el género* (VBG).

Esta realidad es constantemente denunciada por distintas organizaciones e instituciones internacionales o nacionales. En el caso de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el informe del 3 de febrero de 2011 sobre Colombia, señala que, en el marco de la Ley 975 de 2005: “de 51.616 hechos, solo se ha iniciado la confesión de 42 actos de violencia sexual” (ONU, 2011, párr. 56). La cifra, como se puede notar, tiene en cuenta solamente conductas de naturaleza sexual y adolece de criterios de ponderación cuando compara este tipo de violencia con otros hechos, que bien pueden poner al mismo nivel un hurto o lesiones personales, frente a un hecho de violación. Por lo mismo, y ya avanzado el proceso, el análisis de otras conductas que además de la sexual y con preponderancia teniendo como sujeto pasivo a la mujer, por *género* y violencia con sustento en él, involucra otros elementos que requieren análisis.

Por ello, el presente trabajo de investigación se dedica al estudio de la judicialización de VBG ocurrida en el conflicto armado y objeto del *proceso penal especial de Justicia y Paz*, para así develar problemáticas entre lo que se pretende, y que obligan a Colombia, por hacer parte de tratados internacionales sobre la materia, también, por lo consecuente de su obrar de acuerdo con principios constitucionales y exigencias legales, de tal manera que, sometido a la evaluación de lo que en términos de conductas constitutivas de VBG se trata, se estableció por objeto de investigación del presente proyecto la pregunta: ¿qué problemáticas en el proceso penal especial de Justicia y Paz se han dado en punto de conductas punibles constitutivas de violencia basada en género?

Por objetivo, en correspondencia con el planteamiento de la pregunta de investigación, se identifican problemáticas en la judicialización que en el proceso penal especial de Justicia y Paz se han dado en punto de conductas punibles constitutivas de violencia basada en género. Como resultado de un trabajo de investigación jurídica, se realizó un ejercicio analítico y crítico sobre la VBG detrás de la cual existen normas y estándares que reconocen derechos específicos, o procedimientos que, de manera intencionada por formas estereotipadas, o sin tal intención, develan problemáticas en la judicialización de hechos que bien contienen conductas constitutivas de VBG. Así las cosas, dado que en el presente trabajo se propende por la identificación de problemáticas en la judicialización de hechos en los cuales se presenta VBG que en el *proceso penal especial de Justicia y Paz* se han dado, se tiene por fundamento una concepción dinámica sobre el fenómeno jurídico a partir de la “evolución” en el reconocimiento de derechos y en los avances para la judicialización de un fenómeno que afecta, por razones de género, a la población en medio del conflicto armado.

Por ello, las técnicas de investigación se toman de las maneras de abordar documentos y bibliografía que atraviesa el logro de los objetivos específicos. Por instrumento, se utilizaron fichas bibliográficas y de lectura (o trabajo), como lo explica Umberto Eco, para la identificación de los documentos fuentes de la información (ficha bibliográfica), y para tomar las ideas de los autores, informes, normatividad o jurisprudencia, bien sea haciendo paráfrasis (repitiendo las ideas del autor con distintas palabras), o con la transcripción entre comillas de fragmentos enteros (Eco, s.f., p. 186).

Al tratarse del estudio de la judicialización de la VBG enmarcada en el *proceso penal especial de Justicia y Paz*, el presente proyecto tuvo como delimitación la aplicación de procesos culminados con sentencia en el marco de la *Ley de Justicia y Paz*, por lo cual se analizaron treinta y seis (36) decisiones de primera instancia proferidas por las salas de Justicia y Paz de los tribunales superiores de distrito judicial (Bogotá, Barranquilla y Medellín) en lo corrido del proceso hasta el primer semestre de 2016 (visible en el anexo), fecha en la que se concretó la redacción final del presente informe de investigación; de igual manera, diecinueve (19) decisiones de segunda instancia proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de alusiones a algunas otras decisiones judiciales en el proceso, como autos con los cuales se imparte legalidad a los cargos formulados por la Fiscalía a personas postuladas al proceso de Justicia y Paz, autos en los que se resuelven apelaciones a dichas providencias judiciales y algunos documentos de bibliografía especializada en el tema. La cuantificación de los hechos y de las conductas que se identificaron en la jurisprudencia se realizó con el uso del programa Microsoft Office Excel y se sistematizó como se contempla en el anexo.

La claridad en la relación con la identificación de las problemáticas para la judicialización de la VBG, contribuye en la mejor forma para futuros escenarios de investigación, persecución y sanción. Así las cosas, lo teórico de la reflexión sobre la VBG en lo omitido en el proceso penal especial de Justicia y Paz, es de importancia en un escenario de justicia transicional al que subyace el mencionado proceso, toda vez que se deben garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la repa-

ración y garantías de no repetición para la sociedad en su conjunto, y en especial, para las víctimas. En ello, la presente investigación permite que sean comprendidas herramientas jurídicas que propugnan por las garantías y restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado con la incorporación de un enfoque de género con el cual se hace visible la violencia que padecen distintas personas y se muestra en la presente investigación, así, la presente permite proporcionar este significativo aporte para que sea tenido en cuenta por quienes están en la obligación de investigar, perseguir y sancionar.

Estándares sobre punibles en relación con violencias basadas en género

El presente capítulo corresponde a los resultados de la investigación para elucidar, con la identificación de *estándares internacionales*, los requerimientos para la judicialización de conductas punibles constitutivas de *violencia basada en género* (VBG). Para conseguirlo, en primer lugar se aborda la conceptualización necesaria del fenómeno como parte de los elementos comprensivos de la naturaleza de los crímenes que se abordan, sin lo cual se pasa desapercibida cualquier descripción típica que en ocasiones, y por las motivaciones de la victimización a la cual las personas son sometidas en escenarios como los que tiene por objeto el *proceso penal especial de Justicia y Paz*, devienen en problemáticas que lesionan los derechos de las víctimas y desvirtúan el alcance de la verdad y la justicia.

En segundo lugar, se puntualizan los estándares internacionales que sobre VBG constituyen conductas descritas en tipos penales, para finalizar, en tercer lugar, con la incorporación de tales estándares y tipos en la normatividad nacional que, con el paso del tiempo, ha tenido que reconocer e incorporar elementos otrora ausentes.

Conceptualización sobre género y VBG

La lucha por los derechos de poblaciones vulnerables cuenta con largos procesos históricos para alcanzar su reconocimiento, y esto sucede en el caso puntual de poblaciones con características especiales como los indígenas, las negritudes, la niñez, y, directamente vinculados con las distinciones en razón de género, con las mujeres, los hombres, las niñas y los niños.

Como se puede notar, y hace parte de una comprensión amplia del concepto de *género*, se trasciende su identificación con la *mujer*, es decir, se supera la equiparación de los conceptos género y mujer, y se amplía el espectro para comprender las distinciones que el concepto *género* abarca para “pensar la diferencia de los sexos” (Fraisie, 2003, p. 40), de tal manera que se incluyen, además de las mujeres y niñas, a hombres y niños, igualmente, a personas por razón de su *identidad* u *orientación*, elementos que permiten la existencia de la *diversidad sexual*.

El *género*, como palabra, data de muchos años atrás, pero como concepto, es una construcción del siglo XX (Fraisie, 2003, p. 39). El trabajo de Stoller de 1968, titulado *Sex and Gender* (Sexo y género), parte de las preguntas por la influencia de las fuerzas biológicas en el comportamiento sexual, si éstas son pre-determinadas o hasta qué punto son influenciadas por experiencias aprendidas, o si son piezas de comportamiento principalmente psicológico (culturalmente determinado). Para realizar la exposición, el autor requiere la diferenciación entre sexo (*sex*) y género (*gender*) (Stoller, 1968, p. 8-9).

El sexo (*sex*) se detiene en la connotación biológica que, en pocas excepciones, tiene que ver con dos sexos, a saber, macho (*male*) y hembra (*female*) de acuerdo con condiciones físicas como los cromosomas, los genitales externos, los genitales internos (uretra, próstata), los estados hormonales, entre otras. Puede suceder que, excepcionalmente, genéticamente presente también en seres humanos, se dé como otro sexo, los hermafroditas. Por su parte, el género (*gender*) incorpora aspectos psicológicos y culturales, por lo cual, se proponen los términos "masculino" (*masculine*) y "femenino" (*feminine*) con independencia del sexo biológicamente considerado (Stoller, 1968, p. 9).

El género entonces, hace referencia a "las relaciones establecidas entre hombres y mujeres derivadas de los roles asignados a cada uno de ellos en cada sociedad" (Women's Link Worldwide, 2010, p. 4). De allí que por "roles de género" se entiendan situadas en contextos específicos "actividades propias masculinas o femeninas" (Wilches, 2011, p. 44).

De otra parte, la *orientación sexual* se vincula con el *deseo*, esto es, hace parte de los fenómenos inconscientes que no son el resultado de un acto volitivo, por lo cual, no se puede hablar de *opción sexual*, porque "la gente no decide lo que desea" (Wilches, 2011, p. 44). Por esta realidad existente en todas las personas, la orientación direcciona el deseo que, en mayor número ocurre hacia el sexo opuesto como nota característica de heterosexualidad, empero, existen personas cuya orientación difiere porque su deseo no se direcciona al sexo opuesto, sino a su mismo sexo.

Esto sucede con las *lesbianas*, mujeres que quieren ser mujeres con su cuerpo, pero su orientación y satisfacción se tiene con otra mujer, también con los *gais* que son hombres y les gusta serlo, pero desean a otro hombre, y con las personas *bisexuales* cuyo deseo y satisfacción sexual se tiene tanto con hombres como con mujeres. Los casos descritos componen las tres primeras letras de la sigla LGBTI (Wilches, 2011, p. 44) y hacen parte de la existencia de la denominada *diversidad* en asuntos de género.

Por su parte, la *identidad de género* se da en una persona cuando ella se asume en tanto hombre o mujer, independientemente del cuerpo biológico. Por lo mismo, puede una persona trascender la determinación biológica de su sexo e identificarse con el otro haciendo el respectivo tránsito, lo que significa que de acuerdo con esta realidad se tienen las personas denominadas “transgeneristas”. De otra parte, se tienen los “intersexuales”, personas “que nacen con ambos genitales y recién nacidos se decide qué sexo se le atribuirá, según estudios médicos” (Wilches, 2011, p. 44). Así las cosas, ellas hacen parte de la sigla LGBTI¹.

Lo hasta aquí señalado ha tenido como fuentes de información bibliografía especializada, ahora bien, como se anunció en el párrafo preliminar al presente apartado, la conceptualización tiene incidencia en la determinación y consagración normativa en materia penal. Por esta razón, se debe destacar que en el Estatuto de Roma (E. de R.) de la Corte Penal Internacional (CPI) el género

¹ Algunas personas al no reflejarse en ninguno de los anteriores, se identifican con la letra “Q” de “*queer*” (Belge y Bieschke, 2011, p. 17), mientras que otras, al no tener distintividad frente a quienes sienten deseo, se identifican con la letra “P” de “*pansexuales*”.

comprende “los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad” (Artículo 7[3]). A su vez, y de acuerdo con la Oficina del Fiscal de la CPI, en concordancia con la aproximación conceptual atrás realizada, se reconoce al género como construcción social que se manifiesta en roles, comportamientos, actividades y atributos que se asignan a mujeres y hombres, y a las niñas y niños (International Criminal Court [ICC]. The Office of the Prosecutor, 2014, par. 15).

En cuanto a *violencia*, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace una conceptualización general: “uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (2003, p. 5). En relación con el género, tal violencia “ocurre a los hombres por ser hombres o a las mujeres por ser mujeres” (Wilches, 2011, p. 47).

Al incorporar el género, la violencia se comete contra personas por su condición, y puede manifestarse física, moral, psicológica, económica o de cualquier otro tipo. Por esta razón, la *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*, en el caso de las mujeres define en su artículo 1º:

“(…) todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Sin embargo, el concepto de VBG en la presente investigación se ón sese hace extensivo a los hombres y niños cuya masculinidad (de allí el género) también puede resultar afectada por hechos de violencia, al igual que la naturaleza de la violencia ejercida contra personas por su identidad u orientación (LGBTI), lo que incorpora un concepto que amplía el espectro al superar la equiparación entre el género y la mujer.

Esta claridad, y para la tarea de elucidación de la naturaleza de los crímenes constitutivos de VBG, se tiene en instrumentos internacionales que fundamentan la labor de la Oficina del Fiscal de la CPI, específicamente para sustentar los crímenes que ocurren por razón de género, toda vez que son cometidos contra las personas a causa de su sexo y/o por los roles de género que son socialmente construidos (ICC. The Office of the Prosecutor, 2014, p. 2).

Igualmente, se requiere la superación de la equiparación entre la VBG y la violencia sexual (VS). Si bien, en instrumentos internacionales y en legislación nacional existen tipos autónomos que proscriben la VS, la naturaleza de tal tipo de violencia no siempre es la constante manifestación, sino que la indagación y la base para el sustento de ciertos crímenes está en el género. Esta posición amplía, como se advierte, el panorama para la persecución de conductas cuya naturaleza trasciende la VS que de por sí incluye el VBG, para tener en cuenta diferentes aspectos que superan el tema limitado al componente sexual. Se parte entonces, de un *análisis de género* con el cual se examinan las diferencias e inequidades entre mu-

jeros, hombres, niñas y niños, las relaciones de poder y dinámicas que determinan y forman los roles en una sociedad, lo que deviene en supuestos y estereotipos (ICC. The Office of the Prosecutor, 2014, p. 3).

Así las cosas, en relación con la VBG, luego de la conceptualización realizada, es importante señalar que la tipología penal que se analizará sobre instrumentos internacionales y nacionales tiene en cuenta la naturaleza sexual o no de los tipos, toda vez que puede suceder en contra de mujeres y niñas o de hombres y niños, debido a su género, como en contra de personas por su identidad u orientación sexual.

Estándares internacionales sobre VBG y conductas punibles

En materia de suscripción de tratados internacionales, Colombia se obliga a la no impunidad y la persecución de conductas lesivas de Derechos Humanos (DDHH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). En ese sentido, son vinculantes los tratados de carácter internacional cuya materia versa sobre la protección especial para grupos poblacionales, dentro de ellos, un lugar especial para el caso de las mujeres y niñas. Como parte de los estándares internacionales se tienen fuentes de *Derecho blando* (*Soft Law*) que constituyen la primera parte de la exposición. Luego, concentrados en tipos penales, se presentarán los avances y consagraciones normativas del Derecho Penal Internacional (DPI), para finalizar con un apartado expositivo sobre el “femicidio”.

Fuentes del bloque de constitucionalidad

En instrumentos internacionales se establecen deberes para que los Estados signatarios procedan con la *debida diligencia* en la investigación en casos de vulneraciones de los DDHH, también para el procesamiento, juzgamiento, sanción y reparación de las víctimas cuyas circunstancias se deben a VBG. Así las cosas, y en virtud del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia de 1991 (Bloque de constitucionalidad), se incorporan en Colombia los tratados ratificados que reconocen derechos humanos y que funcionan para la interpretación de derechos y deberes consagrados en la Constitución Política.

En primer lugar, de carácter general son importantes la *Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer* de la Organización de Estados Americanos (OEA), del 2 mayo de 1948, firmada en Bogotá y ratificada por Colombia con la Ley 8 de 1959; la *Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio*, resolución 260 III de la ONU firmada el 9 de diciembre de 1948 con entrada en vigor el 12 de enero de 1951 y ratificada por Colombia con la Ley 28 de 1959; la *Declaración Universal de Derechos Humanos* adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, en la cual Colombia aparece como signataria y realiza su ratificación con la Ley 16 de 1972. Se destaca de la *Declaración* que:

los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad (...) [Los hombres y las mujeres tienen iguales derechos] sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio (art. 16. 1.).

De otra parte, resulta importante el Convenio de Ginebra: *Protocolo adicional a los convenios de Ginebra relativo a la protección de víctimas de los conflictos armados internacionales* (protocolo I), signado en Ginebra el 12 de agosto de 1949, instrumento que Colombia ratifica con la Ley 5 de 1960.

Específicamente sobre los derechos políticos de la mujer, la Convención adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 640 (VII) de 20 de diciembre de 1952, reconoce que toda persona tiene derecho a participar en el Gobierno, directamente o por conducto de representantes libremente escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio público y en el disfrute y ejercicio de los *derechos políticos* (preámbulo). De igual manera, se pone en práctica el principio de la igualdad de condiciones tanto para las mujeres y hombres, entre éstas, los derechos al voto sin discriminación alguna (artículo 1).

Entre otros, resulta importante resaltar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por la Asamblea General de la ONU con la resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969 con la Ley 74 de 1968. Con este instrumento los Estados parte se comprometen a garantizar los derechos “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (artículo 2), también propugna por la igualdad de hombres y mujeres de manera que puedan “gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto” (artículo 3). Así mismo, en la Convención americana sobre derechos humanos, con el Pacto de San José de Costa Rica suscrito el 22 de noviembre de 1969 y ratificado por Colombia con la Ley 16 de 1972, se señala que:

Los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (artículo 1.1).

A través de esta Convención se protegen los derechos de las mujeres a la vida, a la integridad personal y la libertad (artículos 4, 5 y 6). Asimismo, se señala que: “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación” (artículo 24).

Puntualmente, en vínculo con la distinción que se realiza con base en el género, se tiene la *Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en Estados de emergencia o conflicto armado*, resolución 3318 (XXIX) de la ONU firmada el 14 de diciembre de 1974. Esta Declaración reconoce que tanto mujeres, niños y niñas son población vulnerable durante los conflictos armados. Recuerda que los Estados tienen la obligación de la promoción y protección de sus derechos.

En un lugar central, al tratar los instrumentos internacionales cuyo contenido versa sobre género, se tiene la *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*, (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión en la resolución 34/180 de la ONU del 18 de diciembre de 1979. La Convención entró en vigor el 3 de septiembre de 1981, y para Colombia, el 19 de febrero de 1982, luego de su ratificación con la Ley 51 de 1981. Allí se consagran los derechos para las mujeres exigibles en las respectivas legislaciones al interior de los Estados (artículo 2). Igualmente, a través de este instrumento se exige tomar medidas frente a la trata de mujeres y la explotación sexual (artículo 6). La convención crea el *Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer*, según el artículo 17.

Al lado, se resalta la *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*, adoptada por la ONU con la resolución 48/104 del 20 diciembre 1993, la resolución 1994/45 del 4 de marzo de 1994 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la integración de los derechos de la mujer en los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y, el 9 de junio de 1994, la *Convención interamericana para*

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém do Pará), instrumento que tiene vigor para Colombia con la Ley 248 de 1995.

La Convención define la violencia contra la mujer en los términos: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 1). A su vez, señala que por *violencia* se entiende la violencia física, la VS y la violencia psicológica, cuyas manifestaciones se dan en espacios que van desde lo familiar hasta la violencia que es realizada por cualquier persona en la comunidad, como también la que es perpetrada o tolerada por el Estado (artículo 2). De acuerdo con este instrumento internacional, los Estados deben: “condenar todas las formas de violencia contra la mujer y conviene en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia” (artículo 7).

Otros instrumentos como la *Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer*, realizada en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995, establece el reconocimiento especial y objetivos estratégicos frente a la mujer y la pobreza, la educación, la economía, entre otros, su protección en contextos de conflictos armados.

En el mismo sentido, se tiene la resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de ONU, aprobada el 31 de octubre de 2000 para reconocer que las mujeres, los niños y las niñas son la inmensa mayoría de las víctimas de los conflictos armados. Aunado, se tiene la resolución 1820 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 19 de junio de 2008. Allí se señala que:

“la violencia sexual, cuando se utiliza o se hace utilizar como táctica de guerra dirigida deliberadamente contra civiles o como parte de un ataque generalizado o sistemático contra las poblaciones civiles, puede agudizar significativamente las situaciones de conflicto armado y constituir en algunos casos un impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales” (numeral 1º).

De otra parte, la ONU en su documento titulado *Nacidos libres e iguales* (2012), frente a la visibilización de violaciones DDHH, resalta la discriminación direccionada contra la población LGBTI. El informe demanda “obligaciones jurídicas básicas” para que sean cumplidas por los Estados, a saber, (i) la protección de las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica, (ii) la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas LGBT, (iii) la despenalización de la homosexualidad, la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, y (v) la libertad de expresión, asociación y de reunión pacífica.

Dado que en el presente trabajo de investigación se tiene como punto central la identificación de las problemáticas realacionadas con la judicialización de la VBG, resulta importante la mención del avance a nivel internacional de la tipificación que se realiza en instancias como lo logrado por tribunales internacionales *ad hoc* creados para la exYugoslavia y Ruanda (Tribunal Penal Internacional para la ExYugoslavia [TPIY] y Tribunal Penal Internacional para Ruanda [TPIR]).

La tipificación de conductas constitutivas de VBG en el DPI

En relación con la VS, los estatutos de estos tribunales incluyen de manera expresa la violación como *crimen de lesa humanidad*. Como *crimen de guerra*, el estatuto del TPIR refiere “los ultrajes a la dignidad personal, en particular los tratos humillantes o degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de agresión indecente” (artículo 4[e]), mientras que el TPIY, al no tenerlo explícitamente, los aborda como “actos deliberados que causen grandes padecimientos o graves daños a la integridad física o la salud” (artículo 2[c]).

Por su parte, el E. de R. de la CPI tiene la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable (artículo 7[1][g]) como formas de VS y VBG constitutivas de *crímenes de lesa humanidad*.

Como *crimen de guerra*, en el E. de R. se tiene tanto en los casos de conflictos internacionales como de carácter no internacional, los actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual violatoria de los Convenios de Ginebra (artículos 8[2][b][xxii] y 8[2][e][vi] del E. de R.).

Ahora bien, más allá de la identidad entre violencia de género y la VS, se aclara por parte de la Oficina del Fiscal que los crímenes como la tortura (artículo 7[1][f] E. de R.), la persecución (Artículo 7[1][h] E. de R.), los actos inhumanos (artículo 7[1][k] E. de R.), las mutilaciones (artículo 8[2][b][x] E. de R.) y los tratos humillan-

tes y degradantes (artículos 8[2][b][xxi] y 8[2][c][ii] E. de R.) contienen elementos de carácter sexual o de género (ICC. The Office of the Prosecutor, 2014, par. 18).

Lo mismo, para el *genocidio* en los casos de “intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal” (artículo 6, E. de R.), la matanza de miembros del grupo (artículo 6[a], E. de R.), la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo (artículo 6[b], E. de R.), el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial (artículo 6[c], E. de R.), las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo (artículo 6[d], E. de R.), o el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo (artículo 6[e], E. de R.), podrían tener un elemento sexual o de género (ICC. The Office of the Prosecutor, 2014, par. 19).

El “feminicidio” y sus implicaciones

Al reconocerse que históricamente las mujeres y niñas han sido objeto de discriminación, y por consiguiente, víctimas de la violencia que se ejerce debido a su género, al extremo de privarlas del bien máspreciado sobre el cual se sostiene la existencia, esto es, la vida, un lugar predominante en el análisis a la VBG ocupa el “*femicidio/feminicidio*”.

Como categoría, busca dar cuenta de las muertes violentas cometidas contra mujeres y niñas en razón de su género como resultante de toda una serie de violencias desencadenadas, o en el grado de tentativa, cuando se tiene la firme intención de desencadenar, teniendo

como resultado consecuencias fatales. La conceptualización se realiza a partir del movimiento feminista durante la década de 1970 para caracterizar el asesinato de las mujeres por pertenecer al género femenino. La definición fue propuesta por Russell (2006); sin embargo, existen controversias para la definición del término “femicidio” por “feminicidio”, y a la fecha persiste la discusión y no hay con claridad una definición entre ambos conceptos.

En el caso *Gonzalez y otras v. México* de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se hace referencia al concepto en el sentido que le atribuye Russell de la siguiente manera: “consiste en ‘una forma extrema de violencia contra las mujeres; el asesinato de niñas y mujeres por el solo hecho de serlo en una sociedad que las subordina’, lo cual implica ‘una mezcla de factores que incluyen los culturales, los económicos y los políticos’” (Corte IDH, 2009, párr. 138).

La Comisión Interamericana de Mujeres para la implementación de la Convención Belem do Pará, define feminicidio como: “muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión” (OEA, 2008, art. 2º).

Resulta importante advertir que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, por lo mismo, deben tenerse claras las *circunstancias* en las cuales sucedieron los hechos, de igual manera, el *contexto* y las *finalidades* por las cuales ocurrieron. La identificación de estas circunstancias se describe en el *Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes*

violentas de mujeres por razones de género, elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACNUDH] y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). Los casos se pueden presentar en espacios íntimos (víctima y victimario tienen algún tipo de relación conyugal, parental, amistad, vecindad o de parentesco), no íntimos (el victimario es un completo desconocido), de carácter infantil (cuando involucra asesinatos en niñas menores de catorce [14] años), familiar (para el caso especial de la violencia intrafamiliar), por conexión (una mujer que inicialmente no tiene relación con el hecho, pero que coincide en el tiempo y circunstancias por lo cual termina siendo víctima), o sexual sistémico (en el caso de los secuestros, la tortura y concurso con agresiones de naturaleza sexual) (OACNUDH y ONU-Mujeres, 2014, p. 15).

VBG y conductas punibles en la legislación colombiana. Reconocimiento de sus ajustes en relación con los estándares internacionales

A nivel nacional, en materia de género se tiene respaldo en el articulado de la Constitución Política de Colombia², y diversos temas se han ido incorporando en la normatividad, bien porque se reconocen derechos (por ejemplo, la Ley 28 de 1932 permitió para las mujeres la libre administración y disposición de los bienes) o porque se incorporan tratados internacionales (por

² Entre otros, los artículos 13 con el derecho a la igualdad; 17 para la prohibición de la esclavitud; 40 sobre la participación democrática; 42 sobre la familia; 43 para la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres y la protección reforzada para la mujer embarazada.

ejemplo, la Ley 248 de 1995 aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer).

Ahora bien, el reconocimiento de los tipos penales ha sido progresivo en la legislación colombiana. A continuación, se presentan las principales transformaciones.

Tipos penales relacionados con VBG en la legislación nacional

En materia de descripciones de conductas constitutivas penales de VBG se puede reconocer al Decreto Ley 100 del 23 de enero de 1980, que tuvo vigencia hasta el 23 de julio de 2001 al contener en el título XI los “delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana”: el acceso carnal violento (artículo 298), el acto sexual violento (artículo 299), y el acto sexual en persona en incapacidad de resistir (artículo 300); el estupro (artículos 301 y 302); los actos sexuales abusivos (artículos 303-305); el proxenetismo (artículos 308, 309, 311, 312, 312 Bis, 312-A y 312-B).

Además, se describen en el Decreto Ley 100 del 23 de enero de 1980 las conductas típicas de “delitos contra la libertad individual y otras garantías” y “delitos contra la vida y la integridad personal”, que, de acuerdo con el *contexto* y la *intencionalidad*, podrían relacionarse con VBG. Así, el *genocidio*, además de ocasionar la muerte, se consideran como actos de este tipo: (a) la lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo; (b) el embarazo forzado; (c) el sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

(d) la toma de medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; y (e) el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo (artículo 322-A).

Ahora bien, en el Código Penal (CP) vigente, Ley 599 de 2000, se tiene el título que trata los “delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual”, donde se realizan las descripciones típicas correspondientes a la “violación” (capítulo I), dentro de las cuales se encuentra el *acceso carnal violento* (artículo 205), el *acto sexual violento* (artículo 206) y el *acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir* (artículo 207); los “actos sexuales abusivos” (capítulo II), a los que corresponde el *acceso carnal abusivo con menor de catorce años* (artículo 208), los *actos sexuales con menor de catorce años* (artículo 209) y el *acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir* (artículo 210). Asimismo, a partir de la Ley 1257 de 2008 se adiciona el *acoso sexual* (artículo 210A).

Sobre la “explotación sexual” (capítulo III), la Ley 599 de 2000 describe la *inducción a la prostitución* (artículo 213), el *proxenetismo con menor de edad* (artículo 213A), el *constreñimiento a la prostitución* (artículo 214), el *estímulo a la prostitución de menores* (artículo 217), la *demandas de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad* (artículo 217A), la *pornografía con personas menores de 18 años* (artículo 218), el *turismo sexual* (artículo 219), la *utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años* (artículo 219A) y la *omisión de denuncia* (artículo 219 B).

Para una comprensión diferenciada a partir del género, se tiene lo pertinente con los “delitos contra la vida y la integridad personal”; en el mismo título, el *homicidio* (artículo 103) incorporaba como circunstancia de agravación: “si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer” (artículo 104, numeral 11). Esta situación cambia con la ley sobre feminicidio que se tratará más adelante.

En el CP vigente también se contienen las descripciones típicas de “delitos contra la autonomía personal”: inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas (artículo 187), el tráfico de migrantes (artículo 188), la trata de personas (artículo 188^a) y el tráfico de niñas, niños y adolescentes (artículo 188C).

La incorporación de tipos penales y la descripción de los crímenes de guerra y lesa humanidad

Ahora bien, la VS en los conflictos se utiliza como arma de guerra por su eficacia y por resultar más “económica” que el enfrentamiento armado; se ejerce para controlar el territorio, dominar y castigar al enemigo, causar miedo y desplazamiento en la población, expropiar, obtener información, entre otras cosas (Corporación Humanas, 2009, p. 23-33). Aunque las mujeres y las niñas constituyen la mayoría de las víctimas, no debe olvidarse que los hombres, los niños, adolescentes y las personas LGBTI también son víctimas de VS en el conflicto. En este escenario, en un contexto de conflicto, la Corte Constitucional de Colombia define en la sentencia C-579 de 2013 los *crímenes de guerra* como:

“ciertas violaciones graves del derecho de los conflictos armados que los Estados decidieron sancionar en el ámbito internacional” (2013, num. 8.1.3.2.2, [iii]), y recuerda que la calificación de un hecho violatorio de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario como *crimen de guerra* requiere la necesaria conexión con el *conflicto armado* (nexo causal).

En los casos de VBG, quien investiga y pretende acusar debe preguntarse si el hecho se comete en el *contexto* o está *asociado* con el conflicto armado, con lo cual no puede quedar “aislado”. De acuerdo con el E. de R., se entiende por *crimen de guerra* las “infracciones graves de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949” (artículo 8[2][a]); las “violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional” (artículo 8[2][b]); si se está en el caso de conflicto armado que no sea internacional, “las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949” (artículo 8[2][c]); y “otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional” (artículo 8[2][e]).

Los crímenes de *lesa humanidad*, de acuerdo con la Corte Constitucional en la sentencia C-579 de 2013, tienen por características: “causar sufrimientos graves a la víctima o atentar contra su salud mental o física; inscribirse en el marco de un ataque generalizado y sistemático; estar dirigidos contra miembros de la población civil y ser cometido por uno o varios motivos discriminatorios especialmente por razones de or-

den nacional, político, étnico, racial o religioso” (num. 8.1.3.2.2, [i]). En consonancia con los estándares internacionales, a partir de la definición en el Estatuto de la CPI se está ante *crímenes de lesa humanidad* cuando se cometen hechos como “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” (artículo 7[1] del E. de R.).

En ese orden, esto es, para los *crímenes de guerra*, el Capítulo Único del Título II de la Ley 599 de 2000 tipifica los “delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”. Dado que la VS sucedida con ocasión del conflicto armado no tiene como víctimas a las mujeres y niñas, y con exclusividad la violación entendida como el *acceso carnal violento*, las adiciones que realiza la Ley 1719 de 2014 incorpora con ajuste a estándares internacionales para la violencia que ocurre en el conflicto, el acceso carnal abusivo, los actos sexuales violentos, actos sexuales con menor de catorce años, la esterilización forzada, el embarazo forzado, la desnudez forzada, el aborto forzado, la prostitución forzada, la esclavitud sexual y la trata de personas.

A su vez, la Ley 1719 de 2014 se ocupa especialmente de la VS en el marco del conflicto armado y establece en el artículo 15 las características de los *crímenes de lesa humanidad* cuando corresponden a hechos cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

La VS sucedida con ocasión del conflicto armado no se refiere únicamente a la violación entendida como

el *acceso carnal violento*, sino que hoy, en la legislación penal colombiana ajustada a estándares internacionales, en el Capítulo Único del Título II de la Ley 599 de 2000 se tipifican los “Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”, el acceso carnal abusivo (artículo 138A de la Ley 599 adicionado por el artículo 2 de la Ley 1719 de 2014), los actos sexuales violentos (artículo 139 de la Ley 599 de 2000), actos sexuales con menor de catorce años (artículo 139A adicionado por el artículo 3 de la Ley 1719 de 2014), la esterilización forzada (artículo 139B de la Ley 599 adicionado por el artículo 7 de la Ley 1719 de 2014), el embarazo forzado (artículo 139C de la Ley 599 adicionado por el artículo 8 de la Ley 1719 de 2014), la desnudez forzada (artículo 139D de la Ley 599 adicionado por el artículo 9 de la Ley 1719 de 2014), el aborto forzado (artículo 139E de la Ley 599 adicionado por el artículo 10 de la Ley 1719 de 2014), la prostitución forzada (artículo 141 de la Ley 599 modificado por el artículo 4 de la Ley 1719 de 2014 [en el texto original se tenía en el mismo artículo la prostitución forzada en disyuntiva con la esclavitud sexual]), la esclavitud sexual (artículo 141A de la Ley 599 adicionado por el artículo 5 de la Ley 1719 de 2014) y la trata de personas (artículo 141B de la Ley 599 adicionado por el artículo 6 de la Ley 1719 de 2014).

Estas conductas, para acreditarse como *crímenes de lesa humanidad*, deben cumplir con los requisitos atrás señalados sin perjuicio de tener, por la vinculación con el conflicto armado que antepone como condición cada descripción típica del Capítulo Único del Título II de la Ley 599 de 2000, el carácter de *crímenes de guerra*.

Sobre la tipificación de conductas constitutivas de VBG, también es relevante resaltar que puede concurrir la VS con otros delitos dentro de los cuales se encuentra la *tortura*, proscrita por la legislación nacional e internacional como *crimen de guerra* o *lesa humanidad*.

El feminicidio como tipo penal

En Colombia, con anterioridad a la expedición de la Ley 1761 del 6 de julio de 2015 en la cual se consagra el *feminicidio* como tipo penal autónomo, resulta relevante la mención de la casación con radicado 41457 en la cual la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, en un caso de inaplicación del existente agravante número once (11) del artículo 104 de la Ley 599 de 2000, a partir del cual se tienen incrementos punitivos si el homicidio “se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer”, la Corte resalta que:

“se causa la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, cuando el acto violento que la produce está determinado por la subordinación y discriminación de que es víctima, de lo cual resulta una situación de extrema vulnerabilidad. Este entorno de la violencia feminicida, que es expresión de una larga tradición de predominio del hombre sobre la mujer, es el que básicamente ha servido de apoyo al legislador para considerar más grave ese tipo de violencia que se genera en un contexto de desigualdad y que se busca contrarrestar legítimamente con la medida de carácter penal examinada e igual con las demás de otra naturaleza adoptadas en la Ley 1257 de 2008”.

De igual manera, como aspectos relevantes en la configuración del agravante, fundamenta para la argumentación de su existencia que “el maltrato del hombre para mantener bajo su control y ‘suya’ a la mujer, el acoso constante a que la somete para conseguirlo, la intimidación que con ello le produce, el aumento en la intensidad de su asedio y agresividad en cuanto ella más se aproxima a dejar de ‘pertenecerle’ y la muerte que al final le causa ‘para que no sea de nadie más’, claramente es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer o ‘por razones de género’”.

Por esta razón, existe en contra de la mujer el hecho de que asesinada en el caso padecía discriminación y subordinación para configurar un feminicidio, sin que esto suponga que un autor del delito sea un hombre y la víctima una mujer, con lo cual debe ante todo probarse que existía una situación de abuso de poder. Así las cosas, la corte consideró que:

“el acoso constante a que sometió a la mujer durante esos dos meses. “A todas las horas” (...) la llamaba a sus teléfonos fijo y celular ‘para comprobar que ella estaba sola’ y los viernes, por lo general, iba embriagado hasta el frente de su casa y le lanzaba amenazas. Por ‘sobre su cadáver’ se conseguiría otro, le había dicho al marcharse de su lado. ‘Perra sucia te voy a matar’, le gritó algunas veces en sus borracheras. Unos quince días antes del homicidio, (...), ‘...Alex se emborrachó mucho y subió y le gritó que le regalara la niña a la tía, o sea a mí, o que se la entregara a Bienestar Familiar que en cualquier momento a ella le iba a pasar algo...’”.

Con ello, en el caso se acreditó la existencia de un *feminicidio* para la fecha, argumentado con la existencia de un homicidio en el que concurre la disposición del agravante 11 del artículo 104 del CP, esto es, un homicidio de una mujer por el hecho de serlo.

Como circunstancia relevante y coyuntural en Colombia, para la presentación del proyecto con el número 107 del Senado en 2013, que deviene en la Ley 1761 del 6 de julio de 2015, se tiene el asesinato con graves implicaciones de notable discriminación y ataque en contra de la señora *Rosa Elvira Cely* en circunstancias constitutivas de un *feminicidio*, lo que llevó a la consagración en Colombia de este tipo penal de manera autónoma y no como un agravante más del homicidio (como se tenía con el numeral 11 incorporado por el artículo 26 de la Ley 1257 de 2008 al artículo 104 del CP).

En la exposición de motivos se recuerdan los compromisos de Colombia en materia de protección de los derechos de mujeres y niñas, la “debida diligencia” y la prevención y sanción de hechos realizados en su contra, las cifras de casos, los llamados de organizaciones y entidades internacionales como la ONU, la CIDH y la Corte IDH, y, entre otros, la crítica a la inaplicabilidad del artículo 26 de la Ley 1257 de 2008, con la cual se incorpora el agravante al homicidio, y se insiste en la necesidad de proteger, como bien jurídico, la vida de las mujeres y niñas.

Allí también se argumenta la “utilidad política” de la consagración del tipo penal de feminicidio de manera autónoma, dado que con ello se contribuye “a desarticular los imaginarios, creencias y prácticas sociales que ubican las violencias basadas en las relaciones

de opresión y subordinación entre varones y mujeres como algo natural y tolerable”. En igual sentido, porque “permite el análisis legal, político y cultural a la respuesta institucional y de la sociedad de los crímenes perpetrados en contra de las mujeres” (Toledo, 2008).

En la misma exposición de motivos se define feminicidio con cita al trabajo de Patsilí Toledo como el asesinato “de mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social y cultural que las ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, contexto que favorece y las expone a múltiples formas de violencia” (Toledo, 2008). Se recuerda el bien jurídico de la vida de la mujer como objeto para la protección, la condición calificada del sujeto pasivo (mujer), los elementos del tipo doloso y la causalidad entre el agente y el resultado de la muerte de una mujer.

Por nota característica frente al homicidio se tienen “las motivaciones del autor, en tanto se basa en una ideología discriminatoria fundamentada en la desvalorización de la condición humana y social de la mujer, y por tanto en imaginarios de superioridad y legitimación para ejercer sobre ellas actos de control, castigo y subordinación”; como también, que “no puede seguir siendo considerado un hecho aislado, fortuito, excepcional, o un acto pasional, por tanto debe dársele la importancia legislativa que merece, como la real manifestación de la opresión y el eslabón final del continuum de las violencias contra las mujeres que culminan con la muerte”. (Congreso de la República, Proyecto de Ley 107, 2013)

Así fundamentada, la Ley 1761 proferida el pasado 6 de julio de 2015, contiene en la redacción de su

“objeto”, la importancia de la tipificación del delito de feminicidio de manera autónoma, en consonancia con los instrumentos internacionales, para:

“garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación” (artículo 1)

El artículo 2 adiciona a la Ley 599 de 2000 el artículo 104A, en el cual se define el *feminicidio* de la siguiente manera: “[q]uien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género”.

Como nota característica de la consagración final de la definición del tipo penal de feminicidio, contrario al proyecto de ley en el cual se tenía como sujeto pasivo a la mujer y la identidad de género como uno de los móviles del hecho como circunstancia de agravación, es importante resaltar que en la redacción final la identidad de género hace parte de la definición de feminicidio, por lo cual, puede un hecho cometido en contra una persona, por sentirse y concebirse como mujer, como en el caso del transgénero, configurar un feminicidio.

De igual manera, se tienen además de sujetos pasivos mujeres y personas por motivos de identidad de género, un listado de circunstancias en las que encu-

dran los feminicidios cuando, en el caso de tener “una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella” (artículo 2 [a]), la circunstancia versa sobre la calidad del sujeto activo y el accionar con el ciclo de violencia.

Aunado, se está frente a la hipótesis de feminicidio si las circunstancias muestran que sobre el cuerpo y la vida de la mujer, son demostrables “actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad” (artículo 2 [b]), de igual manera, si hay aprovechamiento “de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural” (artículo 2 [c]), si se realiza para “para generar terror o humillación a quien se considere enemigo” (artículo 3 [d], si se tienen “antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no” (artículo 2 [e]), y en el caso en el cual “la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella (artículo 2 [f]).

Las hipótesis planteadas en el artículo 104A tienen por sujeto pasivo a la mujer, a la cual su vida es objeto de agresión por el hecho de ser mujer, análisis que desde la “perspectiva de género” requiere que se distancien los casos en los cuales personas de sexo femenino son asesinadas por otras motivaciones que no

encuadran en las circunstancias y exigencia del análisis requerido. Si esto no ocurre, todo asesinato de personas de sexo femenino, sería feminicidio, y esta no es la razón por la cual se tiene un nuevo tipo penal. Además, como se dijo, se tiene la hipótesis del sujeto pasivo por motivos de identidad de género.

Al mirar las circunstancias de agravación que en virtud del artículo 3 de la Ley 1761 de 2015 se tienen en el artículo 104B del Código Penal³, el literal “d” finaliza con la enunciación de la agravación por razones de prejuicios relacionados con la orientación sexual. Por ello, aunque se tiene genéricamente un tipo penal como “feminicidio”, las hipótesis de la relevancia sobre el aspecto puntual de género para saber si la conducta se comete sobre personas por el hecho de ser mujer, o por la identidad y orientación, cabría la postulación del *nomen iuris* para el tipo como “violencia basada en género”.

3 Los agravantes se concentran en la cualificación del sujeto pasivo para el caso de un servidor público que se vale de su calidad (artículo 3 [a]), o cuando se realiza en concurso de personas (artículo 3 [c]). También en sujetos pasivos si la conducta se comete “en mujer menor de dieciocho (18) años o mayor de sesenta (60) o mujer en estado de embarazo” (artículo 3 [b]); y en el caso de “una mujer en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica o por prejuicios relacionados con la condición étnica (...)” (artículo 3 [d]). De igual manera, se tiene en cuenta si la conducta se comete “en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima”, (artículo 3 [e]); o si el hecho sucede “con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico (artículo 3 [f]); y, finalmente, se retoman las circunstancias de agravación punitiva que se describe en los numerales 1 (en los cónyuges o compañeros permanentes; en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica), 3 (por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII y en el Capítulo I del Título XIII, del libro del Código Penal), 5 (valiéndose de la actividad de inimputable), 6 (con sevicia), 7 (colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación) y 8 (con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas) del artículo 104 del Código Penal (artículo 3 [g]).

El artículo 6 de la Ley 1761 de 2015 enuncia como principios rectores de la “debida diligencia” para la investigación y juzgamiento del delito de feminicidio, esto es, para “garantizar la realización de una investigación técnica, especializada, exhaustiva, imparcial, ágil, oportuna y efectiva”, los principios de: competencia, independencia, imparcialidad, exhaustividad y oportunidad. Por su parte, el artículo 7 de la citada Ley realiza un listado de las actuaciones exigidas por las autoridades jurisdiccionales competentes en los casos de feminicidio para tener en cuenta la “debida diligencia”. Por esta razón, es obligatoria “la búsqueda e identificación de la víctima o sus restos cuando haya sido sometida a desaparición forzada o se desconozca su paradero” (artículo 7 [a]); “la indagación sobre el continuum de violencias de que fue víctima la mujer antes de la muerte, aun cuando estos no hayan sido denunciados” (artículo 7 [b]); “la determinación de los elementos subjetivos del tipo penal relacionados con las razones de género que motivaron la comisión del delito de feminicidio (artículo 7 [c])”; “la ejecución de las órdenes de captura y las medidas de detención preventiva contra el o los responsables del delito de feminicidio” (artículo 7 [d]); “el empleo de todos los medios al alcance para la obtención de las pruebas relevantes en orden a determinar las causas de la muerte violenta contra la mujer” (artículo 7 [e]); “la ubicación del contexto en el que se cometió el hecho punible y las peculiaridades de la situación y del tipo de violación que se esté investigando” (artículo 7 [f]); “la eliminación de los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que conducen a la impunidad de la violencia feminicida” (artículo 7 [g]); “el otorgamiento de garantías de seguridad para los

testigos, los familiares de las víctimas de la violencia feminicida, lo mismo que a los operadores de la justicia” (artículo 7 [h]); “la sanción a los responsables del delito de feminicidio mediante el uso eficiente y cuidadoso de los medios al alcance de la jurisdicción penal ordinaria o de las jurisdicciones especiales” (artículo 7 [i]), y “la eliminación de los prejuicios basados en género en relación con las violencias contra las mujeres” (artículo 7 [j]).

Finalmente, el artículo 8 de la Ley 1761 de 2015 dispone la obligatoriedad y características de la investigación de feminicidio para que sean realizadas de manera oficiosa, de forma inmediata y exhaustiva por personal especializado que tenga a su alcance medios logísticos y metodológicos indispensables para que sean identificadas las personas responsables, se proceda con su judicialización y sanción, no siendo relevante para el archivo del proceso en la jurisdicción, el hecho de que la denuncia sea retirada.

Problemáticas en la judicialización de la violencia basada en género en el proceso penal especial de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)

En el presente capítulo se cumple la pretensión general de la investigación para hacer visibles las problemáticas sobre la judicialización de la VBG. Para ello, se parte de la descripción del *proceso penal especial de Justicia y Paz*, la descripción general de problemáticas identificadas, las respuestas normativas y de jurisprudencia del proceso, como la concentración en puntuales problemáticas identificadas en el proceso.

Proceso penal especial de Justicia y Paz y persecución de la violencia basada en género

La Ley 975 del 25 de julio de 2005 es conocida como la *Ley de Justicia y Paz* y tiene por objeto “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley (GAOML), garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” (artículo 1). En ninguna de las expresio-

nes contenidas en cuerpo de la citada norma se tiene la expresión *justicia transicional*, pero técnicamente corresponde a un mecanismo unido a una “concepción de justicia asociada con períodos de cambio político caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores” (Teitel, citado por Ibáñez, 2014, p. 53). Asimismo, si se analiza lo que para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el informe sobre “El Estado de Derecho y la Justicia de Transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, se define *justicia transicional* en los términos de:

“(...) variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos” (ONU, 2004, párr. 8).

Al observarse el objeto de la Ley 975 de 2005, y el contexto de su aplicación, se puede concluir que en Colombia con la Ley de Justicia y Paz se adelanta un mecanismo judicial de justicia transicional sin la intervención ni participación internacional porque se

vale de la capacidad y del personal nacional⁴, pero que, de acuerdo con exigencias internacionales, el Estado colombiano está obligado a garantizar los derechos a la justicia, la verdad y la reparación, como se contiene en el transcrito artículo 1º sobre el objeto de la Ley de Justicia y Paz, y en sus artículos 4⁵, 6⁶, 7⁷, y 8⁸.

En relación con la violencia basada en género (VBG), instrumentos internacionales establecen deberes para proceder con la debida diligencia en la investigación en casos de vulneraciones de los derechos humanos (DDHH), de igual manera, para el procesamiento, juzgamiento, sanción y reparación de las víctimas cuyas circunstancias se deban a VBG. El estándar del proceder con “debida diligencia” se tiene en distin-

4 Se tienen salas de Justicia y Paz (JyP) en los tribunales de distritos judiciales de Barranquilla, Bogotá y Medellín, de igual manera, la Fiscalía General de la Nación (FGN) hoy desarrolla el proceso con la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional (DFNEJT), luego de la transformación de la otrora denominada Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz (UNJYP); también participan, entre otras entidades del orden nacional, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Todas estas instituciones están compuestas por personal nacional.

5 Derecho a la verdad, la justicia, la reparación y debido proceso. “El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados”.

6 Derechos de las víctimas. “Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral (...)”.

7 Derecho a la verdad. “La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.

Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente.

Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad”.

8 Derecho a la reparación. “El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas (...)”.

tos instrumentos internacionales frente a casos que involucren violencia contra mujeres y niñas. En primer lugar, de acuerdo con lo contenido en la *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*, la Asamblea General de la ONU consagra como objetivo en el artículo 4 (c), la obligación de los Estados para proceder con debida diligencia “a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”. Lo mismo en la *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará)*, según el artículo 7 (b) se adoptan por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas que estén orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, dentro de ello, “actuar con la debida diligencia”.

En el mismo sentido, en el informe de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, se cita la causa del caso *Velásquez Rodríguez* en el cual la *Comisión Interamericana de Derechos Humanos* (CIDH) la debida diligencia se establece como: “todos los medios legales, políticos, administrativos y culturales para promover la protección de los derechos humanos y asegurar que toda violación sea considerada y tratada como un acto ilícito que puede dar lugar al castigo de los responsables y la obligación de indemnizar a las víctimas” (párr. 31).

Asimismo, se tiene la *garantía del recurso efectivo* para que las víctimas puedan tener mecanismos de reivindicación de sus derechos, de igual manera,

la *obligación de investigar*, también de *juzgar y castigar* que se tiene por parte del Estado colombiano con la ratificación de tratados internacionales sobre DDHH mencionados en el apartado 1.2.1 del presente informe de resultado de investigación.

A continuación, y para descripción de las debilidades inherentes en el proceso penal especial de Justicia y Paz para la judicialización de conductas punibles constitutivas de VBG, esto es, para conocer las problemáticas, se comienza por las anotaciones que distintas organizaciones han puntualizado frente a las falencias y dificultades en el proceso. De igual manera, se describe como parte de la problemática, la incorporación del tema de género con su carácter paulatino en la transformación normativa en el proceso y también en la jurisprudencia, que paso a paso realiza conceptualizaciones sobre el fenómeno y reconoce distintas formas y normatividad, pero la raíz del problema subyace en las situaciones que se van incorporando *in crescendo* con aprendizajes que van y vienen de decisión en decisión, también por marcadas distancias entre las salas de Justicia y Paz, y, como se puede notar, dentro de las mismas salas son disímiles las perspectivas de quienes fungen como ponentes en las decisiones que se han proferido.

De las problemáticas en general sobre la judicialización de las VBG en el proceso penal especial de Justicia y Paz

Al tener presente los derechos que le asisten a las personas en relación con el género, aunque reconocidos por instrumentos y estándares internacionales, estos

no se logran consolidar a plenitud por las inequidades que persisten en marcadas diferencias derivadas del tratamiento de roles de género, porque por claras distinciones entre lo masculino y femenino, o por identidad u orientación de género, durante la ejecución de procesos judiciales en el proceso de paz con GAOML, se ponen en evidencia problemáticas relacionadas con la judicialización de conductas constitutivas de VBG.

Esta realidad ha sido constantemente denunciada por distintas organizaciones e instituciones, como el caso de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el informe del 3 de febrero de 2011 sobre Colombia, en el cual señala que en el marco de la Ley 975 de 2005: “de 51.616 hechos, solo se ha iniciado la confesión de 42 actos de violencia sexual” (ONU, 2011, párr. 56).

De igual manera, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en su reporte de noviembre de 2012, afirma categóricamente que en Colombia se comete VS por actores no estatales (CPI, 2012, párr. 132), también por agentes estatales (CPI, 2012, párr. 148) y, que de los casos reportados por la Corte Constitucional de Colombia en el anexo reservado del Auto 092 del 14 de abril de 2008, el cual versa sobre violencia de género contra mujeres en el marco del conflicto armado, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la Nación (FGN), de 183 casos, al primer mes de 2012 solamente había avanzado en 4 casos (CPI, 2012, párr. 218).

Asimismo, al describir la tortura como acto subyacente que constituye crimen de lesa humanidad, con

cita al reporte de 2006 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas [ACNUDH], el informe de la Oficina del Fiscal de la CPI señala que desde 2003 las víctimas de los paramilitares, como parte de la “limpieza social” se ejercía contra “las mujeres, los niños, los jóvenes, los reclusos y las personas lesbianas, gay, bisexuales y transexuales (...)” (CPI, 2012, párr. 76).

Puntualmente, sobre el proceso penal especial de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la Oficina del Fiscal señala que: “la Unidad de Justicia y Paz ha registrado más de 700 casos de violación y otras formas de violencia sexual contra mujeres” (CPI, 2012, párr. 49). En la evaluación sobre la *admisibilidad*, reconoce para el caso de los paramilitares que se tienen judicializados dos hechos de violación (CPI, 2012, párr. 13) y solamente cuatro personas fueron condenadas por ellos (CPI, 2012, párr. 19), pero que “se ha iniciado un número limitado de acciones judiciales en torno a violaciones y otras formas de violencia sexual cometidas en el contexto del conflicto armado, a pesar de la escala del fenómeno” (CPI, 2012, párr. 19). Aún más, insiste en que “la Corte Constitucional de Colombia y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han indicado la insuficiencia de la actividad procesal y judicial en lo que a estos crímenes se refiere” (CPI, 2012, párr. 19).

Con estos antecedentes, el reporte de la Oficina del Fiscal de la CPI incorpora como objeto para el examen preliminar, “las actuaciones judiciales relacionadas con crímenes sexuales” (CPI, 2012, párr. 22), y en el *Informe sobre las actividades de examen preliminar*

del 2 de diciembre de 2014, Colombia se encuentra en fase de admisibilidad⁹, toda vez que se tiene una base razonable para creer que desde el 1 de noviembre de 2002 se han cometido crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma para la CPI [E. de R.], dentro de ello, la tortura, la violación y otras formas de violencia sexual (CPI, 2014, párr. 48). En este informe se resaltan nuevamente los casos del anexo reservado del Auto 092 de 2008 con cinco condenas a la fecha, y que los casos aún se encuentran en investigación preliminar y otros sin actividad alguna (CPI, 2014, párr. 62).

Sobre el proceso penal especial de Justicia y Paz, destaca que en el marco de las 16 “macro-investigaciones”¹⁰ adelantadas por la Unidad de Justicia y Paz, en relación con la violencia sexual cursan procesos con afectaciones a 2.906 víctimas, sobre lo cual la Fiscalía de la CPI hará seguimiento (CPI, 2014, párr. 62), y en las conclusiones “observa con preocupación lo limitado de los avances en materia de delitos sexuales” (CPI, 2014, párr. 68).

9 La Fiscalía de la CPI tiene un filtro para identificar las situaciones que justifican la investigación en el examen preliminar y procede de acuerdo con cuatro fases en las cuales: en primer lugar, evalúa la seriedad de información recibida para descartar los crímenes que están fuera de la competencia de la CPI, en consonancia con el artículo 15 del Estatuto de Roma para la CPI (E. de R.); en segundo lugar, comienza formalmente el examen preliminar para el ejercicio de la competencia (artículo 12 del E. de R.) y si hay un fundamento razonable sobre los crímenes como competencia de la CPI; en tercer lugar, la admisibilidad de los casos se centra en los aspectos de “complementariedad” y “gravedad”; finalmente, en cuarto lugar, se examina el “interés de justicia” del que trata el artículo 53 del E. de R. “a fin de formular la recomendación final al Fiscal acerca de si existe fundamento razonable para iniciar una investigación” (CPI, 2004, párr. 15).

10 Los 16 casos “macro-procesos” resultan de la implementación de los “criterios de priorización” contenidos en la Directiva 001 del 4 de octubre de 2012, la Fiscalía General de la Nación (FGN) desarrolla el Plan de acción de casos a priorizar por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz (Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, 2013).

Además de las observaciones de los citados reportes e informes de la ONU y la CPI, distintas organizaciones no gubernamentales puntualizan las flagrantes violaciones revictimizantes de la institucionalidad al no proceder de acuerdo con las exigencias de estándares internacionales para actuar con debida diligencia, reconocer los derechos y las realidades en la afectación a población marcadamente violentada por razones de género. Para nombrar algunas en relación con las observaciones al proceso de penal especial de Justicia y Paz y la violencia contra mujeres y niñas, se tienen los informes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer [CLADEM]. En el estudio *Mujeres y conflicto armado en Colombia* destaca que los procedimientos de la Ley 905 de 2005 “no garantizan a las víctimas la verdad ni la reparación, y mucho menos a las mujeres, en tanto los crímenes que contra ellas se cometen (Ramírez, s.f., p. 38). Se destaca la contextualización y el marco jurídico para la judicialización de la violencia basada en género. Sin embargo, es de notar (por las fechas de las referencias que se utilizan) que el informe del CLADEM data de los comienzos del proceso, por lo que no contiene directamente una visión de evaluación de lo acaecido posteriormente en torno a los avances de la judicialización.

Amnistía Internacional (AI) ha abordado temas en relación con la Ley de Justicia y Paz en informes como: *Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?* (2005); *Sindicalismo en Colombia. Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte* (2007); y *¡Déjennos en Paz! La población civil, víctima del conflicto armado interno en Colombia* (2008). Es-

pecíficamente sobre VS, AI tiene el informe: *"Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia": Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia* (2011) e *Invisibles ante la justicia, impunidad por actos de violencia sexual cometidos en el conflicto: informe de seguimiento* (2012). En el primero, advierte los obstáculos de la justicia con las categorías propias del derecho penal internacional, crímenes de guerra y de lesa humanidad. AI señala la necesidad de protección para las sobrevivientes, para las defensoras de derechos humanos, la discriminación múltiple en los casos de violencia sexual y mujeres indígenas, y, entre otras advertencias, que se realice formación en cuestiones de género y personal especializado. En el segundo, se insiste que "los actos de violencia sexual relacionada con el conflicto no se investigan como crímenes internacionales" (AI, 2012, p. 24).

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como organización no gubernamental, se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos para asegurar la implementación de normatividad internacional de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el uso efectivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y otros mecanismos de protección internacional. Dentro de sus publicaciones, y para el propósito, se destaca *Sumarios de jurisprudencia. Violencia de género*, compilado por Liliana Tojo (2010). Allí se tienen extractos de decisiones de órganos del SIDH (CIDH y Corte IDH); de los tribunales internacionales *ad hoc*, (Tribunal Penal Internacional para la ex Yugo-

slavia [TPIY]¹¹ y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda [TPIR]¹²; y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

De otra parte, con el informe *Justicia y paz en Colombia: El derecho a la verdad, la justicia y la reparación* (CEJIL, 2010) en el análisis a la Ley 975 según estándares internacionales de protección de los derechos humanos concluye que el avance hacia la transición requiere la verdad y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, “particularmente las que han sufrido desproporcionalmente: campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres, niños y niñas, adolescentes, miembros de sociedad civil, y otros” (p. 23).

El Colectivo de Mujeres al Derecho a partir de la publicación *Práctica feminista del derecho. Atención a mujeres en desplazamiento del derecho tensión situación de desplazamiento* (2009), realiza fundamentaciones jurídicas con los desarrollos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Justicia Penal Internacional, el sistema y el estatuto de la CPI, además de informar lo relacionado con el SIDH para presentar peticiones ante la CIDH.

La Corporación Humanas en Colombia, con la *Guía para llevar casos de violencia sexual. Propuestas de argumentación para enjuiciar crímenes de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado colombiano* (2009), aporta metodológicamente la forma de analizar los contextos y las finalidades de la VS cometida en el conflicto armado. Le dedica un apartado

11 En inglés: *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY).

12 En inglés: *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR).

a la tipificación de los delitos del Código Penal colombiano que permiten la judicialización de la VS, al igual, desarrolla la relación entre este tipo de violencia y los crímenes de guerra y de lesa humanidad; finalmente, presenta los aportes de los tribunales internacionales. La Corporación Humanas, preocupada por los procesos de judicialización de la VS, presentó con el título *La violencia sexual una estrategia paramilitar en Colombia* (2013) tres *amicus curiae* para contribuir en la argumentación de casos cometidos por el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para responsabilizar a Salvatore Mancuso Gómez hechos cometidos por Hernán Giraldo Serna, comandante del Frente Resistencia Tayrona de las AUC, y los cometidos por el Bloque Norte de las AUC al mando de Rodrigo Tovar Pupo. Los *amicus* hacen visible en cada uno de los casos, consideraciones fácticas y jurídicas recordando las obligaciones internacionales del Estado en materia de investigación y sanción de la VS registrada en el marco del conflicto armado, la responsabilidad que se atribuye a cada uno de los tres comandantes, y, entre otras consideraciones, los tipos penales y las infracciones señaladas con las categorías del derecho penal internacional.

Casos sonados como los que cursan contra *Hernán Giraldo Serna* al ser el directo perpetrador de hechos de VS contra mujeres y niñas durante su presencia como el “patrón” en la Sierra Nevada de Santa Marta, al igual que la VS y basada en género impulsada, tolerada y dispuesta como estrategia en el accionar de los grupos liderados por Salvatore Mancuso Gómez y Rodrigo Tovar Pupo en la zona norte de Colombia (Corporación Humanas, 2013), entre otros hechos cuya razón

se sustenta en estereotipos e imaginarios que conforman los roles de género en la cotidianidad, asociados a mayores situaciones de vulnerabilidad en el conflicto armado, llaman la atención para que sea concentrada la investigación, persecución y judicialización de quienes son responsables, como también las correspondientes medidas de reparación de las víctimas de VS en el proceso penal especial de Justicia y Paz.

También se resalta de Corporación Humanas la campaña "*Visibilizar, investigar y judicializar ya la violencia sexual*" (2012) y, entre otros informes, se resalta el que la Corporación publica en conjunto con la organización Abogados sin Fronteras (2013) informes para resaltar la manera en la cual las actuaciones de las instituciones involucradas en el proceso penal especial de Justicia y Paz no tienen en cuenta actuaciones con debida diligencia, y que tampoco son consecuentes con la "garantía del recurso efectivo", la "obligación de investigar", y de igual manera, "juzgar y castigar" (Corporación Humanas/Abogados sin Fronteras, 2013, p. 28-30). Aunado a esto se encuentra la corporación Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) con los resultados de los análisis con perspectiva de género a la justicia y seguridad de las víctimas (IMP, 2009). IMP con su trabajo advierte sobre los riesgos específicos a los que se exponen las mujeres por acudir a la justicia transicional en medio del conflicto armado. Como antecedente, importa la manera cómo la preocupación por la seguridad de las víctimas finalmente propugnó por la incorporación del enfoque de género en la reforma al *Programa de protección de víctimas y testigos* de la Ley 975 de 2005.

Los avances en la judicialización de hechos cometidos contra mujeres y niñas en razón de su género, también con fundamento en la masculinidad a hombres y niños que han sido objeto de violencia por razones de género, y contra personas de la población definida bajo la sigla LGBTI, se han incrementado desde las nulas o incipientes visibilizaciones del fenómeno tal como se señaló con la observación de la Alta Comisionada de la ONU en 2011, luego, dos sentencias del mismo año en el proceso penal especial de Justicia y Paz judicializaron tres casos de VS en el conflicto armado. Se trata de los casos en la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, magistrada ponente Léster María González Romero, sobre hechos por los cuales se condenan los postulados José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro, José Manuel Hernández Calderas, proferida el 01 de diciembre de 2011, y de la misma corporación y ponente, la sentencia sobre hechos por los cuales se condenan los postulados Edgar Ignacio Fierro Flores y Andrés Mauricio Torres León, proferida el 07 de diciembre de 2011.

Las cifras sobre casos judicializados bajo la estrategia de *priorización* que aplica la Fiscalía General de la Nación (FGN) proyectada por la Directiva 001 del 04 de octubre de 2012 y su desarrollo en el Plan de acción de casos a priorizar por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz (2013) señalan un aumento cuantitativo en lo que toca a la violencia de género objeto de judicialización, dado que se “priorizó” desde el punto de vista subjetivo por las características de las víctimas, y desde el punto de vista objetivo, por la

gravedad de los hechos, según lo plantea el mencionado plan en su objetivo específico 2.2. La ejecución del plan hizo que la concentración y atención del ente acusador llevara al proceso numerosos casos constitutivos de VBG, como por ejemplo, bajo la denominación “patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género”, la sentencia del 20 de noviembre de 2014 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, con ponencia de la magistrada Léster María González Romero, en el que reunió 175 hechos de VBG por los cuales se condena al postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros.

Finalmente, el proyecto ProFis de la GIZ (Agencia Alemana de Cooperación Internacional) compila bajo el título *Visibilizar la Violencia Basada en Género* (Bernal, 2011) observaciones que comienzan con la “sensibilización” para hacer énfasis en las conceptualizaciones sobre género, perspectiva de género, entre otros conceptos, para luego presentar en relación con la judicialización, la debida diligencia y la denominación de la violencia de género con las categorías del derecho penal internacional (crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad). En la misma línea de interés por la judicialización, en el texto *Marco argumentativo para la Violencia Basada en Género [VBG] en el contexto del conflicto armado colombiano* (Cortés y Bernal, 2012) plantean estrategias metodológicas y de argumentación para la imputación de los hechos de violencia de género a postulados en el proceso penal especial de Justicia y Paz, en el que pocas imputaciones por delitos de VBG se habían realizado a la fecha de publicación.

Un capítulo de libro publicado por la *Agencia Internacional de Cooperación Alemana* (GIZ) en 2013 recoge la *Primera jurisprudencia en Violencia Basada en Género (VBG) en la Ley de Justicia y Paz en Colombia* para analizar la forma cómo la VS es objeto de sentencia por primera vez. Sobre el Bloque Vencedores de Arauca de las AUC señala:

“constituyeron comportamientos que por su gran escalada sobre poblaciones victimizadas, la contundencia, generalidad y gravedad de las violaciones producidas, no solo generaron lesiones a los derechos de las víctimas directas e indirectas de tales acontecimientos, sino que por igual, esos hechos trascendieron en sus efectos ese ámbito particular y privado, para proyectarse a la humanidad o comunidad internacional. En tal sentido, se perpetraron actos inhumanos con los que de manera sistemática y generalizada se afectaron gravemente los derechos inherentes al género humano como la vida, la libertad, la dignidad y la integridad sexual, como los relacionados en este proceso; es por ello que la Sala, conforme con lo estipulado por el artículo 7º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, declaró que constituyen delitos de Lesa Humanidad” (Bernal, 2013, p. 69)

Como se pudo observar en las publicaciones de las citadas, la constante crítica puntualiza falencias en el proceso de Justicia y Paz para la judicialización de las VBG, con lo cual muchas circunstancias y punibles han pasado desapercibidos.

Respuesta normativa para solucionar el tema de género en el proceso penal especial de Justicia y Paz

La incorporación de temáticas en relación con *género* en normatividad del proceso penal especial de Justicia y Paz ha sido paulatina¹³. En la versión original de la Ley 975 de 2005 algunos aspectos diferenciales por razones de género se resaltan para algunas situaciones. Así sucede en lo pertinente con los “derechos de las víctimas a la administración de justicia”, porque el artículo 39 de la Ley 905 de 2005 exceptúa de la “publicidad” como característica del proceso, los casos de agresión sexual, o en los cuales niños, niñas y adolescentes son víctimas o testigos.

Por su parte, el artículo 41 exige a los funcionarios judiciales estar atentos a “necesidades especiales” al tratarse de mujeres, de niñas, niños, de personas mayores de edad o con discapacidad, que están participando en el proceso. Asimismo, el artículo 38 que versa sobre la protección de las víctimas hace exigible tener en cuenta “todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género y la salud, así como la índole del delito, en particular cuando este entrañe violencia sexual, irrespeto a la igualdad de género o violencia contra niños y niñas”.

13 Un recorrido de la incorporación del enfoque diferencial y de género en la Ley de Justicia y Paz se realiza con la decisión del 24 de febrero de 2015 proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial en contra del postulado Orlando Villa Zapata y otros. La Sala dedica un apartado para el estudio con cita a los artículos 38, 39 y 41 de la Ley de Justicia y Paz, de igual manera a la intervención de la Fiscalía en la motivación del proyecto de reforma que culmina con la Ley 1592 de 2012, asimismo, la inclusión del artículo 5A y una nota extensa al pie de página con los aspectos del Decreto 1737 de 2010 para tener en cuenta factores diferenciales para la aplicación del *Programa de protección de víctimas* de la Ley de Justicia y Paz con atención al género, edad y etnia, y la conducta delictiva, de acuerdo con lo señalado en el inciso 2 del artículo 38 (párr. 744-746).

Normativamente, se hace expresa mención en el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 del reconocimiento de “poblaciones con características particulares” de la siguiente manera: “el principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad [subrayado fuera del original]”.

Como tal, la Ley 1592 de 2012 incorporó el *enfoque diferencial* como artículo 5A en la Ley 975 de 2005 con el siguiente texto:

“El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, la participación de las víctimas en el proceso penal especial de que trata la presente ley, así como el proceso judicial y la investigación que se realice, deberán contar con dicho enfoque, sin perjuicio de la aplicación de criterios de priorización (...) [subrayado fuera del original]”.

Ahora bien, es importante la revisión del Proyecto de Ley 096 de 2011 de Cámara que culminó con la sanción de la Ley 1592 de 2012 para reformar la Ley de Justicia y Paz, toda vez que en la exposición de motivos que hace la FGN se insiste en la relevancia de los elementos “diferenciales” que son incorporados en los “criterios de priorización” (Rama Legislativa del Poder Público [Colombia], 2011, p. 11). Esto

se contempla posteriormente en la Directiva 0001 del 4 de octubre de 2012 de la FGN para establecer el *enfoque diferencial* dentro del “criterio subjetivo” de la *priorización*, dado que con él se observan “las calidades particulares de la víctima (v.gr. integrante de un grupo étnico, menor de edad, mujer, defensor o defensora de derechos humanos, funcionario judicial, periodista, sindicalista, etcétera) (...) [subrayado fuera del original]” (Fiscalía General de la Nación, 2012, hoja 28).

Respuesta jurisprudencial y “evolución” paulatina frente al tema de género en providencias judiciales en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz

En la primera sentencia en firme proferida en el proceso penal especial de Justicia y Paz por la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de junio de 2010 contra los postulados Edwar Cobos Téllez y Úber Enrique Banquez, no hace mención alguna al tema de género ni de situaciones fácticas que sean objeto para de allí tener algún elemento que lo vincule.

De otra parte, se tiene, con la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la decisión contra los postulados José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas, el 01 de diciembre de 2011, la primera sentencia que se ocupa de temas relacionados con VS en el proceso penal de Justicia y Paz. Se lee en el proveído:

“En atención a que dos de los cargos que se legalizaron contra el postulado José Rubén Peña Tobón son de connotación sexual, y que la sentencia referida es la primera providencia en el marco de la Jurisdicción de Justicia y Paz que se pronuncia sobre hechos de tal naturaleza, así como de su respectiva reparación, la Sala de Conocimiento se refirió a los crímenes de violencia sexual, fundándose en la necesidad de visibilizar la problemática para combatir la impunidad y cumplir con la obligación de sancionar que hace parte del deber de garantía del Estado” (párr. 84).

Hechas estas menciones, es relevante advertir, de acuerdo con el criterio metodológico que procede con el análisis de las principales categorías con las cuales se agrupan los datos, que temas de género comienzan a hacer su aparición de manera paulatina en el proceso, lo que significa la elaboración de un recorrido cronológico para señalar la visibilidad que se realiza por temas que parten de la comprensión del fenómeno y su conceptualización, además de la incorporación de “formas” como se ejerce VBG en el marco del conflicto armado y la fundamentación normativa para la judicialización. Por esa razón, se tienen tres apartados dedicados al análisis de lo acaecido en la jurisprudencia del proceso penal especial de Justicia y Paz para incorporar estos temas.

*Conceptualizaciones sobre género y VBG
presentes en jurisprudencia del proceso
penal especial de Justicia y Paz*

Con la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá del 06 de diciembre de 2013 contra los postulados Armando Madriaga Picón y Jesús Noraldo Basto León, desmovilizados del Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC, por primera vez desarrolla un apartado específicamente resaltado sobre “violencia de género desarrollada por el Frente Héctor Julio Peinado Becerra en la provincia de Ocaña” (párr. 216 y ss.). En la decisión se comienza por la conceptualización de la VBG tomada de la Ley 1257 de 2008 y sus antecedentes en documentos de la ONU, que, si bien taxativamente no son específicos sobre género, si lo son para comprender la definición de la “violencia contra la mujer” del artículo 2º de la citada ley¹⁴.

Además, en la nota al pie número 178 cita el número 3 de la revista temática del Consejo Noruego para Refugiados Colombia para definir VBG de la siguiente manera: “la violencia de género se define como: cualquier acción u omisión, que le causare muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las

14 “Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas”.

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”. Como se puede notar, aun en el proceso, no se supera la identificación del tema de *género* con la *mujer*.

En la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín del día 09 de diciembre de 2014 en contra del postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez, perteneciente al Bloque Calima de las AUC, se expone el apartado 9.5.3 en donde se aborda lo pertinentemente relacionado con los “delitos de género” presentados por la Fiscalía. Se hace una conceptualización de VBG en los términos: “en su sentido lato significa que este tipo de violencia le ocurre a una persona por el género al que pertenece: la violencia que les ocurre a los hombres por ser hombres o a las mujeres por ser mujeres” (párr. 457). Como se puede notar, en este proveído se amplía el concepto de VBG que en decisiones anteriores se tomaba en consideración de la VS.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el día 01 de septiembre de 2014, dicta la sentencia contra el postulado Luis Eduardo Cifuentes Galindo y otros, exintegrantes de las Autodefensas Bloque Cundinamarca, en la cual este ente registra que en los llamados delitos sobre VS ha implicado reconocer:

“(i) la particularidad de la violencia sexual como crímenes de sistema es muy importante para reconocer las discriminaciones por género en la guerra, ya sea contra mujeres o contra hombres.

Esta especificidad al judicializar este tipo de delitos contribuye a la reconstrucción de la verdad histórica; (ii) reconocer que la violencia contra las mujeres en conflictos armados está íntimamente asociada a procesos históricos de exclusión y discriminación, que se acentúan e intensifican durante los conflictos armados, colocando a las mujeres indígenas y pobres en condiciones de vulnerabilidad, y (iii) que la situación de riesgo e inseguridad a la que están expuestas las víctimas, aunque es común a hombres y mujeres, afecta de manera diferenciada y especial a las mujeres, quienes además se encuentran ante un riesgo más alto” (párr. 1192).

De otra parte, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 20 de noviembre de 2014, en la segunda sentencia contra el postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros¹⁵, pertenecientes al Bloque Catatumbo, Bloque Norte, Bloque Héroes de los Montes de María y Bloque Córdoba, define la VBG como aquella que:

“comporta entre sus expresiones la violencia sexual que puede ser ejercida contra hombres, mujeres e integrantes de la organización LGBTI, debe la Sala destacar, que en escenarios de conflictos internos e incluso internacionales, esta violencia se ejerce de manera preferente contra las mujeres.

¹⁵ La primera sentencia contra el postulado Salvatore Mancuso Gómez corresponde a la misma Sala de Justicia y Paz, fallada el 31 de octubre de 2014.

Para el caso de la costa Caribe colombiana dado el especial rol de la mujer en una sociedad reconocida como eminentemente matriarcal, en el que la mujer además tiene el máximo valor representativo en la sociedad y la familia, la violencia histórica ejercida en su contra por parte de los integrantes de los distintos actores armados presentes en esa región, tiene en su origen y finalidad diversos componentes” (párr. 1287).

Con fundamento en la definición tomada de la *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer* aprobada por la Asamblea General de ONU en la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993, de la que se cita: “(...) todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales”, la sala concluye que: “se tiene que la violencia se ejerce por la condición de género, provocando daños en la especificidad de lo físico, sexual y psicológico. Esto indica que no hay una única forma de VBG” (párr. 1301-1302)¹⁶.

Asimismo, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el día 16 de diciembre de 2014, en la sentencia contra el postulado Arnubio Triana Mahecha y otros, exintegrantes de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, menciona que en anteriores oportunidades dicha Sala se había ocupado en detalle sobre el análisis de la VBG referida

¹⁶ El apartado *ut infra* 2.3.2 del presente documento amplía la forma como en el proceso penal especial de Justicia y Paz se abordan distintas formas de VBG.

especialmente a los delitos sexuales en contra de las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano y aclara que en la presente decisión se profundiza en algunos aspectos relacionados con la VBG, y, especialmente, en algunas características de hechos criminales cometidos contra tres personas homosexuales en el municipio de Puerto Boyacá. Así, la Sala profundiza en el estudio sobre las violencias contra las personas LGBTI, lo que significa ampliar la conceptualización y alcance de la VBG hacia lo que denomina en el proveído *violencia basada en la orientación sexual o la identidad de género diversas* (VBOSIGD). En la opinión de la Sala, se hace necesario diferenciar entre la VBG y la VBOSIGD para poder entender los impactos diferenciados que ha dejado el conflicto armado en las mujeres, las niñas, los hombres, los niños y las personas con orientaciones e identidades de género diversas (párr. 954).

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el 02 de febrero de 2015 profiere la sentencia contra Ramiro Vanoy Murillo, postulado desmovilizado del Bloque Mineros de las AUC, en la cual expresa que toda vez que el proceso contra los comandantes de frente, mandos medios del máximo responsable Ramiro Vanoy Murillo, se encuentra surtiendo la alzada desde el 22 de agosto del año 2014 ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se trae al proceso lo documentado en el auto de control de legalidad de los cargos con relación al *enfoque diferencial* y de *género* para respaldar lo que obra en uno y otro proceso, y de allí cita que:

“Debido a que la violencia generada por los grupos armados al margen de la Ley, en este caso concreto el Bloque Mineros de las A.U.C., desde su contextualización, adoptó diferentes matices y afectaciones, según se tuviera la condición de las víctimas, es decir, su género, edad, origen étnico, orientación sexual, capacidades psico-motrices diversas, composición familiar, estado socioeconómico, etc.”.

La Sala aborda la aludida temática partiendo del “principio de enfoque diferencial” establecido en el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 y reiterado en los artículos 3 de la Ley 1592 de 2012 y 5 del Decreto reglamentario 3011 de 2013; asimismo, se dilucidará el tema relativo a las prácticas contra la libertad, integridad y formación sexuales como una de las manifestaciones de la violencia de género sobre las mujeres, poniéndose en evidencia en casos de prostitución forzada, esclavitud sexual, acceso carnal violento, acoso sexual, embarazos obligatorios, parto o aborto forzado, contagio de infecciones de transmisión sexual, entre otras. Para la Sala:

“El Enfoque Diferencial comporta un cúmulo de variables en cuanto a la multiplicidad de formas acerca de cómo se percibe la violencia, así como las secuelas concretas que deja la misma en las víctimas según sus experiencias y particulares condiciones, tanto en el plano personal como en el marco socio cultural; evidenciándose, como un elemento común, el desconocimiento de sus derechos y de ahí que sea necesario reconocer la forma en que cada víctima vivenció el conflicto, en pro de entender la magnitud de las violaciones y los bienes jurídicamente vulnerados con los actos perpetrados” (pág. 1265).

De igual manera, se cita a la teórica Marcela Lagarde (2009), en todo el apartado denominado *Enfoque Diferencial desde la Perspectiva de Género*, perspectiva que según la autora permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. En la sentencia se hace referencia a la manera como la autora analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres, el sentido de sus vidas, oportunidades y expectativas, las relaciones sociales complejas que se generan por razón de género, de igual manera, los conflictos cotidianos e institucionales que deben enfrentar y la manera de hacerlo. También se muestra en la sentencia en comento, las relaciones entre hombres y mujeres, esto es, los arreglos de género como el diario vivir de las mujeres antes de la llegada de los hombres del Bloque Mineros, el ámbito personal, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la participación o ejercicio de los derechos políticos, el tema de la escolaridad y el campo laboral, y la importancia de ello para la elaboración de un análisis desde la “perspectiva de género” (p. 1268 - 1269).

Por su parte, la decisión en contra del postulado Orlando Villa Zapata y otros, pertenecientes al Bloque Vencedores de Arauca proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá el 24 de febrero de 2015, contiene una conceptualización de la VBG en los siguientes términos: “se entiende como forma de violencia física, moral, psicológica, económica o de cualquier otro tipo, que se comete contra las personas, en razón de su género” (párr. 558). Y en el mismo párrafo

aclara que “este tipo de violencias no solo corresponde a las cometidas en contra de mujeres y niñas, porque el concepto de VBG abarca de igual manera toda una serie de violencias que afectan también a hombres y niños, o por razón de su identidad y orientación, a miembros de la población LGBTI”.

La conceptualización del género como “construcción de carácter social y cultural en torno a lo masculino y femenino, distintas prácticas, costumbres o creencias devienen en discriminación, estigmatización y todo tipo de consecuencias lesivas que padecen quienes son objeto de tal violencia” (párr 558), hace parte de una descripción sobre el fenómeno que puede presentarse “en cualquier escenario ordinario de la vida de las personas, tanto en el ámbito personal, como social, y laboral, y que trasciende a la esfera íntima y privada de las víctimas” (párr. 559). Ésta, y la anterior decisión amplían la discusión y el espectro para la aplicación y alcande de la VBG que otrora se restringía a hechos de VS y frente a víctimas mujeres y niñas.

La conceptualización de la VBG también se hace en la sentencia que condena exintegrantes de grupos subversivos pertenecientes al Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) y al Frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el proveído de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín del 16 de diciembre de 2015, donde se lee: “[I]a violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género que impacta de manera

negativa su identidad y bienestar social, físico o psicológico” (p. 238).

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el día 29 de febrero de 2016, emite la sentencia contra el postulado Ramón Isaza Arango y otros, pertenecientes a las ACMM, y en el proveído se toma como referencia el estudio realizado por la misma Sala en la sentencia de febrero 24 de 2014 proferida contra Orlando Villa Zapata y otros postulados del Bloque Vencedores de Arauca. En concreto, con ponencia de quien en la actualidad cumple idéntico cometido, al cual se remite la Sala para una consulta con mayor profundidad:

“la Violencia Basada en Género (VBG) se entiende como forma de violencia física, moral, psicológica, económica o de cualquier otro tipo, que se comete contra las personas, en razón de su género, sin que ello comporte la violencia ejercida con exclusividad contra mujeres y niñas, pues al referirse al género se hace de manera holística, esto es, con inclusión de hombres, niños y población LGBTI. Sin embargo, que dicho escenario se presenta en razón a que se trata de una colectividad históricamente puesta en condición de vulnerabilidad (...) y de la cual existe una mayor presencia de casos de violencia que resultan ser recurrentes en cualquier escenario de la vida cotidiana” (párr. 188).

Se menciona la VBG sin que ello comporte la violencia ejercida con exclusividad contra mujeres y niñas, pues al referirse al género se hace de manera

holística, esto es, con inclusión de hombres, niños y población LGBTI. En esta decisión se advirtió además que “la causa del tipo de violencia se debe a que, al ser el género una construcción de carácter social y cultural en torno a lo masculino y femenino, distintas prácticas, costumbres o creencias devienen en discriminación, estigmatización y todo tipo de consecuencias lesivas que padecen quienes son objeto de tal violencia” (párr. 189).

Formas de VBG descritas en jurisprudencia del proceso penal especial de Justicia y Paz

Distintas formas de VBG se describen en la jurisprudencia del proceso penal especial de Justicia y Paz sin que, como se contempla en el anterior apartado, tengan una “etiqueta” o “concepto” puntualmente señalando la *violencia basada en género*. Por ello, desde la sentencia contra el postulado Jorge Iván Laverde Zapata, excomandante del frente Fronteras de las AUC, proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá el 2 de diciembre de 2010, se hace claro que en la actuación de los GAOML existen intencionalidades con fundamento en el género para proceder con las acciones delictivas. El postulado condenado en la sentencia en comento manifiesta que su organización tiene por finalidad ideológica: “1) combatir la subversión y sus auxiliadores y 2) acabar con todo lo que afecta el orden social (delincuentes, consumidores de vicio, trabajadores sexuales, etc.)” (párr. 203). Lo segundo fue conocido bajo la mal denominada “política de limpieza social”, elevada por la Sala para el desempeño como “patrón

de conducta” que caracterizó el actuar del GAOML (párr. 32). En el hecho número 27 de la sentencia se resalta que:

“[e]l 13 de febrero de 2004, hacia las ocho de la noche, integrantes de las autodefensas unidas de Colombia bajo el mando de JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA, se desplazaron por la avenida 7 con calle 6 de la ciudad de Cúcuta en busca de tres mujeres que conforme a la orden dada por Carlos Enrique Rojas Mora alias “El Gato”, tenían que asesinar, por cuanto había información que en este sector de tolerancia se venían presentando robos. En su recorrido se detuvieron en la residencia Hayde, ubicada en la avenida 7 No 6-62 donde se encontraban algunas mujeres y procedieron a disparar en contra de Martha Rubiela Rodríguez Cote, Graciela Jaramillo Jaramillo y Blanca Bohórquez Guzmán, quienes fallecieron. Esta es otra forma de ‘limpieza social’ realizada por el frente Fronteras” (párr. 61-62).

Bajo esa política, el postulado Laverde Zapata “impartió las órdenes a los combatientes urbanos bajo su mando para que ejecutaran a quienes fueran señalados de ser ‘ladrones, viciosos, homosexuales, etc.’” (párr. 208). Si se analiza detenidamente, la sentencia en comentario al ser una de las primeras proferidas en el proceso penal especial de Justicia y Paz, contiene elementos relacionados con el género, pero estos elementos no son resaltados con la debida notoriedad que implica abordar específicamente la VBG cometida en el caso en contra de población LGBTI por razones discriminatorias y bajo la política del GAOML.

Ahora bien, con la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la decisión contra los postulados José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas del 01 de diciembre de 2011 se tiene la primera decisión que se ocupa de temas relacionados con VS en el proceso penal especial de Justicia y Paz. Como ya se citó, “es la primera providencia en el marco de la Jurisdicción de Justicia y Paz que se pronuncia sobre hechos de tal naturaleza [sexual], (...) la Sala de Conocimiento se refirió a los crímenes de violencia sexual, fundándose en la necesidad de visibilizar la problemática” (párr. 84)¹⁷.

Retomando lo relacionado con la política de la mal denominada “limpieza social”, se caracteriza por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá del 31 de enero de 2012, en la decisión contra el postulado José Barney Veloza García, desmovilizado de los Bloques Bananero, Calima y Centauros de las AUC, que, dentro de la estructura paramilitar, la mal llamada política de “limpieza social” se aplicaba como forma de control sobre territorios en los que hacían presencia los GAOML, lo que tiene por consecuencia que: “por iniciativa de actores privados de la zona y miembros de la fuerza pública, se asesinara a habitantes de la calle, trabajadoras y trabajadores sexuales, personas dedicadas al expendio minorista de estupefacientes y a los pequeños consumidores” (párr. 221). Nótese el alcance de la caracterización de esta forma de violencia que, si bien en el proveído no es objeto de judicialización algún caso de VBG, atraviesa la descripción de las motivacio-

17 De la misma manera se judicializa un caso de VS en la decisión del 7 de diciembre de 2011 contra los postulados Édgar Ignacio Fierro Flores y Andrés Mauricio Torres León.

nes que desde el género impactó específicas víctimas que padecieron violencia por parte de los GAOML.

Lo mismo se puede extraer de la sentencia en contra del postulado Edison Giraldo Paniagua, postulado del Bloque Héroes de Tolová, proferida el 30 de julio de 2012 en pronunciamiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá que también incorpora estos señalamientos de hechos cometidos bajo la mal llamada política de limpieza social. En el texto se lee: “por iniciativa de actores privados de la zona -comerciantes, empresarios, etc.- y de algunos miembros de la fuerza pública, asesinó a habitantes de la calle, trabajadoras y trabajadores sexuales, personas dedicadas al expendio minorista de estupefacientes y pequeños consumidores” (párr 95).

De otra parte, en la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 06 de diciembre de 2013 en contra de los postulados Armando Madriaga Picón y Jesús Noraldo Basto León, desmovilizados del Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC, se presenta una caracterización de la población femenina que habita en la región (párr. 217-218). En especial se destaca como patrón cultural de crianza:

“la sumisión y dependencia de la mujer respecto del hombre, esposo o compañero permanente, motivo por el que deben pedir permiso cuando van a salir de casa o solicitar la compañía de un varón, situación que es tolerada por la inseguridad generada por la presencia de los grupos al margen de la ley” (párr. 220).

De igual manera, se retoma un informe de la policía judicial que fue presentado en audiencia de control formal y material de cargos (realizada el 20 de septiembre de 2012) para describir distintas pautas de control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres y otras formas de VBG. Todo ello debido a que los controles y posteriores sanciones tenían distintas motivaciones con fundamento en el género porque hombres y mujeres se castigaban de manera diferente, lo que incluye VBG por la orientación sexual, la violación de horarios impuestos para permanecer en las calles o veredas, por salir de noche, estar en los bares, o por mirar a la cara a los paramilitares; en su forma de intervención en la vida íntima de las parejas, por la infidelidad o debido a las relaciones que se calificaban como “comprometedoras” de cónyuges o novios en sus relaciones interpersonales; asimismo, por atribuciones de roles de género, “a los hombres por llevar el cabello largo, por tener tatuajes y aretes” (párr. 223).

Entre los párrafos 224 y 225 del proveído se describe la manera cómo las mujeres eran objeto de sanciones por utilizar minifalda o blusas escotadas, situaciones que determinaban castigos como cortes (heridas) en el estómago provocadas con cuchillas de afeitar, entre otras, mientras que otras mujeres “fueron accedidas carnalmente de manera brutal, torturadas, les cortaban los senos”. El control ejercido por los GAOML les permitió valerse de su dominio sobre los territorios y las poblaciones para realizar fiestas, obligar la asistencia de mujeres que, en algunos casos, secuestradas, eran obligadas a desfilas desnudas. En el proveído se menciona además que: “se imponían sanciones a las mujeres que no aceptaban relaciones

sentimentales, de amistad, o familiares con los paramilitares; otras eran castigadas por ser novias y/o amigas de los paramilitares; también fueron obligadas a cocinar y lavar la ropa de los miembros de la organización sin recibir a cambio una remuneración” (párr. 224). Al mismo tiempo, mujeres trabajadoras sexuales tenían controles por parte del GAOML,

“(…) les exigían carné de sanidad y aquellas que padecieran de enfermedades infecto contagiosas eran asesinadas; también castigaban severamente, en ocasiones con la muerte, a aquellas mujeres que consumieran algún tipo de alucinógenos; de igual manera, eran discriminadas y abusadas sexualmente por los miembros de las autodefensas; no les pagaban por sus servicios y eran maltratadas física y psicológicamente” (párr. 225).

Finalmente, concluye la Sala que “la mujer fue atropellada en toda su integridad durante la presencia del Bloque Héctor Julio Peinado Becerra en el marco del conflicto armado interno” (párr. 225)¹⁸.

La decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá del 06 de diciembre de 2013 contra los postulados José Baldomero Linares y otros, exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, traen como mención el caso de las “niñas calvas” como forma de castigo a la población:

18 A pesar de tener riqueza descriptiva en los elementos tomados en el informe, no se judicializan casos en la sentencia que connoten VBG. Este aspecto es destacable en la decisión en comento, toda vez que se aborda el tema que dimensiona la violencia ejercida por los miembros del Frente Héctor Julio Peinado Becerra en contra de mujeres y niñas y población LGBTI, “pese a que, en la audiencia de la legalización de los cargos formulados a Juan Francisco Prada, se informó que no se había presentado este tipo de crímenes” (párr. 216).

“Se conoce al grupo de “niñas calvas” a una serie de mujeres sometidas a trabajos forzados, violaciones y distintas formas de castigo, como ponerlas a hacer obras, a picar piedra, a restaurar calles y “embellecer” la ciudad de Puerto Gaitán, entre otras. Esto en el contexto que Puerto Gaitán no tenía iluminación hasta el año 2000, y este grupo paramilitar se propuso construir la infraestructura eléctrica de la zona. (...) En el caso de las menores y mujeres jóvenes que tenían retenidas unas niñas, éstas fueron rapadas y obligadas a trabajos forzados como forma de castigo y visibilizar ante la población que estaban bajo una forma de sometimiento, aunque el mismo Baldomero Linares manifestara que lo hacían por un asunto de “higiene”. (...) Por su lado, a los menores no se les permitía actitudes que para los paramilitares eran consideradas “desviadas”: como que las menores fueran “desordenadas en su vida individual”. Tenían cero tolerancia con la prostitución, o con los menores que estuvieran por la calle, entre otras conductas, hacían convocatorias para que la población limpiara las calles, de tal forma que, como lo afirmó la Fiscalía, el control social era definitivo sobre los lugares de su dominación, como en Puerto López y Puerto Gaitán” (párr. 754-755).

El control ejercido por el GAOML demostró como actor armado su poder para mantener el “orden público” con la regulación y establecimiento de mecanismos para la solución de conflictos y la instauración de códigos de conducta (párr. 759). Las formas de control ejercidas también se manifestaron en órdenes para que

los hombres no pudieran tener o llevar el pelo largo, o usar “vestuario inadecuado” (párr. 762).

Asimismo, en el caso de la decisión tomada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de mayo de 2014, la cual proclamó la sentencia contra el postulado Ramón María Isaza y otros desmovilizados de las ACMM, se relata que los hechos que son materia de control de legalidad demostraron que la comisión de los hechos corresponde a patrones de conducta distintivos de las ACMM consistentes en:

“actos de violencia contra la vida y la persona, en particular homicidios en todas sus formas, descuartizamientos, mutilaciones, tratos crueles y torturas cometidas bajo el supuesto infundado y no razonable de que la víctima era colaboradora, informante, simpatizante, auxiliadora o financiera de los grupos subversivos; también, cometidos por prejuicio contra toda persona considerada como “nociva” para la sociedad, como: delincuentes comunes, expendedores o consumidores de sustancias alucinógenas, vagabundos, homosexuales, transexuales, violadores y todo aquel que se enmarcaba dentro de la mal llamada ‘limpieza social’” (párr. 845).

De acuerdo con las versiones del postulado Isaza Arango, “era una política de las autodefensas y que había sido una orden impartida a los diferentes comandantes de frente en el momento de la expansión de los grupos armados ilegales” (párr. 845).

La decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 29 de septiembre de 2014 en contra del postulado Guillermo Pérez Alzate y otros, pertenecientes a las AUC, al grupo denominado Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar, en el cual se describe la trayectoria del Bloque Sur Putumayo, y se refiere a que:

“los hechos de violencia sexual en dicho bloque no sólo involucraron mujeres de la población civil. Múltiples entrevistas, conversaciones y talleres realizados por Memoria Histórica mostraron violencias desplegadas por los paramilitares sobre mujeres de las FARC capturadas en combate. En ese marco, la mutilación de órganos sexuales, el cerceamiento de los senos, el empalamiento y la violación sexual fueron dispositivos de terror empleados para escarmentar a las combatientes y enviar mensajes desmoralizantes al enemigo. Sobre el cuerpo de las guerrilleras, los integrantes del grupo armado ilegal continuaron la batalla” (párr. 329).

Por otra parte, se hace mención al Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, el cual describió la situación de las niñas y adolescentes reclutadas forzosamente por los grupos armados ilegales así:

“La violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas que son reclutadas forzosamente por los grupos armados al margen de la ley, violencia sexual que incluye en forma reiterada y sistemática:

(i) la violación, (ii) la planificación reproductiva forzada –a través de distintos medios, pero principalmente mediante la colocación de dispositivos intrauterinos y el uso de otros métodos anticonceptivos, en contra de su voluntad y sin información sobre las consecuencias de su implantación, en tanto “orden” de obligatorio cumplimiento-, (iii) la esclavización y explotación sexuales, (iv) la prostitución forzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por parte de los jefes o comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto forzado y (ix) el contagio de infecciones de transmisión sexual. Se ha reportado por numerosas entidades nacionales e internacionales, de manera consistente y reiterada, que los miembros tanto de las guerrillas –de las FARC y el ELN- como de los grupos paramilitares –desmovilizados y en proceso de reconfiguración- que operan a todo lo largo del territorio nacional llevan a cabo este tipo de actos en forma sistemática en el curso de sus actividades criminales” (párr. 947).

Nuevamente, el tema sobre la mal denominada política de limpieza social aparece en una decisión en el proceso penal especial de Justicia y Paz en la sentencia de la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla del 21 de octubre de 2014 contra el postulado Janci Antonio Novoa Peñaranda, en la cual se hace referencia a: “las actividades ilegales que ejercen particulares y algunos agentes del Estado en contra de personas que son señaladas de delincuentes, prostitutas, homosexuales, gamines o cualquier estigma que les permita justificar sus acciones violen-

tas que casi siempre terminan en homicidios o lesiones físicas graves” (núm. 4.1.3., p. 30)¹⁹.

Por su parte, la segunda sentencia en contra del postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros, pertenecientes al Bloque Catatumbo, Bloque Norte, Bloque Héroes de los Montes de María y Bloque Córdoba, proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 20 de noviembre de 2014, se refiere como forma de expresiones de VBG lo siguiente:

“[U]n elemento determinante en el tipo de prácticas que emplearon los miembros de las estructuras paramilitares para afianzar su poder, fue la defensa de una noción de orden y control social fundado en la idea de masculinidad y feminidad. El efecto más relevante es que el despliegue de las estructuras paramilitares en la región Caribe, tendió a conservar como hilo conductor la comisión de graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, vinculando directamente a la población civil.

Prácticas además de tener un alto contenido ideológico y cultural, no solo irradió otros campos de la vida social, sino que involucró criterios propios de los crímenes de lesa humanidad, en términos de su generalidad y sistematicidad, violatorios al DIH.

19 Sobre esta sentencia es importante acuñar la denominación del mal llamado Bloque Resistencia Tayrona que se consagra, toda vez que, en audiencia del 21 de marzo de 2013 en el proceso de la misma Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Distrito Judicial de Barranquilla en contra el postulado Hernán Giraldo Serna y algunos desmovilizados de este GAOML, intervino un indígena solicitando que en adelante no se mencionara el nombre que identifica a su pueblo como etiqueta para un grupo armado ilegal.

El ataque persistente y sistemático y extendido en el despliegue paramilitar al incorporar nociones de un ideario sobre contenidos de género, privilegió el empleo de la violencia sexual y las conductas de VBG.

Dichas prácticas lograron cobrar relevancia para el despliegue de las estrategias de guerra y obtener ventajas al interior del conflicto. Las finalidades que se perseguían a través de la violencia sexual ilustra el amplio radio de acción que significaba instrumentalizar personas a través de un criterio asociado al género. El interior de la organización armada fue un escenario importante en el que dio esta circunstancia, imponiendo formas de cohesión, regulación y castigo, éste último en un marco disciplinar.

Otro empleo sistemático de esta estrategia de guerra fue aquella que se vinculó a la idea del “enemigo” para provocar su exterminación o su humillación. De alguna forma, las lealtades que se buscaban construir al interior de la población civil, alimentaron todo tipo de propagandas fundadas en la barbarie y el temor de la represalia y la intimidación. La violencia sexual fue una herramienta de degradación que tuvo un alto contenido comunicante en ese sentido.

En este punto es importante resaltar que las especificidades de la cultura y la composición familiar en el Caribe colombiano, ha girado justamente en torno a la centralidad de la mujer. Este rasgo fue empleado en el accionar paramilitar como una fuente para provocar un dolor intenso en el contrario, exterminando un elemento que cohesionaba y empoderaba el tejido social desde sus bases.

De hecho, aquellas que eran “representativas-emblemáticas de la región fueron vulneradas por los actores armados en su condición de líderes y pioneras de sus comunidades, barrios y veredas con el fin de interrumpir y echar por tierra los procesos de transformación” (párr. 1290-1294).

En el mismo documento se hace alusión a las diferentes formas y expresiones de VBG, así, se menciona que las conductas involucran no solamente la persecución y sometimiento de la población o que se utiliza como forma para disciplinar las tropas, sino que también “se empleó como una forma de brindar una recompensa o halago para los líderes y comandantes del aparato armado; actos a los que en algunos casos debieron asistir la comunidad en espacios abiertos y públicos” (párr. 1295). De igual manera, la sentencia considera que la VBG instrumentaliza el concepto de lo “femenino” como parte de la estrategia paramilitar que se direccionó al establecimiento de relaciones con la población civil, la clase política, las organizaciones de carácter privado, y desde luego, para afectar y atacar al enemigo. Se lee en el proveído:

“[L]a evidencia indica que hubo en repertorio de prácticas violentas que descansaron sobre las bases de la manipulación de valores que encierra la pertenencia a un grupo cuya identidad ésta determinada por su género, no solo para conseguir fines estratégicos de la organización armada, sino como el aprovechamiento oportunista de ejercer y detentar la fuerza en medio de la guerra” (párr. 1296).

En la sentencia contra el postulado Arnubio Triana Mahecha y otros de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el día 16 de diciembre de 2014 se expone que:

“en un contexto de conflicto armado, hombres y mujeres, niños y niñas, experimentan formas de violencia basadas en género y violencia basada en la orientación sexual o identidad de género diversas. (...) La violencia contra las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, ejercida por los actores armados en Colombia, ha demostrado que tiene distintas formas de ser ejercida, según la condición de género, la orientación sexual y la identidad de género diversas, y el tipo de actor armado o victimario. Incluso, las distintas violencias también se evidencian en los casos de violencia contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, no obstante los pocos estudios sobre la materia. Merece especial atención el caso de la violencia sexual contra hombres y niños, por la información escasa que se tiene al respecto. El estudio de los hombres y niños, no sólo como agresores, víctimas, o actores armados, sino en su condición de hombres, es decir, como personas con identidades de género, normativas o no normativas, también se sitúa en el marco de procesos culturales y relaciones de poder en la sociedad” (párr. 956).

De acuerdo con los resaltados que hace notar la Sala, la VS en el contexto del conflicto armado en Colombia afecta a mujeres y hombres, niños y niñas y

se ha tenido en el olvido, porque en el país ha estado históricamente adherido el discurso y las prácticas de discriminación. Por esta razón, actos de VS que se deriven de la violencia sociopolítica y del conflicto armado debieran visibilizarse al no ser ajenos a la historia social y política, por lo cual se debe partir de la discriminación histórica basada en la pertenencia al sexo femenino, también a las situaciones de riesgo por razones de género, etnia y cultura (párr. 968).

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el 02 de febrero de 2015, profiere la sentencia contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo postulado desmovilizado del Bloque Mineros de las AUC. En esta sentencia se hace un completo análisis en el capítulo titulado: “Enfoque diferencial y de género respecto de las macrocriminalizaciones y victimización del Bloque Mineros” (p. 1265 y ss.), en el cual se caracteriza desde la perspectiva de género, en primer lugar, “la mujer en la zona de injerencia del bloque mineros, antes de la llegada del grupo armado” (p. 1274 y ss.) a partir de la descripción sobre las generalidades del contexto en la región (p. 1274); también sobre aspectos que se derivan de las familias por su número y sus consecuencias frente a roles de proveedoras que las mujeres deben asumir para superar la pobreza, o la sumisión frente a hombres que las superan en edad (p. 1275). Igualmente, se describe el caso de mujeres cocinando para hombres que trabajan en laboratorios en los cuales se procesa la hoja de coca, la situación de familias afrodescendientes y las afectaciones cuando uno de sus miembros padece la violencia directa para insistir en que esta situación requiere un análisis al sujeto colectivo de reparación (p. 1275-1277).

De igual manera, el análisis se extiende al rol del trabajo y de la mujer en las comunidades afectadas, la escolaridad de las mujeres y la situación de violencia intrafamiliar (p. 1277- 1285); se analiza con perspectiva de género, los “derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la zona de injerencia del Bloque Mineros” (p. 1286 y ss.); y en la revisión de los derechos políticos y de participación, se afirma que la violencia contra la mujer es: “una violencia cultural, de discriminación que se va generando en los distintos espacios, educativos, familiares e institucionales y que se incrementan cuando llegan uniformados y armados, es decir, prevalidos de todo ese poder” (p. 1288).

En segundo lugar, se realiza el análisis de la situación de la mujer luego de la llegada a la región del grupo denominado Bloque Mineros (p. 1289 y ss.) destacando varias formas de VBG que al final le permiten constatar la presencia de un “patrón de macrocriminalidad” consistente en la comisión de delitos que involucran VBG. La argumentación comienza con la descripción de la limitación del “derecho de locomoción” de las mujeres, también padecido por comunidades afrodescendientes (p. 1291 y ss.); se suman las anotaciones sobre las afectaciones a su “derecho de reunión y asociación”, claramente limitado porque en el Municipio de Ituango se puso un grafiti que indicaba: “muerte a mujeres chismosas”, y se prohibía la reunión de las mujeres (p. 1293); la limitación de la “participación en política” porque el ejercicio estaba cooptado por personas al mando y al servicio del postulado Ramiro Vanoy Murillo (p. 1293-1294); la estigmatización de las mujeres que acudían a bares y discotecas (p. 1294); la

interceptación de las comunicaciones y otras restricciones (p. 1294 y ss.).

De la misma manera, se relata que las mujeres padecen estigmatizaciones por estereotipos relacionados con la vida laboral, por lo cual fueron sometidas a servicios domésticos en campamentos y a ejercer ciertas formas de oficios por razón de su género, así cocinar o barrer (p. 1295). También se nombran los “castigos” que, por razones de género, se aplicaban en contra de las mujeres, como, por ejemplo, ser obligadas a barrer cuando se les acusaba de “chismosas” o a exhibir letreros con los que debían transitar por el pueblo (p. 1297-1298). Como afrenta contra la vida de las mujeres en situación de “discapacidad”, algunas fueron asesinadas, y se nombran tres casos de mujeres con discapacidad mental, no sin advertir en el proveído que:

“los miembros del Bloque Mineros de las AUC aludieron a que nunca tuvieron una directriz respecto a las mujeres discapacitadas y que no era política de los comandantes atentar en su contra, realmente se evidenció lo contrario en los casos reseñados y en las declaraciones de las víctimas” (p. 1299).

El análisis de la Sala menciona la persecución a mujeres dedicadas a la “brujería” (p. 1299); y también la persecución de mujeres activistas defensoras de derechos humanos y promotoras de salud (p. 1300). En el análisis también se resalta la persecución a mujeres por su condición de indígenas, al punto de que en San José de Uré:

"se presentó el caso de un hombre de las auto-defensas que violó a una mujer de la comunidad indígena; al respecto, una lideresa señaló que 'paso una vez, fue en una casa, la violó porque al hombre le simpatizó y la violó, yo creo que lo castigaron porque nunca más se volvió a ver por aquí, a él lo mataron, a él le decían el flaco, creo que era su costumbre violar mujeres y cuando el grupo se enteró lo mataron'" (p. 1301).

Se encuentra también en el proveído un apartado para analizar las "relaciones entre los miembros del Bloque Mineros y las mujeres de la población civil", lugar en el cual se puntualiza que:

"[I]os postulados del citado bloque señalaron que estaban permitidas las relaciones afectivas entre los patrulleros y comandantes del bloque paramilitar y las mujeres de la población civil. Sin embargo, en el fondo subyace una falta de voluntad de las víctimas y un sometimiento debido al ambiente de coacción que generó la presencia del grupo armado" (p. 1301 y ss.)²⁰.

Entre otras descripciones sobre las relaciones establecidas por los miembros del Bloque Mineros, se resalta que de acuerdo con afirmaciones retomadas de las entrevistas, en la sentencia se hace la afirmación de que: "la mayoría de hombres paramilitares buscaban niñas entre los doce y los trece años" (p. 1301). Frente a sus parejas: "los varones paramilitares daban muerte a sus

20 Sobre este particular es importante resaltar que con la Ley 1719 de 2014 se introduce en el CP el artículo 212A que define por violencia: "el uso de la fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación; la detención ilegal; la opresión psicológica; el abuso de poder; la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento".

mujeres cuando éstas les eran infieles y que resultaba común que los hombres se embriagaran y las golpearan” (p. 1304). También se transcriben afirmaciones sobre el “ofrecimiento de menores a los paramilitares” (p. 1306), lo que trae como consecuencia que sea el cuerpo de la mujer, “un bien con el cual mercadear, perdiendo quienes eran sometidas a dichas conductas el control o poder de disposición sobre su mismo cuerpo” (p. 1307).

Sobre VS, la sentencia en comento recuerda que hace referencia a “todo acto de coerción que se ejecuta en una persona y que tiene como finalidad que la misma asuma un comportamiento sexual en contra de su voluntad” (p. 1307). Asimismo, se recuerda que es ejercida mediante actos agresivos, en condición de inferioridad física, psíquica, cronológica o de relaciones de poder desiguales por razón del género. El análisis sobre la VS cometida por los miembros del GAOML comienza por la indagación sobre su tolerancia o no, llegando a la conclusión de que se ejecutaba a los autores de hechos de este tipo de violencia dependiendo de la utilidad para el grupo armado. Así:

“[e]xistían comandantes como “Villegas” que decía no perder a un hombre importante para el Bloque por haber violado a una mujer. En cambio, si el miembro no significaba mayores resultados para el Grupo, sí se ordenaba su muerte. También existe un marcado déficit del Estado en cuanto a la atención de las víctimas del conflicto armado, especialmente con aquellas que han sido violentadas sexualmente, debido a la falta de acompañamiento y recuperación que les permita crear ambientes de confianza y, por ende, convencerles de la importancia de denunciar los casos” (p. 1309).

Además de lo reconocido dentro de las formas de VBG en el proceso, se toma en cuenta otras maneras de afectar y agredir a las víctimas con mutilación genital, bailes y desnudez obligada (p. 1311).

La sentencia contra el postulado Vanoy Murillo, también resalta la forma de comisión de VBG con la “esclavitud sexual”, a la que dedica un apartado para el análisis comenzando por la definición de la misma como:

“fuerza o coacción, física o moral, que se impone a una persona a efectos de controlar su sexualidad, en favor propio o de terceros; conducta que no sólo atenta contra la dignidad, la libertad, integridad y formación sexuales, sino que, cuando se ejecuta en el marco de un conflicto armado, vulnera los derechos de las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; de ahí que haya sido tipificada como delito en el Código Penal actual (Ley 599 de 2000) de la siguiente manera:

‘Artículo 141. Prostitución forzada o esclavitud sexual. (...) El que mediante el uso de la fuerza y con ocasión y en desarrollo del conflicto armado obligue a persona protegida a prestar servicios sexuales incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes’” (p. 1314-1315).

Por parte del GAOML se cometen hechos constitutivos de “esclavitud sexual”, lo mismo, hechos constitutivos de “prostitución” (p. 1317-1324) (estas conductas estaban reunidas en un mismo tipo penal, pero con la Ley 1719 de 2014 se separan en el modificado artículo 141 para dejar allí la “prostitución forzada”²¹, y el adicionado artículo 141A para la descripción típica de la “esclavitud sexual”²²).

El análisis con perspectiva de género se hace para establecer la relación entre el género y la violencia que deviene en “desplazamientos forzados de las mujeres”. Sobre el particular:

“[s]e supo acerca del caso de un sujeto llamado Alfonso Berrio, quien antes de la llegada de Vanoy Murillo, se apoderó de muchas propiedades, empleando como método el asesinato de los propietarios y así poder negociar con las viudas. Sin embargo, no se ha establecido si ese tipo de comportamientos era una práctica del Bloque Mineros. También se presentaron casos de desplazamiento cuando las jóvenes eran acosadas sexual o afectivamente por paramilitares, casos en los cuales los padres las sacaban de sus sitios de residencia habitual buscando protegerlas” (p. 1324).

21 Prostitución forzada en persona protegida: “El que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, obligue a persona protegida a prestar servicios sexuales, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

22 Esclavitud sexual en persona protegida: “El que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, ejerza uno de los atributos del derecho de propiedad por medio de la violencia sobre persona protegida para que realice uno o más actos de naturaleza sexual, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

En la descripción de casos de homicidios relacionados con género, se mencionan casos en los cuales mujeres son asesinadas por celos o infidelidad (p. 1325). Ahora bien, llama la atención los casos de mujeres que son asesinadas como escarmiento a sus parejas, hechos en los que se relata que buscando a una persona: "realizaron el homicidio [de su mujer] como una represalia para que 'a él le doliera'" (p. 1326). Los casos mencionados no son objeto de sentencia, sin embargo, denotan que:

"asesinaban primero a la esposa, buscando con ello enviarle un mensaje a su pareja; lo anterior, por cuanto en el sistema patriarcal que imperaba en la región, los hombres cumplían un rol de protección hacia las mujeres, a quienes consideraban el '*sexo débil*', por lo que el mensaje que se quería transmitir, era el atinente a que el hombre no pudo protegerla, '*fue asesinada su esposa y no hizo nada por protegerla, lo que es entendido como ser menos hombre*'" (p. 1326).

También fueron victimizadas mujeres embarazadas y en un caso judicializado se resalta que a una víctima: "le hicieron una herida en su vientre para sacarle el producto de su gestación de seis meses; los enterraron a una altura de 10 centímetros, los decapitaron, les cercenaron los brazos y los cortaron en pedazos" (p. 1042). Y el análisis sobre las formas de VBG en contra de las mujeres en la sentencia contra Vanoy Murillo muestra afectaciones a su escolaridad por la presencia del GAOML (p. 1328 y ss.); de igual manera, cifras sobre situaciones y hechos de violencia intrafamiliar (p. 1329 y ss.).

Finalmente, el proveído cuenta con un apartado sobre VBG contra “población LGBTI” documentada por las confesiones de postulados en el proceso (p. 1331 y ss.) y de entrevistas en las que se da a conocer los asesinatos cuya motivación se manifiesta en la política de la organización:

“era política de los paramilitares que no se aceptaban los homosexuales, por ello, reparaban panfletos en los cuales se les amenazaba con la muerte o se les obligaba a desplazarse; asimismo, se estableció como regla que los hombres de la población civil debían tener el pelo bien corto, no usar aretes y estar bien presentados” (p. 1332).

De otro lado, la decisión en contra de los postulados Orlando Villa Zapata y otros, postulados desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca, proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá el 24 de febrero de 2015, realiza aproximaciones descriptivas a distintas formas de VBG susceptibles de cometerse en el contexto del conflicto armado. Así:

“la violencia sexual, la violencia psicológica y física por cuestiones de género, el femicidio y sus dinámicas, hacen parte del espectro para el análisis de la VBG en contexto de conflicto armado a través de pautas de control, en relación con el desplazamiento y la desaparición forzada, la ocurrida en relación con el reclutamiento y la militarización de la vida; de igual manera, la que ocurre en contra de personas pertenecientes a la población LGBTI y los hombres” (párr. 567).

En primer lugar, por VS se define “cualquier acto, tentativa o amenaza de naturaleza sexual que se comete contra una persona, en contra de su voluntad (bien sea por coacción o consentimiento condicionado), independientemente del tipo de relación que tenga con su(s) presunto(s) victimario(s)” (párr. 568). La Sala advierte que, si bien está constituida por actos de naturaleza sexual entre el cuerpo del victimario y el cuerpo de su víctima, “también se relaciona con una amplia gama de acciones incluso sin necesidad de entablar contacto físico y cuya afectación incide directamente sobre la integridad sexual de las víctimas” (párr. 568). En el proveído se señalan, en los subsiguientes párrafos, definiciones contenidas en instrumentos del DPI y se describen conductas constitutivas de violación (párr. 569), esclavitud sexual (párr. 570), prostitución forzada (párr. 571), embarazo forzado (párr. 572), esterilización forzada, (párr. 573), aborto forzado (párr. 574), y se resalta que “actos asociados con la desnudez forzada, el matrimonio o cohabitación forzosa, el tráfico de personas, el hostigamiento sexual y la mutilación genital, también hacen parte de este tipo de violencia y la forma de desenvolver el tratamiento a sus víctimas debe recibir la misma importancia que las definidas explícitamente por el derecho internacional” (párr. 575).

En segundo lugar, se describe la “violencia psicológica por cuestiones de género”. Este tipo de violencia está:

“asociada con aquellas conductas que atacan de manera directa la salud mental de las víctimas, sin concurrir en algún tipo de contacto físico con las mismas. La manera más común

de evidenciar violencia psicológica se presenta por las agresiones verbales por cuestiones de género, ya que a través de éstas se logra desvalorizar, humillar y culpabilizar a las víctimas, por las condiciones en las cuales son puestas en el contexto de guerra, y por las categorizaciones a las que se encuentran expuestas” (párr. 578).

En tercer lugar, se describe la “violencia física como violencia de género”, que ocurre dado el uso de la fuerza y cometido de manera intencionada que puede darse a través de golpes, bofetadas, lesiones con objetos contundentes, armas blancas o de fuego, puñetazos, quemaduras, cortaduras, empujones, entre otros. Ahora bien, “es una forma complementaria de violencia que facilita la comisión de hechos asociados a las agresiones sexuales o con el femicidio, al poner a las víctimas en una mayor situación de vulnerabilidad e indefensión, de tal forma que no ponga resistencia” (párr. 582).

En cuarto lugar, el proveído realiza una descripción extensa del femicidio/feminicidio, toda vez que con esta categoría: “[se da] cuenta de las muertes violentas que se cometen contra las mujeres y niñas en razón de su género, y como resultante de toda una serie de violencias que desencadenan (o se tienen la firme intención de desencadenar) en consecuencias fatales” (párr 583). Con cita a la discusión sobre el feminicidio en el caso fallado por la Corte IDH, González y otras vs. México (párr. 584-587), la Sala luego acoge la definición de la Comisión Interamericana de Mujeres para describir por tal: “(...) la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interper-

sonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión” (párr. 589). Así las cosas, no toda muerte de mujeres o niñas implica estar frente a un feminicidio, sino que se requiere conocer las circunstancias del contexto y las razones por las cuales esta conducta se comete (párr. 590).

La Sala, de acuerdo con el Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género desarrollado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), puntualiza los rasgos para conocer el feminicidio, que puede darse “tanto en el ámbito personal como en el ámbito social o público, dependiendo de las modalidades delictivas por las cuales se desarrollan” (párr. 591). De esta manera, éste puede ser íntimo, no íntimo, infanti, familiar, por conexión y sexual sistémico (párr. 592-597). También son rasgos, el considerar que el feminicidio “tiene mayores riesgos de presentarse en escenarios de catástrofes naturales, emergencia y conflictos armados” (párr. 599); “en países donde los niveles de femicidio son altos, se puede concluir que el Estado favorece las condiciones para que se cometan esta clase de delitos” (párr. 600); “la mayoría de los femicidios quedan impunes debido, entre otras causas, al limitado acceso de las mujeres a la justicia, así como a los prejuicios de género durante los procesos judiciales, policiales y fiscales” (párr. 601); “es un fenómeno que generalmente va de la mano con conductas agravantes asociadas a otras formas de violencias de género

contra las mujeres, en especial las asociadas con la VS (principalmente casos de violación, esclavitud sexual o prostitución forzada, desnudez forzada)” (párr. 602); y las “condiciones como la edad, la raza, la pertenencia a algún colectivo ideológico, religioso, político o la identidad y expresiones sexuales de distinta índole pueden incidir aún más para la comisión de delitos de femicidio” (párr. 603). Este apartado culmina con el análisis de la Sala sobre el feminicidio en los conflictos armados y, especialmente, en Colombia (párr. 604- 626).

Aspectos sobre género se tienen en el CP con el tercer numeral de las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58, toda vez que, recuerda el proveído, se comete el hecho por móviles de discriminación referidos, entre otras circunstancias, al sexo u orientación sexual (párr. 619). De la misma manera, se recuerda que la incorporación del agravante número 11 para el homicidio en el artículo 104 que realiza la Ley 1257 de 2008, atiende la condición de mujer cuando sobre ella, por razón de género, recae el hecho por el cual pierde la vida (párr. 620)²³.

En quinto lugar, se insiste en que, la “VBG y su asociación con la desaparición forzada de víctimas en el desarrollo del conflicto armado poco ha sido explorada en Colombia, en gran medida por las dificultades de la investigación para el hallazgo de los restos y posteriormente identificación de rastros que logren dar cuenta de posibles femicidios y/o agresiones de naturaleza sexual” (párr. 627).

23 En la fecha en la cual se produce la sentencia se tenía en proyecto la ley que, sancionada en 2015 con el número 1761, incorpora el artículo 104A al CP con la descripción de la conducta típica de “feminicidio”.

Finalmente, en el apartado sobre la “ampliación de las formas de violencias por cuestión de género”, la Sala llama la atención para que se tenga en cuenta que en conflicto armado pueden darse formas de VBG manifestadas en “pautas de control social en la vida de las mujeres y niñas”, por el cual el “control sobre la manera de vestirse, de expresarse y de comportarse en público constituye una forma de VBG en la medida en que se posicionan los roles tradicionales de perspectivas masculinas sobre lo femenino, y en donde se imposibilita un libre desarrollo de las cualidades y de la personalidad por el dominio y atribución de la construcción social sobre el rol con base en género” (párr. 638). El incumplimiento de estas pautas de control desencadena “una serie de castigos por parte de los grupos armados, violencia que no solamente se agota en hechos de naturaleza sexual, sino que en muchas ocasiones va dirigido a generar una sanción y un castigo público (como barrer las calles, cortar su cabello, obligarlas a comportarse y expresarse de manera distinta, etc.)” (párr. 638).

Aunado a lo anterior, se tiene como otra forma de VBG en el conflicto, la “militarización de la vida”, por ello:

“[e]n las regiones que padecen el conflicto armado, suele ocurrir que la presencia del Estado se percibe muy fuertemente en lo militar y ésta termina siendo la única autoridad vigente, lo que implica el sometimiento de las mujeres a estos patrones de dominación masculinos y estar más propensas a los abusos de poder y a la violencia que estos patrones entrañan” (párr. 641).

Frente al desplazamiento forzado, la Sala resalta la situación de mujeres y niñas que esta condición: “deben encarar la situación de la falta del compañero y ser cabeza de familia, reclamar tierras sin contar con los títulos que se las acreditan, no lograr accesos básicos a servicios de salud y no contar con redes sociales de apoyo ni con familiares” (párr. 643), y recuerda que precisamente por la condición padecida por víctimas en el conflicto armado, se pronunció la Corte Constitucional a través del Auto 092 del 18 de abril de 2008 en cuya referencia se señala la “protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión” (párr. 644). En el Auto se reconoce que:

“por causa de su condición de género, las mujeres están expuestas a riesgos particulares y vulnerabilidades específicas dentro del conflicto armado, que a su vez son causas de desplazamiento, y por lo mismo explican en su conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres” y se propugna para la prevención ‘del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres’, y ‘la atención a las mujeres que son víctimas del desplazamiento forzado y la protección de sus derechos constitucionales fundamentales’”(párr. 645).

Para la Sala de Justicia y Paz, son relevantes los hallazgos de la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008 porque identifican los “riesgos particulares y vulnerabilidades específicas dentro del conflicto armado”. Por lo mismo, cita in extenso el apartado II1 del Auto resaltando que existe:

“(...) (i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales; (iii) el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia; (iv) los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos ilegales enemigos; (v) los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del terri-

torio nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x) el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento” (párr. 647).

Como formas de VBG se tiene en la comentada decisión contra el postulado Orlando Villa Zapata y otros, la relación con el “reclutamiento”, circunstancias en las cuales, con fundamento en el Auto 092 de 2008, mujeres y niñas de manera sistemática sufren:

“(i) la violación, (ii) la planificación reproductiva forzada –a través de distintos medios, pero principalmente mediante la colocación de dispositivos intrauterinos y el uso de otros métodos anticonceptivos, en contra de su voluntad y sin información sobre las consecuencias de su implantación, en tanto –orden de obligatorio cumplimiento-, (iii) la esclavización y explotación sexuales, (iv) la prostitución forzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por parte de los jefes o comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto forzado y (ix) el contagio de infecciones de transmisión sexual.

Se ha reportado por numerosas entidades nacionales e internacionales, de manera consistente y reiterada, que los miembros tanto de las guerrillas –de las FARC y el ELN- como de los grupos paramilitares – desmovilizados y en proceso de reconfiguración- que operan a todo lo largo del territorio nacional llevan a cabo este tipo de actos en forma sistemática en el curso de sus actividades criminales” (párr. 655) ²⁴.

De la misma manera, frente al “reclutamiento” y con base en el género, la Sala resalta que:

“la situación también afecta a los jóvenes toda vez que, por falta de oportunidades educativas y laborales, la influencia de los medios de comunicación que ofrecen modelos de hombres de honor, fuertes y valientes, mediado por el uso de las armas y el estatus, principalmente en las zonas de conflicto no hay más alternativas, por lo cual muchos jóvenes ingresan a estructuras armadas que le ofrecen prestigio, y representan un símbolo de masculinidad y oportunidad de vida” (párr. 656).

Con fundamento en la identidad y orientación sexual, en la sentencia contra el postulado Orlando Villa Zapata y otros en comento se puntualiza la VBG contra población LGBTI, ya que:

“persiste un gran escepticismo para aceptar sus derechos y sus garantías, lo que deviene en una serie de violencias (distintas a las de carácter sexual) que ponen en riesgo su integridad.

24 Estas formas de violencia sexual, y cita al Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, había sido parte del análisis del fenómeno del reclutamiento ilícito por parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá en la sentencia del 29 de mayo de 2014 en contra de los postulados Ramón María Isaza Arango y otros (párr. 923).

La práctica de delitos tales como los homicidios de presuntos delincuentes, prostitutas y personas consideradas socialmente indeseables para los grupos armados en Colombia, revelan la imposición de pautas de conducta o de control social, originadas en las lógicas y estereotipos de género fuertemente arraigados en la cultura, la vida social, comunitaria y política de los contextos en los que se desarrolla la confrontación armada” (párr. 660).

En contra de los hombres, en el conflicto también padecen “estigmatización mediante estereotipos por cuestiones de género lo cual hace que sean percibidos como sinónimos de fortaleza, resistencia, y mayor propensión a asumir el rol de combatientes en medio de la confrontación armada” (párr. 665). También cuando la “masculinidad” se ve afectada, por lo tanto, “una de las formas más distintivas sobre este tipo de violencia se traduce en las agresiones sexuales hacia hombres, debido a que al ser mutilado, penetrado o abusado por miembros de su mismo sexo, se tiende a anular su masculinidad” (párr. 666). De la misma manera, “la violencia sexual contra las mujeres también puede extenderse y entenderse como una forma de violencia contra los hombres, sobre casos en donde se busca poner en duda su capacidad de mantener a sus familias y demostrar su masculinidad” (párr. 667).

A partir del numeral 4.6.3.6 del proveído, se describen como “[p]rincipales obstáculos que enfrentan las víctimas para hablar sobre hechos de violencia de género en el conflicto” (párr. 669 y ss.) los sentimientos de culpa, vergüenza, miedo y desconfianza en las instituciones, también la amnesia provocada por acontecimientos traumáticos.

Como recopilación de lo avanzado en la judicialización de la VBG en el proceso penal especial de Justicia y Paz, la sentencia realiza una descripción que comienza por la descripción de la forma como se incorpora en el proceso el enfoque diferencial y de género en la Ley 975 de 2005 (párr. 744 y ss.), lo mismo que se destaca de la jurisprudencia proferida por las salas de Justicia y Paz sobre “persecución y homicidios por causa de género” (párr. 749 y ss.), “la doble connotación de la violencia sexual: crimen de guerra y de lesa humanidad” (párr. 754 y ss.), la “desaparición forzada y hechos de VS” (párr. 758 y ss.), el “reclutamiento ilícito de menores y VBG” (párr. 762 y ss.), y las “violencias contra las mujeres por vínculos familiares y pautas de control ejercidas por GAOML” (párr. 764 y ss.). La sentencia en comento también hace precisiones metodológicas para el abordaje de la VBG (párr. 768 y ss.) y para el caso realiza una contextualización de la VBG atribuible al GAOML denominado Bloque Vencedores de Arauca (párr. 790 y ss.).

En la decisión proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 10 de abril de 2015, sentencia contra el postulado Saúl Rincón Camelo perteneciente al Bloque Central Bolívar se hace referencia a la conformación del Frente Fidel Castaño, que, una vez consolidado, inició la implantación de un esquema de coerción y control social dirigido a todos los sectores poblacionales, extendido incluso hasta municipios del Magdalena Medio Antioqueño. En las comunas de Barranca se impuso el orden de las AUC del BCB y los castigos para quienes violaban sus normas. Estos iban desde rapar la cabeza a los jóvenes o prohibirles usar ciertos colores en la ropa, hasta la expulsión de la comunidad (párr. 102). Las pautas establecidas por

el GAOML prohibían “a los chicos llevar el pelo largo, pendientes, pulseras etc. También cerraron los bares de ambiente gay y las peluquerías que tenían hombres homosexuales fueron traspasadas a mujeres. A un homosexual lo mataron y luego le cortaron el pene y lo pusieron en la boca del cadáver” (pié de página 107, p. 62).

La desición de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del día 03 de julio de 2015 contra los postulados Jhon Fredy Rubio Sierra y otros, exintegrantes del denominado Bloque Tolima, contiene en la nota al pie número 360 del párrafo 423 los resultados del informe de la audiencia de control formal y material de cargos realizada del 20 de septiembre de 2012, a partir del cual la Fiscalía 34 de la entonces Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz [UNFJP] resalta que:

“el incumplimiento de las normas y controles impuestos por los grupos de autodefensa, motivaba el despliegue de actos de violencia física y psicológica: castigaban a hombres y mujeres por pensar de manera diferente; se maltrató a las personas por su orientación sexual; por ser drogadictos, jíbaros; por violar los horarios impuestos (no se podía salir después de las diez de la noche) para permanecer en las calles, veredas; por salir de noche; por estar en los bares; por hablar con personal del ejercito; por mirar a la cara a los paramilitares; (...) por infidelidades o por estar con sus cónyuges o novios en situaciones comprometedoras; a los hombres por llevar el cabello largo, por tener tatuajes, pircing y aretes.

Las mujeres eran sancionadas por utilizar minifalda o blusas con escote, casos en los que eran cortadas en el estomago con cuchillas de afeitar, otras fueron accedidas carnalmente de manera brutal, torturadas, les cortaban los senos; cuando los paramilitares hacían sus fiestas, eran secuestradas para que desfilaran desnudas; se imponían sanciones a las mujeres que no aceptaban relaciones sentimentales, de amistad, o familiares con los paramilitares; otras eran castigadas por ser novias y/o amigas de los paramilitares; también fueron obligadas a cocinar y lavar la ropa de los miembros de la organización sin recibir a cambio una remuneración” (párr. 360).

En la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 31 de julio de 2015 contra los postulados José Gregorio Mangones Lugo y Ómar Enrique Martínez Ossías desmovilizados del Frente William Rivas del Bloque Norte de las AUC, “la Sala observó que los paramilitares en Ciénaga y Zona Bananera asesinaron a más civiles por sus orientaciones sexuales y actividades ociosas (consumo de sustancias alucinógenas), que por sus supuestos vínculos con la subversión” (párr. 489). En una tabla diseñada para el documento, se muestra que el “castigo a civiles que infringieron códigos morales que aprueba la sociedad (homosexualismo, drogadicción y brujería)” constituyeron 28 casos de homicidio, es decir, un 19% de los casos. Por consiguiente, la Sala considera que “el caso del Frente William Rivas en Magdalena, demostró que el accionar violento de los paramilitares no estuvo foca-

lizado en la guerrilla y su base social, sino en la eliminación de la delincuencia común y en el control de comportamientos que tornaban reprochables y censurables para ellos mismos y para ciertos sectores de la sociedad (como, por ejemplo, el homosexualismo, la drogadicción y la brujería)” (Párr. 490). Para la Sala, la forma de violencia tiene fundamento en su direccionamiento contra personas que no cumplen con estándares de “moralidad” y “normalidad”, de acuerdo con la legitimidad pretendida de establecimiento en el espacio de lo social por parte del GAOML. Es decir, “en las guerras irregulares, los grupos armados no sólo buscan controlar rentas y territorios, sino que también buscan ganarse la simpatía de la población civil a partir de la resolución rápida de problemas de convivencia que se presentan en la vida cotidiana” (párr. 497).

En dicha sentencia, se hace referencia de nuevo a la mal llamada política de limpieza social, refiriéndose a la forma como los actos eran cometidos por prejuicio contra todo tipo de persona considerada como nociva para la sociedad: “delincuentes comunes, expendedores o consumidores de sustancias alucinógenas, vagabundos, homosexuales, transexuales, violadores y todo aquel que se enmarcaba dentro de la mal llamada limpieza social” (párr. 629). En el registro de víctimas del cargo No. 44, la madre de un joven homosexual asesinado reconoció así la identidad de los victimarios: “creo que fueron los paramilitares, que hacían limpieza social, a drogadictos y ladrones, en esa época murió mucha gente inocente y mi hijo fue uno de ellos” (p. 514).

El 29 de febrero de 2016, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la sentencia contra el postulado Ramón Isa-za Arango y otros exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, luego de mencio-nar de manera genérica algunas de las razones por las cuales se presenta el choque violento y la inten-ción, por decir lo menos, de la sumisión de un género denominado fuerte sobre uno considerado débil, se caracterizan algunas de las formas de VBG observa-das en medio de los conflictos armados aclarando que dicha violencia no se limita a conductas de naturaleza sexual exclusivamente, sino que existe una pluralidad de comportamientos susceptibles de ser analizados y subsumidos dentro de la presente categoría. Así las cosas, se indicó en la decisión reseñada que:

“la violencia sexual, la violencia psicológica y física por cuestiones de género, el femicidio y sus dinámicas, hacen parte del espectro para el análisis de la VBG en contexto de conflic-to armado a través de pautas de control, en relación con el desplazamiento y la desapa-rición forzada, la ocurrida en relación con el reclutamiento y la militarización de la vida; de igual manera, la que ocurre en contra de personas pertenecientes a la población LGBTI y los hombres”.

No obstante, en este punto de la discusión resul-ta relevante advertir que el Congreso de la República promulgó la Ley 1761 de julio 6 de 2015, “por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones”. Dicha norma tiene por objeto:

“tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación” (párr. 194).

La citada ley incorporó a la ley 599 de 2000 varios artículos entre los que se destacan el 104 A, así:

“Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses.

- a. Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o, de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella.
- b. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.

- c. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural.
- d. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo.
- e. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no.
- f. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella” (párr. 195).

De igual modo, en el proveído se resalta que con la introducción del artículo 104B a la Ley 599 de 2000, la normatividad penal también cuenta con circunstancias de agravación específicas que aumentan la pena privativa de la libertad (quinientos (500) meses a seiscientos (600) meses de prisión), si el hecho de feminicidio se cometiere:

- “a. Cuando el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible aprovechándose de esta calidad.
- b. Cuando la conducta punible se cometiere en mujer menor de dieciocho (18) años o mayor de sesenta (60) o mujer en estado de embarazo.

- c. Cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas.
- d. Cuando se cometiere en una mujer en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica o por prejuicios relacionados con la condición étnica o la orientación sexual.
- e. Cuando la conducta punible fuere cometida en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima.
- f. Cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico.
- g. Por medio de las circunstancias de agravación punitiva descritas en los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 104 de este Código” (párr. 196).

A su vez, se modificó el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 599 de 2000 para incorporar como agravante del punible de lesiones personales, en caso de que las mismas se cometan “en mujer por el hecho de ser mujer” (párr. 197). De igual modo, se redujeron los beneficios por aceptación del punible de feminicidio y se insta a las autoridades competentes a efectuar una investigación pronta y ágil del caso y asistencia rápida y efectiva a las víctimas, entre otras (párr. 198).

La Sala en la decisión comentada aclaró que el Estado colombiano a través del Congreso ha toma-

do las medidas para tratar de contrarrestar la violencia contra la mujer por razones de género, de la manera como se solicitó en el estudio realizado en la sentencia condenatoria contra Orlando Villa Zapata y otros postulados en el proceso penal especial de Justicia y Paz, desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca de AUC (párr. 199).

En esta misma sentencia, se hace referencia al acceso carnal violento y su aparición junto con otros ataques contra civiles con implicaciones sexuales en la mal denominada política de limpieza social llevada a cabo por el GAOML al mando de Ramón Isaza. Si bien se señala (con lógica consecuencia al tratarse de casos con relevancia cualitativa y no cuantitativa, como se aclara en la decisión contra Orlando Villa Zapata y otros) que no se trata de actos de igual frecuencia en comparación con otros punibles cometidos en el marco del conflicto armado, en el caso:

“mencionó el Ente Fiscal: ‘También hay un caso y precisamente y con ocasión de esta audiencia lo quise traer porque ya está en fase judicial, un caso de una persona que en desarrollo de lo que se llamó limpieza social sindicada de un delito sexual contra menores, una persona de tendencia homosexual [sic], se sabe que fue asesinado por el grupo y que previo a ser asesinado se le introdujo por el ano un hierro incandescente para castigar, digamos con alguna significación o con un comportamiento de elevada significación más bien su agresión sobre un menor de edad, que los padres acudieron al grupo armado ilegal para denunciar” (párr. 1841).

Como hechos objeto de la mal denominada política de limpieza social, se señala en el proveído que se encuadran los hechos rotulados con los números '158 – 1139' y '170 – 1006' (párr. 1587).

Sobre formas de VBG con víctimas masculinas para casos de violación, se confirma que los casos involucran a víctimas femeninas en su totalidad: "los blancos discernibles parecen haber pertenecido a dos categorías: a) mujeres que estaban en situación de vulnerabilidad extrema; b) mujeres que querían ingresar a las ACMM, y que por eso tenían incentivos para no reportar los ataques" (párr. 1845).

El reconocimiento paulatino del marco normativo para la judicialización de la VBG en jurisprudencia del proceso penal especial de Justicia y Paz

La incorporación del marco normativo sobre VBG comienza con la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que advierte en la sentencia contra los postulados José Rubén Peña Tobón y Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas el 01 de diciembre de 2011 la aplicación del enfoque de género. Para la Sala: "es necesario analizar este tipo de delitos desde un enfoque de género, en la medida que se ha reconocido que, aunque el conflicto armado interno colombiano afecta tanto a hombres como mujeres, los impactos que éste produce, sobre todo con relación a la comisión de crímenes sexuales, resultan diferentes para estas dos poblaciones" (párr. 85). La argumentación es relevante para destacar la connotación y naturaleza de los crímenes que involucran VS ocurridos en el conflicto armado. Se cita que

“los delitos de connotación sexual han sido una constante en el marco del conflicto armado interno colombiano. Las experiencias internacionales, concretamente los Tribunales Penales Internacionales para la ex-Yugoslavia y para Ruanda, han demostrado que en los escenarios donde se presentan conflictos armados es común la perpetración de crímenes y agresiones sexuales” (párr. 87).

Como se puede contemplar, existe desde esta decisión, apelación y fundamentación sobre lo judicializado y avanzado en el DPI. Ahora bien, desde la decisión en contra del postulado Jorge Iván Laverde Zapata del 2 de diciembre de 2010, los crímenes cometidos por GAOML se argumentan ostentando la doble naturaleza como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero es en el caso de la decisión contra Peña Tobón, Morelo Castro y Hernández Calderas en la que se reconoce frente a la violencia sexual que:

“los crímenes cometidos en un escenario de conflicto pueden ostentar la doble naturaleza de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como acontece con aquellos que se configuran en un escenario de aplicación del D.I.H. y se corresponden con los actos dirigidos como parte de una política de ataque generalizado y sistemático contra una población civil. Tal es el caso de los crímenes de naturaleza sexual y del desplazamiento forzado, frente a los cuales la Sala hará un pronunciamiento especial” (párr. 82).

El proveído argumenta que la doble connotación de los crímenes de naturaleza sexual contradice, por una parte, el DIH por cuanto se atenta contra el principio de “distinción”, y a la vez, al configurar un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, se ostenta la doble naturaleza de crimen de guerra y de lesa humanidad (párr. 105). De manera genérica, allí son considerados los crímenes sexuales como “arma de guerra”, y la argumentación toma en cuenta datos estadísticos sobre hechos de atribución a los GAOML de los delitos presentados en la primera encuesta de prevalencia aludida: 4.64% de los “acosos sexuales”, 13.54% de los “accesos carnales violentos”, 20.32% de las “prostituciones forzadas”, 16.75% de los “embarazos forzados”, 6.69% de los “abortos forzados”, 0% de las “esterilizaciones forzadas”, 19.33% de los “servicios domésticos forzados” y 11.18% de la “regulación de la vida social” (párr. 93).

Asimismo, se cita del Consejo de Seguridad de la ONU, la Resolución 1888 del 30 de septiembre de 2009 (Doc. S/RES/1888), toda vez que, para este Organismo, “la violencia sexual, cuando se utiliza o se hace utilizar como táctica de guerra dirigida deliberadamente contra civiles o como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, puede agudizar significativamente las situaciones de conflicto armado” (párr. 97).

En la decisión contra Edgar Ignacio Fierro Flores y Andrés Mauricio Torres León del 07 de diciembre de 2011, con relación a la naturaleza de los crímenes sexuales cometidos por los GAOML, se puntualiza: “los crímenes pueden ostentar la doble naturaleza de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en la medida que se configuran en un escenario de aplicación del D.I.H. y

los ataques se dirigen como una política de ataque generalizado y sistemático contra la población civil” (párr. 70).

De otra parte, para el caso del reclutamiento ilícito y su vinculación con VBG, desde la sentencia en el proceso contra el postulado Fredy Rendón Herrera, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 16 de diciembre de 2011 resalta las intervenciones de expertos en el tema. Así, la alemana Nina Winkler, sicóloga con maestría en ciencias políticas y candidata a doctora en sicología clínica, resalta la vergüenza y sentimiento de culpa de víctimas de violencia sexual que sienten haber debido morir como sus compañeros, y afirma que “es muy difícil que estos niños y niñas reclutados posteriormente, tengan una vida en pareja normal, debido a que sienten que no son entendidos” (párr. 112). De igual manera, se tiene el concepto de Mario Hernán Suescún Chaparro, abogado y especialista en derecho constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, quien relata la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en 2005 sobre reclutamiento ilícito de menores en el que entrevistaron a 329 niños que estaban en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se enuncia que:

“el reclutamiento implicaba limitación al derecho a la vida, libertad, educación, la familia, pero uno de los elementos adicionales también sujetos a sus derechos sexuales y reproductivos, con el abuso sexual, embarazos forzados, abortos forzados, que no habían sido analizados. Se reincidía en el hecho de separar al niño de la familia, que los hacían vulnerables, y vivir en lugares donde la presencia del Estado era pre-

caria. Esa situación también podía darse en una posibilidad de protegerse de violencia sexual y violencia intrafamiliar. A partir de ese análisis, del reconocimiento de esa situación, que el Estado tenga elementos de juicio como respuesta institucional, reparación a la situación que vivieron los menores” (párr. 138).

Con relación a la fundamentación jurídica, se mencionan sobre el reclutamiento ilícito instrumentos internacionales, así, las reiteraciones de la Resolución 1882 de 4 de agosto de 2009, en la cual se manifiesta el compromiso de las Naciones Unidas en la protección de los niños en los conflictos armados y su rol como elemento trascendental de cualquier estrategia general para resolver un conflicto. Allí también se señala que los conflictos armados internos son escenarios de violaciones masivas a derechos humanos:

“en especial de los niños y niñas, ya que siguen constituyendo un número considerable de las víctimas de muerte y mutilación en los conflictos armados, incluso a consecuencia de ataques deliberados dirigidos contra ellos, del uso indiscriminado y excesivo de la fuerza, del uso indiscriminado de minas terrestres, municiones en racimo y otras armas, y de la utilización de niños como escudos humanos, y profundamente preocupado asimismo por la alta incidencia y los terribles niveles de brutalidad de los casos de violación y otras formas de violencia sexual cometidos contra los niños en contextos de conflicto armado y en situaciones conexas, incluidas algunas situaciones en que la violación y otras formas de violencia sexual se usan o prescriben como táctica de guerra” (párr. 556)

Para la Sala, las niñas reclutadas ilegalmente sufrieron violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, y también puede darse con frecuencia la violencia sexual, los matrimonios forzados y la esclavitud sexual, razón por la que ordena a la Fiscalía la documentación en estos aspectos (párr. 813).

El proveído concluye que diversas resoluciones de la ONU revelan violaciones conexas al reclutamiento de menores, como la violencia sexual contra niñas, mujeres cabeza de familia y huérfanas, el contagio de enfermedades como VIH, lesiones físicas, entre otras. Igualmente, insiste en que “el Estado está en la obligación de diseñar políticas de reinserción y rehabilitación psicosocial, educacional y en salud para los menores reclutados” (párr. 558).

En igual línea argumentativa cita el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional. En el marco normativo, a partir del párrafo 627 mencionan los riesgos por razones de género en casos de reclutamiento, con cita *in extenso* del Auto:

“La violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas que son reclutadas forzosamente por los grupos armados al margen de la ley, violencia sexual que incluye en forma reiterada y sistemática: (i) la violación, (ii) la planificación reproductiva forzada –a través de distintos medios, pero principalmente mediante la colocación de dispositivos intrauterinos y el uso de otros métodos anticonceptivos, en contra de su voluntad y sin información sobre las consecuencias de su implantación, en tanto –orden II de obligatorio cumplimiento-, (iii)

la esclavización y explotación sexuales, (iv) la prostitución forzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por parte de los jefes o comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto forzado y (ix) el contagio de infecciones de transmisión sexual. Se ha reportado por numerosas entidades nacionales e internacionales, de manera consistente y reiterada, que los miembros tanto de las guerrillas –de las FARC y el ELN- como de los grupos paramilitares – desmovilizados y en proceso de reconfiguración- que operan a todo lo largo del territorio nacional llevan a cabo este tipo de actos en forma sistemática en el curso de sus actividades criminales” (párr. 627).

La Sala concluye que en espacios fuertemente jerarquizados y característicos de los GAOML, se reproducen idearios de virilidad, valentía y arrojo, que afectan a personas menores dentro de su proceso de desarrollo porque les lleva a asumir roles y responsabilidades de adultos, además, “para las niñas, quienes se ven agredidas por éticas masculinas en las que se justifican actos que objetivizan a las mujeres” (párr. 807).

En el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la Sala de Justicia y Paz en la decisión contra el postulado Orlando Villa Zapata del 16 de abril de 2012, resalta en el marco normativo a partir del párrafo 705, el reconocimiento del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, riesgo del reclutamiento y VBG. De igual manera, reconoce sobre el reclutamiento con fundamento en el informe de Graça Machel presentado en 1996, que:

“en caso de las niñas reclutadas es aún más grave, debido a que dentro del grupo armado se reproducen relaciones de poder patriarcales que lleva a que sus cuerpos sean vistos como espacios de dominación en razón del género, por ello muchas niñas son reclutadas con el fin de ser sometidas a la esclavitud sexual o matrimonios forzados; los menores soldados son más obedientes, no cuestionan las órdenes y son más fáciles de manipular que los soldados adultos” (párr. 670).

La relación entre el género y el reclutamiento es objeto de un apartado en la decisión citada. Si bien hay un imaginario para asociar lo “masculino” con la guerra, las niñas “son reclutadas a la fuerza o mediante engaños, para realizar diferentes tareas: algunas veces como concubinas de los combatientes o para seducir al enemigo, como estrategia de inteligencia o para realizar asesinatos” (párr. 794).

Ahora bien, en la decisión en contra del postulado José Baldomero Linares y otros exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá del 6 de diciembre de 2013, a partir del párrafo 1263 señala instrumentos de DIH sobre la “violencia sexual en los conflictos armados”:

“Las referencias concretas a las agresiones sexuales se encuentran, en el caso de los Convenios I y II, en el artículo 12, que establece ‘que se tratará a las mujeres con todas las consideraciones de su sexo’, y, en el Convenio III en su artículo 14, que añade que ‘en todo caso, se beneficiarán de un trato tan favorable

como el que reciben los hombres'. Por su lado, el Convenio IV declara en su artículo 27 que 'las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor'. En último lugar, los Protocolos Adicionales I y II prohíben además 'los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor'" (párr. 1263).

Sin embargo, la Sala critica la "atemporalidad" de lo dispuesto en estos instrumentos, toda vez que "parece tratar a las mujeres en términos de su relación con otros y no como individuos en sí mismos y que las previsiones respecto a ellas están planteadas en términos de protección en vez de prohibición" (párr. 1263). Aún más, esto se radicaliza en la relación que se hace entre este delito y el "honor" y "pudor", lo que resta trascendencia y gravedad a los hechos.

De otro lado, señala que con el E. de R. de la CPI se determinan definiciones y descripciones para la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado y la esterilización forzada, entre otras formas de violencia sexual constitutivas de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, y pueden considerarse como elementos constitutivos del delito de genocidio (párr. 1277).

En la decisión en comento se traen temas del DPI, así la "Regla 96 de las Reglas de Procedimiento y Prueba del TPIY" para no requerir corroboración del testimonio de las víctimas, la imposibilidad de alegar el consenti-

miento como defensa si se está en condición de sometimiento, amenaza, o se tengan razones para temer violencia, coacción, detención o coacción psicológica, o se crea razonadamente que si no hay sometimiento, otra persona podría ser sometida, amenazada o atemorizada; igualmente, el tema de la admisión del consentimiento de la víctima y la imposibilidad de apelar a la conducta sexual previa de la víctima como prueba (párr. 1270).

En el caso también se cita el Auto de la Sala para el control formal y material de cargos contra el postulado Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera y otros, del 4 de septiembre de 2012, para resaltar sobre la esclavitud sexual puntualizaciones del Tribunal Especial para Sierra Leona que considera que este delito estaba contenido en el delito general de esclavitud, pero lo pretendido con un delito específico de esclavitud en conexión con la violencia sexual, era “para poner atención en los delitos graves que históricamente se han ignorado, y para reconocer la naturaleza particular de violencia sexual que se ha empleado, en ocasiones con impunidad, como táctica para humillar, dominar e instaurar el miedo en las víctimas, sus familias y las comunidades” (párr. 816).

También en esta sentencia, a partir del párrafo 1266, se describe la violación como arma de guerra de acuerdo con los Tribunales *ad hoc*, tanto para la ex-Yugoslavia y Ruanda. Del primero, retoma su artículo segundo para conocer de las infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 y para anotar la posibilidad de tener VBG en casos de tortura o los tratamientos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos,

además de causar graves sufrimientos intencionadamente, o atentar gravemente contra la integridad física o salud” (párr. 1266). Asimismo, del TPIY señala la Sala que el artículo 3 de los estatutos “se refiere a las violaciones de las leyes o prácticas de guerra y el artículo 4 al genocidio”. A este último lo define como un conjunto de actos realizados con la “intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Entre esas actuaciones menciona específicamente a los “graves atentados contra la integridad física o psíquica de los miembros del grupo”, dentro de los cuales podría incluirse también la violación (párr. 1267).

Del TPIR retoma el Caso Akayesu, que por primera pone a la violación como constitutiva de genocidio “si se da la intencionalidad que caracteriza este tipo penal y se definió la violación de forma amplia para evitar que una interpretación restrictiva limitase los casos de aplicación de este delito” (párr. 1273).

En la decisión de 29 de mayo de 2014 contra el postulado Ramón María Isaza se cita la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU para subrayar la necesidad de adoptar medidas especiales que lleven a proteger de la violencia, por razón de género. Igualmente, la Resolución 1820 del Consejo de Seguridad enfatiza la violencia sexual contra las mujeres como táctica de guerra dirigida deliberadamente contra civiles o como parte de un ataque generalizado o sistemático contra las poblaciones civiles (párr. 881).

La decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 01 de agosto de 2014, en contra del postulado Luis Carlos Pestana Coronado, recuerda la evolución del catálogo

de los crímenes de lesa humanidad que se amplían para incorporar dentro de ellos la violación y prostitución forzada (p. 69). Sin embargo, no es objeto de judicialización hechos objeto de la citada sentencia en el proceso. De igual manera, resalta que: “la legislación de Justicia y Paz colocó como eje central de su accionar a la víctima, para quien hay que reconstruir la verdad de todo lo acontecido, respecto de lo cual hasta ahora sólo ha percibido el dolor de la muerte, el desplazamiento, la violencia sexual y la desesperanza producida por la soledad en la que la abandonó el Estado” (p. 150).

Por su parte, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, en la decisión de 1 de septiembre de 2014 contra el postulado Luis Eduardo Cifuentes Galindo, hace la calificación de los hechos de acuerdo con estándares internacionales. Así ostentan la calidad de infracciones al DIH (párr. 1037-1056) y lesa humanidad (párr. 1057-1065). En este proveído se contiene el resumen de la legislación y directivas sobre la elaboración de “patrones de macrocriminalidad”. Así, se encuentran la Ley 1592 de 2012, el Decreto 3011 de 2013 que la reglamenta, la Directiva 001 del 4 de octubre de 2012 y la mención a instrumentos internacionales.

En la segunda decisión contra Salvatore Mancuso Gómez y otros integrantes del Bloque Catatumbo, Bloque Norte, Bloque Héroes de los Montes de María y Bloque Córdoba la fundamentación normativa en materia de VBG se hace con mención de instrumentos internacionales y las posibilidades de que, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 214 y el artículo 93 de la Consitución Política, se incorporen las reglas del Dere-

cho Internacional Humanitario. Así las cosas, el análisis permite a la Sala afirmar que:

“La experiencia paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia sugiere la existencia de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, las cuales se materializaron en ataques bélicos, acciones de control, represión, amedrentamiento, vigilancia, conductas de VBG como formas de tortura, entre otros; en muchas ocasiones orientados a arremeter en contra de la población civil en estado de indefensión, sin perjuicio de que en el conflicto se hicieran públicos los fines contrainsurgentes” (párr. 1317).

Se cita del Derecho Internacional el marco legal referente a la violación de los Derechos Humanos en situación de conflicto, las incorporaciones específicas en materia de género y reconstrucción social después del conflicto, tratados e instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano, entre ellos, la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”, la “Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura”, la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” y la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, todos ellos “indican una clara obligación de los Estados Partes para investigar, sancionar y castigar a los responsables de violaciones a los derechos reconocidos internacionalmente, sin perjuicio de que estas normas se encuentren integradas al ordenamiento jurídico colombiano en virtud del Bloque de Constitucionalidad” (parr. 1317).

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, el 11 de diciembre de 2014, en la decisión contra el postulado Juan Francisco Prada Márquez realiza una contextualización de los crímenes del DPI. Frente al crimen de guerra señala que:

“atendiendo las consideraciones anteriores, encuentra la Sala que a Juan Francisco Prada Márquez como a todos y cada de los integrantes de la organización ilegal armada que dirigía, les asistía la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, contrario a ello, arremetieron contra la población civil, en cuanto a que sin escrúpulo alguno, consideraron que tales acciones innegablemente les generaba un mayor posicionamiento en la región, dado el terror que predicaba y del que se les hacía víctimas. De esta forma desconocieron gravemente los principios del DIH, en tanto que se a la población civil se le hizo víctima de homicidios, desapariciones forzadas, actos de tortura, accesos carnales violentos, privaciones arbitrarias de la libertad, exacciones, hurto de bienes protegidos o civiles, desapariciones forzadas sin atender que se trataba de sujetos que gozaban de especial protección por parte del DIH” (párr. 235).

Como se puede notar, para la Sala existe una conexión con los crímenes internacionales y la VBG que se rescatan al consagrar que puede verse que la Fiscalía General de la Nación logra documentar, para el Frente Héctor Julio Peinado Becerra del Bloque Norte de las AUC, hechos constitutivos de “masacres, ho-

micidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y violencia sexual entre otros, los cuales, teniendo en cuenta que se cometieron de manera generalizada y sistemática contra los pobladores de los territorios donde el Bloque ejerció su influencia, son actos que claramente constituyen crímenes de lesa humanidad.” (párr. 229).

En la sentencia contra el postulado Orlando Villa Zapata y otros proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 24 de febrero de 2015, se hace un completo análisis del “marco normativo relevante a considerar para el análisis de la VBG en el marco del conflicto armado colombiano” en el numeral 4.6.4 del proveído. Se comienza con la mención de la VBG sancionada en el DIH (párr. 680 y ss.), también la consagración en el DPI de tipos relativos a VBG (párr. 687 y ss.) y finalizando esta fundamentación normativa con otros instrumentos internacionales a tener en cuenta en la protección de los derechos, especialmente de las mujeres (párr. 709 y ss.).

Los análisis sobre la normatividad interna (párr. 718) comienza por la recopilación de tipos penales contenidos en el CP de 1980 (Decreto Ley 100) y en el vigente CP, además de lo pertinente en los señalamientos de la Corte Constitucional con el Auto 092 de 2008, y en extenso, lo relacionado con las reglas de procedimiento y prueba que del DPI se incorporan en la Ley 1448 de 2011 en el artículo 38, además del listado de conductas que modifica o adiciona al CP la Ley 1719 de 2014.

Por su parte, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el 02 de febrero de 2015, en la sentencia contra Ramiro Vanoy Murillo, postulado desmovilizado del Bloque Mineros de las AUC realiza una “fundamentación normativa” partiendo del artículo 38 de la Ley 975 de 2005, para relatar que en el marco de la protección a las víctimas, se establece que se deberá tener en cuenta “todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género y la salud, así como la índole del delito, en particular cuando éste entrañe violencia sexual, irrespeto a la igualdad de género o violencia contra niños y niñas” (p. 1267). De manera preliminar, en esta decisión se hace referencia de igual manera al Estatuto de Roma (artículo 7), según el cual el delito de violación, la esclavitud sexual, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, están determinados entre los delitos de lesa humanidad que deben ser juzgados en su contexto (p. 1255). La Corte Constitucional también estableció que la definición de crímenes de lesa humanidad que son explícitos en el E. de R. e incluyen un avance en la definición que había sido empleada hasta el momento en el DPI, en razón a que amplía la definición de crímenes de lesa humanidad para incluir expresamente las ofensas sexuales (distintas a la violación) (p. 1256).

La decisión comentada toma como orientación y marco normativo de la *Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer* (CEDAW), la Recomendación General No. 19 dictada por el Comité de la CEDAW, a través de la cual se confirma la inclusión de la violencia contra la mujer dentro de la definición de discriminación. Por

otra parte, se tiene en cuenta como instrumento de derecho internacional de derechos humanos, la *Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer* (Convención de Belem Do Para) de julio de 1994, ratificada por Colombia el 10 de marzo de 1996, que a nivel regional es el símil de la CEDAW y con la cual anota que no sólo se contiene una definición de violencia de género, sino que con este instrumento se determina la eliminación de los estereotipos tradicionales asociados al maltrato físico.

De otro lado, se tienen como instrumentos las referencias a las *Conferencias Mundiales* para que se tomen acciones y cese la vulneración de los derechos de las mujeres. Así, se cuenta con la Conferencia de Nairobi de 1985, la Plataforma de Acción Mundial aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijín de 1995 y los contenidos de los Programas de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe de 1995 a 2001. En el proveído se citan igualmente resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, porque allí se contempla la violencia sexual en el marco del conflicto armado y se precisa que la misma afecta el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Por ello, se listan las resoluciones 1325 de 2000, 1612 de 1995, 1820 de 2008, 1882 de 2009, 1888 de septiembre 30 de 2009 y, finalmente, la Resolución N° 1889. También se toman citas de instrumentos de DPI partiendo del E. de R. adoptado el 17 de julio de 1998; se descende al marco normativo nacional con la Constitución Política de 1991; el CP: la Ley 985 de 2005 sobre trata de personas; la Ley 1146 de 2007 sobre la prevención

de violencia sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual; la Ley 1257 de 2008 donde se crea una circunstancia de agravación del delito de homicidio en razón al género, lo que en otras legislaciones se conoce con el neologismo “feminicidio”; y finalmente, se toma en cuenta el Auto 092 del 14 de abril de 2008, proferido por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento del cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 para reconocer el impacto diferencial que tiene el conflicto armado en las mujeres, los riesgos a los que están expuestas y las facetas de género de las mujeres desplazadas (p. 1273).

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la sentencia contra el postulado Jhon Fredy Rubio Sierra y otros, del 07 de marzo de 2015, señala que la VBG, además de constituir crímenes de guerra, debido a los atentados contra la vida de las personas, puede enmarcarse dentro de un ataque generalizado, poniendo los hechos constitutivos como crímenes de lesa humanidad (nota al pie 378). También define la generalidad del ataque con cita a un documento del Consejo Noruego para Refugiados (Barbero, 2011, pie de página 379).

Finalmente, es importante destacar que el 29 de febrero de 2016, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la sentencia contra el postulado Ramón Isaza Arango y otros, exintegrantes de las ACMM, hace lo pertinente con la mención de instrumentos de carácter internacional para la persecución y judicialización de formas de VBG observadas en medio de los conflictos armados.

Principales conductas punibles constitutivas de VBG en la jurisprudencia del proceso penal especial de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).

En lo corrido del proceso penal especial de Justicia y Paz hasta el primer semestre de 2016, el análisis elaborado en el marco de la presente investigación identificó que se han judicializado doscientos treinta y nueve (239) hechos en los cuales se involucra VBG en diez (10) de las treinta y seis (36) sentencias.

En la tabla 1 se identifica, de acuerdo con el postulado, la fecha (seguida del número de sentencia en orden cronológico visible en los Anexos), la Sala de Justicia y Paz y el número de hechos objeto de decisión que vinculan conductas constitutivas de VBG.

Tabla 1
Sentencias y número de hechos que involucran descripciones sobre VBG

Nº	Postulados	Fecha	Sala de JyP	Nº de hechos	%
1	José Rubén Peña Tobón y otros	2011.12.01 (4)	Bogotá	1	0,42
2	Édgar Ignacio Fierro y otro	2011.12.07 (5)	Bogotá	1	0,42
3	Ramón María Isaza Arango y otros	2014.05.29 (15)	Bogotá	1	0,42
4	Luis Eduardo Cifuentes Galindo y otros	2014.09.01 (18)	Bogotá	2	0,84
5	Salvatore Mancuso Gómez y otros	2014.11.20 (22)	Bogotá	176	73,64

Sigue...

Cont...

6	Arnubio Triana Maecha y otros	2014.12.16 (25)	Bogotá	14	5,86
7	Ramiro Vanoy Murillo y otros	2015.02.02 (26)	Mede- llín	2	0,84
8	Orlando Villa Zapata y otros	2015.02.24 (27)	Bogotá	6	2,51
9	Olimpo de Jesús Sánchez Caro y otros	2015.12.16 (35)	Mede- llín	21	8,79
10	Ramón María Isaza y otros	2016.02.29 (36)	Bogotá	15	6,28

Se observa que en la segunda sentencia contra el postulado *Salvatore Mancuso Gómez y otros* del 20 de noviembre de 2014 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá²⁵, el mayor número de hechos de VBG judicializados, que si bien se cuentan en ciento setenta y cinco (175) en el proveído, se debe adicionar un caso ocurrido en el contexto de un desplazamiento forzado (párr. 6982) para tener un total de ciento setenta y seis (176) hechos, lo que para este análisis representa, según se contempla, el 73.64% de los hechos relacionados con VBG. El porcentaje restante lo representan nueve (9) sentencias con un número muy inferior de hechos, destacándose los veintiún (21) hechos en la decisión contra Olimpo de Jesús Sánchez Caro y otros (exintegrantes de grupos subversivos Ejército Revolucionario Guevarista [ERG] y el Frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional [ELN]) de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, y los quince (15) hechos

25 La primera sentencia contra el postulado Salvatore Mancuso Gómez corresponde a la misma Sala de Justicia y Paz, fallada el 31 de octubre de 2014.

en el caso del proveído que condena a Ramón María Isaza y otros en la sentencia del 29 de febrero de 2016 (Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá).

Ahora bien, sobre las conductas judicializadas relacionadas con VBG, se encontró que en el total de los doscientos treinta y nueve (239) hechos judicializados en las sentencias analizadas, se tienen dieciocho (18) tipos penales objeto de las decisiones y, previamente legalizados, para alcanzar un total de quinientas ochenta y nueve (589) ocasiones en las que se hace la adecuación típica en la distribución que se muestra en la tabla 2 en la que también se destacan resaltadas circunstancias de agravación y el caso de tentativa:

Tabla 2

Conductas constitutivas de VBG judicializadas en el proceso penal especial de Justicia y Paz

TIPO PENAL	Nº de veces
Acceso carnal violento en persona protegida. L. 599/2000 (art. 138)	169
Acceso carnal violento. Decreto Ley 100 de 1980 (art. 298)	1
Actos sexuales violentos en persona protegida. L. 599/2000 (art.139)	15
Agravación, art. 211 N. 1 - La conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas	27
Agravación, art. 211 N. 3 - Si se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual	5
Agravación, art. 211 N. 4 - Si se realizare sobre persona menor de catorce (14) años	11
Agravación, art. 211 N. 6 - Si se produjere embarazo	8

Sigue...

Agravación, art. 211 N. 7 - Si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio.	2
Prostitución forzada o esclavitud sexual en persona protegida. L. 599/2000 (art. 141)	21
Aborto sin consentimiento. Decreto Ley 100 de 1980 (art. 344)	3
Aborto sin consentimiento. L. 599/2000 (art. 123)	20
Aborto forzado en persona protegida. L.599/2000 (art. 139E) - Retroactiva L. 1719/2014	3
Tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida. L. 599/2000 (art. 146)	6
Homicidio en persona protegida. L. 599/2000 (art. 135)	31
Homicidio en persona protegida -tentativa-. L. 599/2000 (art. 27)	1
Homicidio (art. 103) agravado (art. 104 N° 6 [Con sevicia] y N° 7 [Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación]) L. 599/2000	2
Homicidio. Decreto Ley 100 de 1980 (art. 223) Agravado (con el código de 2000) Art. 104 N. 7	1
Lesiones personales en persona protegida. L. 599/2000 (art.136)	6
Lesiones personales. Decreto Ley 100 de 1980 (art. 331, 332)	2
Tortura en persona protegida. L. 599/2000 (art. 137)	122
Tortura. Decreto Ley 100 de 1980 (art. 279)	2
Reclutamiento ilícito L. 599/2000 (art. 162)	2
Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil. L. 599/2000 (art. 159)	128
Desplazamiento forzado. Decreto Ley 100 de 1980 (art. 284A)	1

De acuerdo con el principio de legalidad, el conteo de algunas conductas tiene en cuenta que la adecuación típica se hizo con la vigencia del Decreto Ley 100 de 1980 para los casos de acceso carnal violento, homicidio, lesiones personales, aborto, tortura y desplazamiento forzado. De otra parte, es importante anotar que además de delitos constitutivos de VS como el acceso carnal violento, los actos sexuales violentos y sus circunstancias de agravación, han sido objeto de sentencia hechos dentro de los cuales la adecuación típica corresponde a la prostitución forzada y el aborto sin consentimiento.

Asimismo, en muchos hechos, y debido a la existencia y su conexión con distintas “formas de VBG”, tal como se analizó en el capítulo anterior en el reconocimiento que ha tenido su avance en el proceso penal de Justicia y Paz, se permite la calificación con otros punibles y en modalidades concursales. Así, la tortura y el desplazamiento forzado se dan en mayor número, como también hay adecuación típica con tipos penales que describen conductas de tratos crueles e inhumanos, homicidios (también en un caso en grado de tentativa), lesiones personales y reclutamiento ilícito.

De otra parte, en los hechos que vinculan VBG se judicializaron en modalidad concursal once (11) conductas que acompañan el contexto en el cual muchos de los casos de VBG ocurrieron, sumando un total de ciento veintinueve (129) ocasiones en las que se realiza la adecuación típica, como se muestra en la tabla 3:

Tabla 3

Otras conductas judicializadas en los hechos en los cuales ocurrió VBG

TIPO PENAL	Nº de veces
Detención ilegal y privación del debido proceso. L. 599/2000 (art. 149)	8
Actos de terrorismo. L. 599/2000 (art. 144)	7
Despojo en el campo de batalla. L. 599/2000 (art. 151)	1
Destrucción y apropiación de bienes protegidos. L. 599/2000 (art. 154)	32
Represalias. L.599/2000 (art. 158)	1
Exacciones o contribuciones arbitrarias. L. 599/2000 (art. 163)	6
Desaparición forzada. L. 599/2000 (art. 165)	10
Agravación, art. 166 Nº 3 - Cuando la conducta se ejecute en menor de dieciocho (18) años, mayor de sesenta (60) o mujer embarazada	1
Agravación, art. 166 Nº 4 - Cuando la conducta se cometa, por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: servidores públicos, comunicadores, defensores de derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes o miembros de una organización sindical legalmente reconocida, políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos de conductas punibles o disciplinarias, juez de paz, contra cualquier otra persona por sus creencias u opiniones políticas o por motivo que implique alguna forma de discriminación o intolerancia	1
Agravación, art. 166 Nº 6 - Cuando se cometa utilizando bienes del Estado	1
Agravación, art. 166 Nº 9 - Cuando se cometa cualquier acción sobre el cadáver de la víctima para evitar su identificación posterior, o para causar daño a terceros	1
Secuestro simple. L. 599/2000 (art. 168)	45

Sigue...

Secuestro. Decreto Ley 100 de 1980 (art. 269)	1
Secuestro agravado. Decreto Ley 100 de 1980 (art. 270)	5
Secuestro extorsivo (art. 169) L. 599/2000 170 N° 6 - Cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido con amenaza de muerte o lesión, o con ejecutar un acto que implique grave peligro común o grave perjuicio a la comunidad o a la salud pública.	6
Agravación, art. 170 N° 6 – Cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido con amenaza de muerte o lesión, o con ejecutar acto que implique grave peligro común o grave perjuicio a la comunidad o a la salud pública	1
Hurto calificado (art. 240)	1
Hurto agravado (art. 241)	1

Tabla 4

Circunstancias de mayor punibilidad (art. 58 del CP) acreditadas en los hechos

TIPO PENAL	Nº de veces
Circunstancias de mayor punibilidad. L. 599/2000 (art. 58).	35
Circunstancias de mayor punibilidad, art. 58 N° 2 - Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria	126
Circunstancias de mayor punibilidad, art. 58 N° 3 - Que la ejecución de la conducta punible esté inspirada en móviles de intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión o las creencias, sexo u orientación sexual, o alguna enfermedad o minusvalía de la víctima	1
Circunstancias de mayor punibilidad, art. 58 N° 5 - Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima, o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe	130

Finalmente, teniendo como elemento adicional para atender la determinación de la punibilidad en la judicialización de hechos de VBG en el proceso penal especial de Justicia y Paz, se han acreditado circunstancias consagradas en el artículo 58 del CP vigente, como se muestra en la tabla 4.

En treinta y cinco (35) hechos se menciona el artículo 58 del CP de manera genérica, mientras que en el número de veces, como se reconoce en la tabla 4, son puntuales y numerosos los casos de las circunstancias de número 2 y 5, mientras que la de número 3, que lleva explícito un elemento de género, ocurre solamente en un caso.

Además de lo observado en el conteo de las conductas punibles, se resalta en la judicialización de la VBG en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz, la asociación entre VBG y genocidio que se realiza en la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá del 30 de octubre de 2013 en contra del postulado Hébert Veloza García. En su línea de argumentación sobre el genocidio en contra de la Unión Patriótica (UP), esto es, tener en cuenta que en Colombia de manera distinta a lo que internacionalmente se tiene como sujeto pasivo del delito de genocidio, además de tener los grupos nacionales, étnicos, raciales, religiosos, se tienen los grupos políticos (artículo 101 del CP), la Sala puntualiza lo sucedido contra este partido político para que más adelante “no vuelva a repetirse jamás en el país, en contra de ninguna minoría política, sexual, étnica, de género, con diferencias en sus preferencias y decisiones sexuales o de cualquier otro tipo” (párr. 1010).

Las consideraciones de la Sala no son restrictivas en cuanto a la incorporación de otros grupos que pueden ser víctimas de genocidio. Esto a su vez recuerda que, “el informe del relator especial para la cuestión del genocidio (en 1985), Whitaker, reconoció la necesidad de que otros grupos (sociales, sexuales, políticos) fueran incluidos a través de la ampliación de la definición que otorga la Convención contra el genocidio” (párr. 1051). De cara a la incorporación en instrumentos del DPI se tiene en el E. de R. de la CPI los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos (art. 6) al retomar lo contenido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1948.

“Aunque el genocidio está en proceso de construcción desde mediados de la década de los años 40 del siglo pasado, su interpretación y aplicación no ha sido pacífica, pues aunque representa un hecho ilícito que busca la protección de grupos poblacionales contra su exterminio y desaparición, sólo hasta finales de los años 80 algunos especialistas se han dedicado a dialogar en torno a la ampliación del tipo penal hacia minorías de género, de identidad sexual, discapacidad u otras” (párr. 1011).

Nótese la incorporación del elemento género como propuesta para la cualificación de un grupo como sujeto pasivo de la conducta. La Sala en el caso considera que:

“[p]ara aclarar un poco la forma de interpretación del tipo internacional de genocidio, la Sala tomará en consideración las siguientes premisas: (i) la tipificación del delito de genocidio en su sentido sistemático y universalista no puede incluir a algunos sujetos o grupos y excluir a

otros. La aceptación de que la redacción de la Convención excluya a los grupos políticos, de género, identidad sexual, discapacidad, económicos, sociales, lingüísticos o cualquier otro es una puerta abierta a las tendencias crecientes de la instalación de un derecho penal del enemigo, a través de la aceptación de que los delitos pueden ser diferenciales en función de las víctimas a las que afectan, vulnerando el principio normativo fundamental de la igualdad ante la ley” (párr. 1041).

Por otro lado, la segunda decisión contra Salvatore Mancuso Gómez y otros, del 20 de noviembre de 2014, muestra que casos llevados en este proceso consagrados a partir del párrafo 2140 son calificados dentro de los *Tratos inhumanos, degradantes y experimentos biológicos en persona protegida*, así los hechos de números 4-5-6-7-8-52-53-54 en los que se relata que las víctimas fueron trasladadas bajo amenazas y en contra de su voluntad por una integrante del GAOML, con la finalidad de impedir la reproducción de dicha población (párr. 2157 y ss); en el caso se condenó a título de autor mediano al posulado por los delitos de “Tortura en persona protegida que trata el artículo 137 de la Ley 599 de 2000 en concurso con *Tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida* artículo 146 (...), en circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numeral 5º de la ley 599 de 2000” (párr. 2161). Lo importante del caso tiene que ver con las discusiones en el legislativo y, finalmente, lo que hizo la Ley 1719 de 2014, dado que hoy se tiene para este tipo de conducta la descripción típica de la “esterilización forzada”, adicionada en el artículo 139B en el CP.

Situación similar sucede con la “desnudez forzada”, que en el caso, y de manera preliminar a la existencia de la Ley 1719 de 2014 en la que se consagra como tipo penal en el adicionado artículo 139D, se condena en la sentencia contra Mancuso Gómez del 20 de noviembre de 2014 con la calificación del delito acorde con los “Actos Sexuales Violentos en persona protegida de que trata el artículo 139”, un hecho en el cual la víctima en la parte de atrás de su vivienda fue obligada a desnudarse (párr. 2295).

Además, llama la atención que en la decisión en contra de Olimpo de Jesús Sánchez Caro y otros, proferida por el Tribunal Superior de Medellín frente a las conductas constitutivas de VBG perpetradas por exintegrantes de grupos guerrilleros (ERG y el Frente Ernesto Che Guevara del ELN) en la década de 1990 (puntualmente en el hecho 160 cometido en 1993), si bien la imputación se hizo con fundamento en el Decreto Ley 100 de 1980 con el artículo 344 correspondiente al “aborto sin consentimiento”, y en casos luego del año 2000 (hecho 161, 176), se imputó con la calificación homóloga descrita en el artículo 123 de la Ley 599. Para la Sala, esta calificación: “será estrictamente para efectos de la punibilidad por la fecha de ocurrencia de los hechos” (p. 1022). Ahora bien, se flexibiliza el principio de legalidad: “en lo que respecta a la calificación jurídica de la conducta que deduce la Sala, será la prevista en la Ley 1719 de 2014, que modificó la Ley 599 de 2000, actual Código Penal” (p. 1022).

El proceder de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín se sustenta en la cita *in extenso* que se hace a continuación:

“La situación descrita ha sido tenida en cuenta por esta Sala en precedentes decisiones para el delito de Homicidio en Persona Protegida en hechos cometidos previa vigencia de la Ley 599 de 2000, entendiendo que en virtud del Bloque de Constitucionalidad por medio del cual se incorporan al ordenamiento jurídico interno conductas que han sido reconocidas como delitos en contra del Derecho Internacional Humanitario en virtud de tratados suscritos y adheridos por el Estado Colombiano, debe aplicarse dicha calificación. Así, para el caso concreto del aborto la Sala aplicará la misma premisa ya enunciada y en virtud de la Ley 1719 de 2014 artículo 10 que adiciona el artículo 139E Ley 599 de 2000, los hechos serán calificados como Aborto sin Consentimiento en Persona Protegida por haber sido cometidos en el marco de un conflicto armado interno sin que pueda alegarse prescripción como quiera que tal y como lo acotó la Fiscalía 6 Delegada por tratarse de un delito en contra del Derecho Internacional Humanitario se encuentra intacta la facultad persecutora del Estado para este tipo de conductas punibles. Será entonces legalizado el cargo de Aborto Forzado en persona protegida atendiendo a las explicaciones anotadas según lo previsto en el artículo 10 que adicionó el artículo 139E a la Ley 599 de 2000 de la Ley 1719 de 2014” (p. 1022-1023).

Esta calificación se realiza para tres hechos teniendo en cuenta que las víctimas son menores de edad, lo que no sucede para dieciocho de los demás

hechos que constitutivos de aborto sin consentimiento, la edad importó para determinar la retroactividad de personas que ostentan la condición de protegidas por el DIH al ser reclutadas y obligadas a abortar en su condición de menores combatientes de un GAOML, lo que no sucede con quienes ya cumplían la mayoría de edad al momento de los hechos.

Problemáticas puntuales de la judicialización de conductas de VBG en el proceso penal especial de Justicia y Paz

De acuerdo con el análisis, cuando un alto número de decisiones judiciales en el proceso penal especial de Justicia y Paz no toma en cuenta la violencia que ocurre por razón de género, muestra que los operadores judiciales poco atienden al fenómeno muy a pesar de estar consagrado y exigido desde fases muy tempranas de la aplicación e incorporación del tema de género en el proceso. También puede suceder que en algunas sentencias se mencione el fenómeno de VBG y éste haga parte del análisis dentro de la presentación de los contextos, de las conceptualizaciones o de la fundamentación normativa, tal como se analizó en el capítulo segundo de la presente investigación, pero pasa en algunas decisiones que ni siquiera se hace mención al fenómeno. Una vez realizada esta observación, se elaboran tablas con las sentencias discriminadas de acuerdo con cada una de las salas de Justicia y Paz en las cuales no hay judicialización de hechos de VBG.

En primer lugar, en la de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que a la fecha del análisis ha proferido un total de

veintiseis (26) sentencias, como se ve en la tabla 5, en diecisiete (17) de ellas no se judicializan conductas constitutivas de VBG (esto es, en un 65 % de su producción).

Tabla 5

Sentencias de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá que no judicializan conductas de VBG

Nº	POSTULADO/S	FECHA
1	Edwar Cobos Téllez y Úber Enrique Banquez	2010.06.29 (1)
2	Jorge Iván Laverde Zapata	2010.12.02 (2)
3	Aramis Machado Ortiz	2011.06.29 (3)
4	Fredy Rendón Herrera	2011.12.16 (6)
5	José Barney Veloza García	2012.01.31 (7)
6	Orlando Villa Zapata	2012.04.16 (8)
7	Edison Giraldo Paniagua	2012.07.30 (9)
8	Gian Carlo Gutiérrez Suárez	2012.09.04 (10)
9	Rodrigo Pérez Alzate	2013.08.30 (11)
10	Hébert Veloza García	2013.10.30 (12)
11	Armando Madriaga Picón y Jesús Noraldo Basto León	2013.12.06 (13)
12	José Baldomero Linares y otros	2013.12.06 (14)
13	Guillermo Pérez Alzate y otros	2014.09.29 (19)
14	Salvatore Mancuso Gómez y otros	2014.10.31 (21)
15	Juan Francisco Prada Márquez	2014.12.11 (24)
16	Saúl Rincón Camelo	2015.04.10 (28)
17	Jhon Fredy Rubio Sierra y otros	2015.07.03 (30)

En segundo lugar, de las siete (7) sentencias proferidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en cinco de ellas no se judicializan conductas constitutivas de VBG (esto es, en un 71.4 %):

No.	POSTULADO	FECHA
1	Darío Enrique Vélez Trujillo y otros	2014.08.27 (17)
2	Jesús Ignacio Roldán Pérez	2014.12.09 (23)
3	Jorge Eliécer Barranco Galván y otros	2015.04.23 (29)
4	Uber Darío Yáñez Cavadías	2015.07.07 (31)
5	Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga y otros	2015.09.24 (34)

En tercer lugar, de las tres sentencias de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, en ninguna de ellas se judicializan conductas constitutivas de VBG (esto es, en un 100 %):

No.	POSTULADO	FECHA
1	Luis Carlos Pestana Coronado	2014.08.01 (16)
2	Jancy Novoa Peñaranda	2014.10.21 (20)
3	Ferney Alberto Argumedo Torres	2015.07.13 (32)

Ausencia inicial de estrategias de priorización

La necesidad de aplicación de estrategias de “priorización” en el proceso penal especial de Justicia y Paz ha sido visible en trabajos académicos y en aportes al proceso. En la primera edición del texto: *Procedimiento de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y derecho*

penal internacional. Estudio sobre la facultad de intervención complementaria de la Corte Penal Internacional a la luz del denominado proceso de 'Justicia y paz' en Colombia, trabajo realizado por Ambos y, como colaboradores, Huber, González-Fuente y Zuluaga (2010), se recuerda con cita al documento la propuesta de contenido de los programas metodológicos en los cuales se dispone la actividad del ente acusador para investigar, según lo exige el inciso tercero del artículo 17 de la Ley 975 de 2005 (que trata lo concerniente a la versión libre y confesión), se traen elementos del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), como punto para que sea evaluada la información, de igual manera, para identificar, clasificar, planear, ordenar y, por su puesto, priorizar los actos de investigación (Ambos, 2010, párr. 165).

También se evoca y menciona que a partir de la decisión en contra del postulado Wilson Salazar Carrascal, sentencia condenatoria emitida el 19 de marzo de 2009, en segunda instancia, la Sala Penal de la CSJ el 31 de junio del mismo año (proceso No. 31539) declaró la nulidad “a partir del acto de formulación de cargos”, inclusive, teniendo, entre otros, por argumento en el considerando 1.1, la afirmación de que: “el funcionario judicial debe no solo analizar el caso concreto sino contextualizarlo dentro del conflicto, identificando los patrones de violencia y los demás actores seguramente de rango superior que también son responsables”. Para Ambos y sus colaboradores en la publicación: “estas exigencias, en combinación con el sinnúmero de hechos, victimarios y víctimas, ponen de manifiesto que una estrategia global, en particular con respecto a la *selección y priorización* de casos e investigaciones, cuya falta ya ha sido criticada anteriormente [en el párrafo 311 de la publicación], es indispensable” (2010, párr. 381).

Como advierten Ambos y sus colaboradores, la priorización y selección se requieren como estrategia para que, en correspondencia:

“la Fiscalía diseñe una estrategia global e integral para la selección y priorización de situaciones y casos emblemáticos que involucren a los bloques y las personas más responsables de los GAOML. Así, estos casos pueden servir para el esclarecimiento de los patrones de la sistematicidad y generalidad de las actividades delictivas de los GAOML. La experiencia muestra que una selección inadecuada de casos podría obstaculizar las labores investigativas orientadas en el fenómeno de la macrocriminalidad” (Ambos, 2010, párr. 399).

En continuidad con lo sugerido, Ambos (2011) realiza una compilación bajo el título: *Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales. Un estudio comparado*, en la cual se señala:

“[a]nte la gran cantidad de víctimas, hechos denunciados y casos tratados en los procesos de Justicia y Paz, resulta de primordial importancia empezar a diseñar una estrategia global de investigación. Actualmente, los procesos que se adelantan son de carácter fraccionado y aislado y, a pesar de los altos índices de hechos delictivos, no reflejan adecuadamente el fenómeno de la macrocriminalidad y sistematicidad. Además y más grave todavía, no parece factible que con el modo de trabajo actual se puedan terminar los procesos ya iniciados y mucho menos los todavía pendientes dentro de un tiempo razonable” (p. 10).

El estudio que realiza Ambos tuvo, en palabras de Forer, director del proyecto de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y el proyecto de nombre ProFis, por finalidad: “brindar elementos de juicio a los funcionarios encargados de la toma de decisiones al interior de las instituciones involucradas en el Proceso Especial de Justicia y Paz”.

En ese momento solamente se habían producido cuatro sentencias en el proceso penal especial de Justicia y Paz, y así lo resalta la página de VerdadAbierta.com (2011) que documenta temas del Conflicto Armado en Colombia, con un artículo del 07 de septiembre de 2011 titulado *Consejos para agilizar Justicia y Paz*, artículo en el cual se señala que según el Alto Consejero de Seguridad Nacional, Sergio Jaramillo Cano, “al paso que van los procesos judiciales, la Fiscalía se demoraría 94 años en terminarlos”.

En la sentencia en contra del postulado Aramis Machado Arias, desmovilizado del Frente Fronteras de las AUC, proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá el 29 de junio de 2011, se le condena por concierto para delinquir agravado, fuga de presos, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y fabricación, tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. Desde luego, está austente el tema de género, sin embargo, para interés en el proceso, se muestra en la decisión de la Sala de Casación Penal de la CSJ en la segunda instancia proferida el 06 de diciembre de 2012, la “necesidad de priorización”, dado que: “hay un evidente clamor de justicia por las 67.000 víctimas de las atrocidades cometidas por las autodefensas, principalmente homicidios, desplazamiento, desaparición for-

zada, reclutamiento, extorsión, secuestro y masacres, del que permanece una estela de dolor en el territorio nacional” (num. 2).

Con respaldo en la sentencia C-370 de 2006, se establece la urgencia de tal priorización, toda vez que: “[e]l contenido mínimo del derecho de las víctimas a la verdad protege, en primer lugar, el derecho a que los delitos más graves sean investigados. Esto implica que tales delitos deben ser investigados y que el Estado es responsable por acción o por omisión si no hay una investigación seria acorde con la normatividad nacional e internacional” (num. 6.2.2.1.7.6. p. 310). Como se puede observar, se toma en cuenta el criterio “objetivo” por la naturaleza del delito. En atención a la VBG, el criterio de priorización es de carácter “subjetivo” porque atiende las condiciones de quien resulta victimizado por razones de género.

La reforma que a la Ley de Justicia y Paz incorpora la Ley 1592 de 2012 contiene la posibilidad de que sea aplicada la estrategia de priorización por parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN) quien desde la Directiva 001 del 04 de octubre de 2012 ya la había proyectado. Por esta razón fue posible el desarrollo de un Plan de acción de casos a priorizar por la Unidad Nacional de Fiscales para la Justicia y la Paz (Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, 2013), lo que significó un aumento cuantitativo en la judicialización de la VBG, porque se aplica la estrategia con la atención al carácter subjetivo de las características de las víctimas, y también desde el punto de vista objetivo por la gravedad de los hechos. Así, bajo la denominación de “patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género”, se tienen sentencias luego de 2014 con incremento en

el número de hechos y conductas que tienen vinculada VBG.

Sin embargo, persisten las anotaciones sobre la necesidad de hacer efectiva y aplicar la estrategia de priorización. Así en la sentencia contra el postulado Ramón Isaza del 29 de mayo de 2014, teniendo en cuenta la contextualización de la actuación de las ACMM, y debido a que diferentes actores pusieron de manifiesto en el proceso la ocurrencia de VS y VBG al que fueron sometidos determinados grupos de mujeres de la región del Magdalena Medio, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá exhortó a la FGN para que

“dentro de sus estrategias de priorización en las Unidades Delegadas para la Justicia y la Paz y en la Unidad de Análisis y Contexto incluya procesos de investigación sobre estas afectaciones, esto con el fin de que se den a conocer un patrón de macrocriminalidad, las características y el número de mujeres víctimas de la violencia generalizada y/o sistemática que sufrió este tipo de población de la región. Para la Sala resulta necesario que la FGN investigue las graves afectaciones en materia de esclavitud, trata de personas, trabajos forzados, violencia sexual y violencia basada en género que significaron los actos cometidos por las ACMM (párr. 1397).

En el proveído, el numeral 38º de la parte resolutive contiene dicha exhortación para que la FGN incluya en los procesos de investigación sobre la VS y la VBG, las respectivas estrategias que den conocer:

“el patrón de macrocriminalidad, las características y el número de mujeres víctimas de la violencia generalizada y/o sistemática que sufrió este tipo de población de la región. Para la Sala resulta necesario que la FGN investigue las graves afectaciones en materia de esclavitud, trata de personas, trabajos forzados, violencia sexual y violencia basada en género que significaron los actos cometidos por las ACMM”.

Finalmente, y de acuerdo con la aplicación de la estrategia de priorización, también llama la atención que el hecho de número 21, constitutivo de VBG de la segunda sentencia contra Salvatore Mancuso Gómez y otros del 20 de noviembre de 2014, involucre a otro jefe paramilitar cuyo proceso también ostenta la condición de “priorizado” por la FGN de acuerdo con el Plan trazado en 2013, proceso cuya decisión está pendiente para proferirse por el Tribunal Superior de Distrito de Barranquilla. Se trata del postulado Hernán Giraldo Serna quien, a diferencia de Salvatore Mancuso Gómez, le fueron imputados hechos de VBG perpetrados por él mismo y que están pendientes del fallo cuyo incidente de reparación integral ya se surtió en el año 2014, pero que a la fecha no se ha proferido.

En el hecho, la víctima, siendo menor de 13 años, recibió pago por parte de Giraldo Serna y, “según lo afirmado por la Fiscalía la joven continuó con esta actividad por exigencia del comandante paramilitar por aproximadamente un año” (párr. 2229). En el hecho se condena al postulado Mancuso Gómez como autor mediato “por los delitos de prostitución forzada; de que trata el artículo 141 de la Ley 599 de 2000, en concurso homogéneo sucesivo, agravado por el numeral 4º del artículo

211 del Código Penal” (párr. 2232). Ahora bien, en el texto se omite referir que el postulado Giraldo Serna ostenta la calidad de “priorizado” en un proceso dentro de la aplicación de la Ley 975 de 2005, lo que demuestra que no hay conexión entre las actuaciones de una y otra sala de los tribunales superiores.

Falta de cuidado para la reserva de los nombres e identidades de las víctimas

Las decisiones en el proceso penal especial de Justicia y Paz nombran a las víctimas con su plena identidad. En las sentencias y demás providencias judiciales aparecen los nombres, los apellidos de las víctimas directas y los de sus familiares. Esto constituye una flagrante violación a la intimidad de las víctimas y, por la intencionalidad de mantener estos datos en reserva, crea una forma de revictimización.

Además de que las víctimas padecen lo ocurrido en los hechos como consecuencia de la acción de los GAOML, una sentencia, documento o providencia judicial de otra naturaleza que les nombre e identifique vulnera sus derechos, máxime cuando las personas directamente afectadas aún sobreviven. Piénsese en aquellos casos en el que fueron prostituídas forzosamente, esclavizadas, violadas, etc., lo que significa saber que su nombre, número de cédula y demás datos identificadores están publicados y disponibles con tan solo una búsqueda con mecanismos como *Google* para hacerse visible porque sus datos están disponibles en Internet. Con una consulta, un nombre puede remitir a una sentencia judicial u otro auto o documento escrito y publicado en el marco del proceso.

Llama la atención que aún con el comienzo de la vigencia de la Ley 1719 que fue sancionada el 18 de junio de 2014, norma en la cual se ordena que para los casos de víctimas menores de 18 años en la investigación y juzgamiento de casos de violencia sexual, ante todo se respete como derecho señalado en el artículo 13 “la intimidad y privacidad manteniendo la confidencialidad de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas”. Y en el caso de las víctimas mayores, por lo menos debió tenerse su consentimiento o no para ser identificadas en el texto de las providencias judiciales.

Ausencia de reconocimiento de patrones en relación con la VBG

La exigencia de hacer visibles patrones de macrocriminalidad, como parte de la verdad que se devela y que es un derecho para garantizarse en el proceso penal especial de Justicia y Paz, se incorpora a partir de la reforma a la Ley de Justicia y Paz que hace la Ley 1592 de 2012. Se señala en el reformado artículo 15, inciso 1º de la Ley 905 de 2005: “los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre el patrón de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y se pueda develar los contextos, las causas y los motivos del mismo”. Sin embargo, la exigencia sobre el esclarecimiento de los patrones también se tenía y ocurría con antelación a la Ley 1592 de 2012, por lo que sobre el particular señala Cortés (2016), algunas sentencias en el proceso penal especial de Justicia y Paz

ya contenían patrones y otras no, pero a partir de la citada Ley, algunas reconocen patrones mientras que otras “se abstienen” de hacerlo.

Desde la decisión del 2 de diciembre de 2010, en contra del postulado Jorge Iván Laverde Zapata, se tienen acreditados patrones y se vincula sin que sea expresamente nombrada la VBG. Como comandante del Frente Fronteras, el postulado dirigió el cumplimiento de las políticas del GAOML:

“al punto que él mismo impartió las órdenes a los combatientes urbanos bajo su mando para que ejecutaran a quienes fueran señalados de ser ‘ladrones, viciosos, homosexuales, etc.’ Además, dejaron mensajes en las paredes informando que seguirían atentando contra personas calificadas como indeseables por la comunidad (“fuera viciosos”, “muerte a ladrones”); así lo acreditó la Fiscalía en la audiencia respectiva ante esta Sala” (párr. 208).

En el hecho 13 de la sentencia se describe una incursión en un billar en donde fueron asesinadas cinco personas y dos más heridas, y se señala en el análisis del caso que los miembros del GAOML argumentan que “tenían información [de] que el lugar era frecuentado por personas que formaban parte de bandas delincuenciales, expendedores y consumidores de drogas alucinógenas” (párr. 31). Así expuesto, sostiene la Sala que: “[c]on el mismo patrón de conducta que los caracterizó en su actuar en la ciudad de Cúcuta y zonas aledañas, dejaron mensajes tales como ‘rodarán cabezas’, ‘muerte a viciosos’, ‘fuera ratas’, ‘fuera zorras’” (párr. 32).

También se tienen patrones en la decisión del 1 de diciembre de 2011 contra los postulados José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas. Para el abordaje y visibilización, en términos de “patrones” del fenómeno de VBG en el marco del conflicto armado colombiano, esta sentencia con anterioridad a la reforma de la Ley 975 de 2005 con la Ley 1592 de 2012, adecúa los hechos con las categorías de DPI y hace mención, en términos de “patrones relacionados con los crímenes sexuales”, lo sustentado y elaborado por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008.

La Corte en su análisis sobre los “riesgos específicos y cargas extraordinarias que les impone por su género la violencia armada” (num, II1), hizo énfasis en el “riesgo de violencia sexual”. Este análisis le sirvió como fundamento a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá para que *in extenso* citara el Auto 092 de 2008, con la aclaración de que la Corte Constitucional: “avocó el conocimiento de múltiples casos, llegando a identificar diferentes patrones relacionados con crímenes sexuales” (párr. 88). A continuación, se cita y resalta en la sentencia contra Peña Tobón, Morelo Castro y Hernández Calderas que:

“(…) la Corte hace hincapié en el riesgo de violencia sexual, constatando la gravedad y generalización de la situación que se ha puesto de presente por diversas vías procesales ante esta Corporación en este sentido, mediante informaciones reiteradas, coherentes y consistentes presentadas por las víctimas o por organizaciones que promueven sus derechos; y explica que los relatos de episodios de vio-

lencia sexual contra mujeres sobre los que ha sido alertada incluyen, (...) (a) actos de violencia sexual perpetrados como parte integrante de operaciones violentas de mayor envergadura -tales como masacres, tomas, pillajes y destrucciones de poblados-, cometidos contra las mujeres, jóvenes, niñas y adultas de la localidad afectada por parte de los integrantes de grupos armados al margen de la ley; (b) actos deliberados de violencia sexual cometidos ya no en el marco de acciones violentas de mayor alcance, sino individual y premeditadamente por los miembros de todos los grupos armados que toman parte en el conflicto, que en sí mismos forman parte (i) de estrategias bélicas enfocadas en el amedrentamiento de la población, (ii) de retaliación contra los auxiliares reales o presuntos del bando enemigo a través del ejercicio de la violencia contra las mujeres de sus familias o comunidades, (iii) de retaliación contra las mujeres acusadas de ser colaboradoras o informantes de alguno de los grupos armados enfrentados, (iv) de avance en el control territorial y de recursos, (v) de coacción para diversos propósitos en el marco de las estrategias de avance de los grupos armados, (vi) de obtención de información mediante el secuestro y sometimiento sexual de las víctimas, o (vii) de simple ferocidad; (c) la violencia sexual contra mujeres señaladas de tener relaciones familiares o afectivas (reales o presuntas) con un miembro o colaborador de alguno de los actores armados legales e ilegales, por parte de sus bandos enemigos, en tanto forma de retaliación y de amedrentamiento de sus comunidades; (d) la violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas que

son reclutadas por los grupos armados al margen de la ley, violencia sexual que incluye en forma reiterada y sistemática: (i) la violación, (ii) la planificación reproductiva forzada, (iii) la esclavización y explotación sexuales, (iv) la prostitución forzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por parte de los jefes o comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto forzado y (ix) el contagio de infecciones de transmisión sexual; (e) el sometimiento de las mujeres, jóvenes y niñas civiles a violaciones, abusos y acosos sexuales individuales o colectivos por parte de los miembros de los grupos armados que operan en su región con el propósito de obtener éstos su propio placer sexual; (f) actos de violencia sexual contra las mujeres civiles que quebrantan con su comportamiento público o privado los códigos sociales de conducta impuestos de facto por los grupos armados al margen de la ley en amplias extensiones del territorio nacional; (g) actos de violencia sexual contra mujeres que forman parte de organizaciones sociales, comunitarias o políticas o que se desempeñan como líderes o promotoras de derechos humanos, o contra mujeres miembros de sus familias, en tanto forma de retaliación, represión y silenciamiento de sus actividades por parte de los actores armados; (h) casos de prostitución forzada y esclavización sexual de mujeres civiles perpetrados por miembros de los grupos armados al margen de la ley; o (i) amenazas de cometer los actos anteriormente enlistados, o atrocidades semejantes” (párr. 88).

En la sentencia se declara en relación con la dimensión colectiva del derecho a la verdad que:

“el Bloque Vencedores de Arauca adoptó patrones de conducta constitutivos en crímenes de guerra y de lesa humanidad, consistentes en la comisión de masacres, homicidios selectivos, lesiones personales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos contra personas protegidas y con la apropiación y destrucción de bienes y lugares protegidos, siendo los pobladores de la región instrumentalizados, principalmente con el argumento de pertenecer o colaborar con la Subversión (párr. 69-80)” (párr. 325).

Como se ve en la cita, la Sala afirma que las conductas enunciadas, dentro de las cuales se encuentran los accesos carnales en personas protegidas, son parte constitutiva de patrones.

Por su parte, en la sentencia del 06 de diciembre de 2013 contra José Baldomero Linares y otros, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá reconoce que existen patrones de VBG así:

“En sentido general cuando de este tipo de ejercicio del poder se trata, existen unos cambios de referentes, una suerte de ética y estética del “guerrero” o “combatiente”, que objetiviza y reifica a la mujer en medio del conflicto armado, y tras ello se genera una afectación de los referentes e imaginarios culturales y sociales de la región en la cual se desarrolla la violencia. Tampoco debe olvidarse que si este tipo de violencia se dio fue porque existían unos patrones de violencia y

dominación previas que se entretengan con las del conflicto armado, como la violencia intrafamiliar, el matrimonio servil, la violencia sexual y otros” (párr. 1243).

Sin embargo, y a pesar de la exigencia incorporada por la Ley 1592 de 2012 para que en relación con la verdad sean develados los patrones, en el proceso citado contra el postulado José Baldomero Linares y otros se hace la exhortación en el punto sexagésimo séptimo de la parte resolutive para que la Fiscalía dé a conocer los “patrones de macrocriminalidad” en los casos que involucren este tipo de violencia” (pág. 632). Como se puede notar, se cae en una omisión luego de que la misma Sala y en el mismo proveído se hubiese argumentado la existencia de un patrón.

La sentencia del 1 de septiembre de 2014 contra el postulado Luis Eduardo Cifuentes Galindo y otros, miembro de las Autodefensas Bloque Cundinamarca, impuso por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá una fuerte crítica a la metodología de la FGN para la acreditación de los patrones de macrocriminalidad. El caso está en apelación y a la fecha no se ha resuelto, pero de acuerdo con lo decidido por la Sala de Casación Penal de la CSJ en la apelación en el caso Arnubio Triana Mahecha y otros, el 6 de diciembre de 2015, bajo el radicado 45547, se consideran acreditados los patrones y dentro de ellos uno bajo la denominación de VBG.

En el caso contra Cifuentes Galindo se condena por “actos sexuales violentos en persona protegida, art.139” a título de autor mediato, hecho contenido en el número 179 (párr. 408 y ss.); de igual manera, por la

desaparición forzada y acceso carnal violento en persona protegida (art. 138 del CP). Con fundamento en los relatos de las víctimas y con la matriz de análisis que presentó la Fiscalía, el hecho hace parte del “patrón de macrocriminalidad de VBG” (párr. 883 y ss.). En el proveído se señaló que: “la Fiscalía revisó el panorama nacional de este tipo de actuar, del que ya al interior de la Unidad se ha construido un patrón de macro-criminalidad” (párr. 883).

Como se ve, se omite el reconocimiento de un patrón de VBG, pero al comparar y considerar la línea de argumentación para lo que será la segunda instancia en el caso, se tendrá por acreditado dicho patrón a pesar de la abstención de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, con el citado caso contra el postulado Luis Eduardo Cifuentes Galindo y otros, empero, esto afectó en el proceso para que se continuara omitiendo, tal como se ve en la primera sentencia contra Salvatore Mancuso Gómez y otros, fallada por la misma Sala el 31 de octubre de 2014, toda vez que hay abstención de reconocer patrones a pesar de que:

“la Fiscalía presentó a la Sala unas ‘prácticas’ que si bien no se determinaban como políticas que hubiesen tenido una directriz general por parte de los comandantes, si encontraban un componente en común, pues se realizaron, ejecutaron y/o fueron toleradas por los comandantes del Bloque Catatumbo. En razón de este segundo grupo, se presentaron las siguientes prácticas por parte de la Fiscalía: (...) Violencia contra la mujer, abusos sexuales” (párr. 723)

El 16 de diciembre de 2014, en el caso contra Ar-nubio Triana Mahecha y otros, se había continuado con las críticas a la metodología de la FGN y la sentencia no reconoció la caracterización de los patrones de macro-criminalidad de acuerdo con las argumentaciones reto-madas de la sentencia contra Luis Eduardo Cifuentes Galindo del 01 de septiembre de 2014. Sin embargo, como se afirmó, en segunda instancia, bajo el radicado 45547, la CSJ determinó el 16 de diciembre de 2015:

“Revocar el numeral cuarto de la parte reso-lutiva de la sentencia y, en su lugar, se dis-pone declarar esclarecida la existencia de los patrones de macrocriminalidad ‘Desaparición forzada’, ‘Reclutamiento ilícito’, ‘Violencia ba-sada en género’, ‘Homicidio’ y ‘Desplazamien-to forzado’, en el actuar de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá” (p. 121).

Contrario a lo sucedido, en el caso contra Cifuen-tes Galindo, sucede en la misma Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el reconocimiento de patrones, y dentro de ellos uno de VBG en la segunda decisión contra Salvatore Mancuso Gómez y otros el 20 de noviembre de 2014. La acre-ditación del patrón se hizo con la contextualización de los casos llevados al proceso a partir de un consolida-do que aportó la FGN en una matriz con registro de 645 hechos que involucraron tipos de VBG atribuidos a estructuras de GAOML, 162 de ellos perpetrados por el Bloque Norte, 31 por el Bloque Catatumbo, 17 por el Bloque Córdoba y 3 por el Bloque Montes de María (párr. 1305). Con fundamento en la recolección de los datos, la sentencia reconoce:

“un total de 205 víctimas directas de delitos de VBG, cuyas afectaciones conforme a como sentidamente lo relataron durante el Incidente de identificación de afectaciones y de victimas ante la Sala, involucran importantes daños entre los que se rescatan los sicológicos, en la salud física, en el libre desarrollo de la personalidad, en sus sentimientos de seguridad y confianza hacia el sexo opuesto y en su estructuras familiares y sociales” (párr. 1306).

En la decisión se declaran acreditados patrones de macrocriminalidad puestos en evidencia por conductas constitutivas de VBG (num. II.1. de la parte resolutive). Por lo mismo, se declara que tales patrones “se corresponden con graves, sistemáticas y generalizadas violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDDH) y contra el DIH” (num. II.2. de la parte resolutive). Y en correspondencia, se declara que tales patrones:

“se tradujeron en la ejecución de asesinatos y actos que atentaron contra la integridad física de personas; (...) Tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida; tortura; violación; esclavitud sexual; acceso carnal violento; actos sexuales abusivos; prostitución forzada o esclavitud sexual; actos sexuales violentos en persona protegida; embarazo forzado; esterilización forzada; y desaparición forzada de personas” (num. II.4. de la parte resolutive).

Mientras tanto, en otra Sala de Justicia y Paz ubicada en el Tribunal Superior de Medellín, el 9 de diciembre de 2014 se reconoce en el caso contra Jesús Ignacio Roldán Pérez, exintegrante del denominado Bloque Calima de las AUC, la importancia de la presentación de los hechos en consonancia con los requisitos para la acreditación de patrones de macrocriminalidad. Para ello, en el proveído se destaca un “protocolo” que se debe incorporar:

“[l]a condición y calidad de las víctimas de tales crímenes y las razones de su victimización, en especial los grupos o poblaciones más vulnerables, las víctimas de la violencia basada en el género, las víctimas de derechos colectivos, como los sindicales o ambientales, las que son sujetos constitucionalmente protegidos, como las poblaciones afrocolombianas, raizales (San Andrés, Islas), negras, palenqueras e indígenas” (párr. 426 p. 240)

Por su parte, esta Sala, en la sentencia en contra de Ramiro Vanoy Murillo del 2 de julio de 2015, se vale de distintas fuentes para acreditar un patrón de macrocriminalidad relacionado con la VBG. Para ello dedicó un apartado sobre “enfoque diferencial y de género respecto de las macrocriminalizaciones y victimización del Bloque Mineros” (p. 1265 y ss.). A partir de las constataciones,²⁶ los hallazgos se consagran declarando en la parte resolutive en el numeral octavo que:

²⁶ *Ut supra* apartado 2.3.2 en el cual se resumen.

“en el presente proceso, conforme a lo motivado, se acredita la estructura de PATRONES MACRO-CRIMINALES que se evidenciaron mediante los delitos (...) VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG); (...) a los que se adecuaron las acciones desplegadas y se corresponden con graves, sistemáticos y generalizados ataques contra la población civil; estas son violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH), perpetradas por el postulado RAMIRO VANOY MURILLO, en su condición de Máximo Responsable, Comandante del desmovilizado Bloque Mineros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.)” (p. 2510).

La argumentación de la parte motiva toma en cuenta situaciones relacionadas con el monopolio del ejercicio de la criminalidad y el control territorial ejercido por el GAOML (p. 1364). El análisis desarrollado permitió la judicialización de un caso de homicidio por razones de género en contra de mujeres en condición de discapacidad (p. 1298-1299); en el hecho se mencionan tres mujeres asesinadas con discapacidad mental, pero se judicializa solamente por una en el cargo de número 172. De la misma manera, se condena por el homicidio de una mujer embarazada, a la cual le es sacada la criatura de seis meses, relato y judicialización consagrada como el cargo de número 144 del proveído (p. 1042).

Como se puede notar, y luego del estudio de la decisión contra Vanoy Murillo, se requiere para la acreditación de un patrón, el estudio que retoma elementos del contexto y elaboraciones que puede hacer la misma Sala

para no omitir la mención de dichos patrones. Esto contraría la perspectiva de la Sala de Justicia y Paz ubicada en Medellín, frente a lo que en perspectiva va realizando la Sala de Justicia y Paz ubicada en Bogotá. La primera no ha tenido ningún problema para valerse de los datos del contexto y aportes de la FGN para que configure y presente bajo la denominación de patrón lo discutido y debatido en el proceso. No así con la segunda, dado que se ha abstenido de hacerlo como se analizó en el caso de la sentencia del 06 de diciembre de 2013 contra José Baldomero Linares y otros, y ante una apertura para que sea la Sala quien falle como acreditados los patrones sin que se haya hecho, se tiene el salvamento de voto con fecha del 4 de marzo de 2016 por parte de la magistrada Alexandra Valencia Molina a la sentencia en contra de Ramón María Isaza y otros del 29 de marzo de 2016, toda vez que no podría ser objeto de un fallo un patrón que se aparte de los criterios expuestos por la FGN en el proceso ni que haya sido incorporado en las sesiones de audiencia (p. 9-10). En el caso contra Vanoy Murillo, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, hacía un año lo había realizado sin ningún problema para los patrones que allí acreditó.

La misma Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en la sentencia contra Olimpo de Jesús Sánchez Caro y otros, exintegrantes de grupos guerrilleros (ERG y el Frente Ernesto Che Guevara del ELN), le llama la atención desde el punto metodológico a la FGN para la caracterización de patrones de macrocriminalidad, sin embargo, resuelve que la VBG (junto con el reclutamiento) sí ostentan la condición de patrones (p. 2409). Se lee en el numeral tercero de la parte resolutive:

“No aceptar la caracterización de patrones criminales expuestos por la Fiscalía 6 de la Unidad Nacional de Fiscalías Especializada de Justicia Transicional, ya que no cumplen con los requisitos técnicos ni metodológicos, no se ajustan a la realidad de lo ocurrido tal como se indicó en la parte motiva de esta decisión; exceptuando los patrones de Reclutamiento ilícito y Violencia Basada en Género que sí se aceptan, por las razones ya expuestas en los apartes correspondientes de esta sentencia”.

Falta de cuidado en casos en los que no se menciona la autoría en hechos constitutivos de VBG

En directa conexión con la autoría y participación en conductas constitutivas de VBG de postulados en el proceso penal especial de JyP, se tiene, en las sentencias analizadas, la mayor cantidad de delitos atribuidos en calidad de *autor mediato* (206 hechos). De otro lado, seis (6) casos hacen referencia a la existencia de *coautores impropios*, a los que se sumaría la calificación tres (3) a título de *coautores*. En cuatro (4) casos se judicializaron a los autores denominados “materiales” en algunos casos y “directos” en otros.

En las dos primeras sentencias que contienen hechos de VS se tienen como formas de autoría y participación, un *autor material* y *coautores impropios* (para el caso de la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá contra José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo

Castro y José Manuel Hernández Calderas del 1 de diciembre de 2011), y *autor mediato* en el hecho de la decisión en contra de Edgar Ignacio Fierro Flores y Andrés Mauricio Torres León del 7 de diciembre de 2011 proferida por la misma Sala. Sobre el primer caso:

“[l]a Sala acoge la línea jurisprudencial entre los años 2007 a 2009 de la ‘coautoría impropia’ en la que se considera que quienes imparten órdenes dentro de estructuras organizativas de poder, tienen la condición de coautores materiales impropios por división de trabajo, y no de autores mediatos, como lo postula el profesor Claus Roxin. Esta posición se mantuvo en las sentencias de los casos La Gabarra, Yamid Amat y Machuca. El fundamento jurídico de dicha posición estribó en que no existe autoría mediata, porque no se está frente a un “sujeto de atrás”; en tanto que los autores materiales fueron coautores, tienen su voluntad dirigida con conocimiento e inteligencia al logro de los fines compatibles con su propia ideología; lo hicieron por convicción política propia, sin ser ‘utilizados’, sin ser instrumentalizados, y sin engaños. Se trató de un caso de coautoría por división de trabajo, denominado ‘coautoría impropia’” (Bernal, 2013, p. 76).

La distinción entre la coautoría propia o impropia, se tiene en la sentencia contra el postulado Orlando Villa Zapata proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá el 16 de abril de 2012 aclara:

“En cuanto al desarrollo de la calificación de la coautoría, se considera que existe coautoría propia cuando cada uno de los sujetos intervinientes realiza íntegra y simultáneamente la misma conducta ilícita acordada por todos. Cada uno de esos coautores es autor en sentido estricto. En correspondencia, se habla de coautor impropio cuando cada uno de los sujetos intervinientes en el hecho punible no ejecutan integral y materialmente la conducta definida en el tipo, pero sí lo hacen prestando contribución objetiva a la consecución del resultado común en la que cada cual tiene dominio funcional del hecho con división de trabajo, cumpliendo el acuerdo expreso o tácito, previo o concurrente a la comisión del hecho, sin que para la atribución de responsabilidad resulte indispensable que cada uno lleve a cabo o ejecute la totalidad del supuesto fáctico contenido en el tipo o que sólo deba responder por el aporte realizado y desconectado del plan común” (párr. 622).

Ahora bien, como *autor mediato* se tiene el grado de participación del postulado Édgar Ignacio Fierro Flores por el hecho de VBG. Sucede en la segunda sentencia contra el postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros que los hechos con los rótulos 17 y 22, dentro del “patrón de violencia basada en género”, no tienen señalamiento del grado de participación, lo que constituye una omisión.

Conclusiones

El 'género' no es lo mismo que el 'sexo', dado que éste se detiene en una connotación física y biológica, mientras que aquél incorpora aspectos psicológicos y culturales, por lo cual consiste en una construcción con carácter social e histórico. También es importante destacar que el concepto de 'género' se amplía para trascender su identificación con la mujer, lo que hace posible pensar la diferencia e involucrar aspectos como identidad u orientación sexual y diversidad.

Por su parte, la *violencia basada en genero* (VBG) se comete contra las personas por su condición, esto es, les sucede a las personas por ser niño u hombre, niña o mujer, o por razones de orientación e identidad sexual, lo que puede manifestarse de manera física, moral, psicológica, económica o de cualquier tipo. La VBG trasciende a su limitación frente a una de sus formas como *violencia sexual* (VS). El concepto y ampliación de la VBG supera la delimitación a la identificación de género con mujer y a la identificación su identificación con una de sus manifestaciones, esto es la VS, lo que da cabida a distintas formas y amplitud en la consideración de conductas punibles cuya asociación vincula VBG. Así, un "feminicidio" no podría tener como sujeto pasivo solamente a una mujer, sino, por razón de identidad, se puede tener a una persona "transgénero" por concebirse a sí misma como mujer. Si esta situación es el motivo de su victimización y muerte, se está ante una descripción que cabe dentro del tipo adicionado por la Ley 1761 de 2015 que incorporó el artículo 104A en el CP.

También, si se matara a una mujer por su orientación sexual, de acuerdo con el artículo 104B, se está ante un “feminicidio agravado”.

La lucha contra la VBG goza de protección que parte de estándares internacionales y su paulatina incorporación en la legislación penal colombiana ha hecho posible que durante el proceso penal especial de Justicia y Paz haya una cualificación en el reconocimiento de conductas constitutivas de estas formas de violencia, por lo que las adecuaciones correspondan a los estándares internacionales, bien sea para la visualización de las mismas en la parte motiva cuando por el principio de legalidad no pueden aplicarse nuevos tipos penales, o en la parte resolutive con la adecuación de las conductas sobre la base con la cual se condena.

Por estas razones, en el *proceso* se tienen calificaciones en la parte motiva de decisiones que resaltan, por ejemplo, la “desnudez” o la “esterilización” que padecen personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), tipos adicionados por la Ley 1719 de 2014. Sin embargo, se tiene una lenta incorporación de conductas constitutivas de VBG en la legislación penal colombiana y en la judicialización que se adelanta en el proceso especial de Justicia y Paz. Esto ha hecho que distintas organizaciones tengan una concepción peyorativa frente a los avances, empero, frente a los últimos acontecimientos y movilidad del proceso con la incorporación de conductas contenidas en estándares internacionales, aunada la estrategia de “priorización” e identificación de “patrones”, podría cambiarse la perspectiva, toda vez que, como se mos-

tró, en lo avanzado se ha perfeccionado la conceptualización sobre la VBG, igualmente se tienen reconocidas distintas “formas de VBG” y la fundamentación sobre normatividad para proceder con la judicialización ya no podría pasar desapercibida.

Con ese panorama, la judicialización de conductas constitutivas de VBG en el proceso penal especial de Justicia y Paz se destaca en diez (10) de las treinta y seis (36) jurisprudencias analizadas hasta la fecha de la redacción del presente informe final de investigación, dentro de las cuales la segunda sentencia contra el postulado *Salvatore Mancuso y otros* contiene ciento setenta y seis (176) hechos constitutivos de VBG. La situación desde el punto de vista cuantitativo muestra un crecimiento cuando la atención de la estrategia de priorización se aplicó para que, además de hacer visible los hechos constitutivos de VBG, se procediera con su respectivo reconocimiento en la aplicación de justicia; se constituye en una manifestación y aproximación a la verdad sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado.

Como conductas de VBG se tienen dieciocho (18) tipos penales objeto de las decisiones en el proceso. Además del acceso carnal violento, los actos sexuales violentos con sus circunstancias de agravación, se han realizado adecuaciones típicas correspondientes a la prostitución forzada, el aborto sin consentimiento y asociados con la VBG, los tratos inhumanos y degradantes, homicidios en persona protegida, lesiones personales y la tortura que, o bien concursa en casos en los cuales ha ocurrido VBG, o como se mostró en esta investigación, aparece la posibilidad de que una per-

sona se vea afectada por una tortura contemplando a su pareja ser víctima de VS. También en situaciones que involucran género se ha judicializado la deportación o expulsión, traslado o desplazamiento forzado de la población civil. A esto se suma el contexto de victimización que trae otras conductas punibles en la modalidad concursal.

Como problemáticas en la persecución y sanción de la VBG, sucede en jurisprudencia del proceso que en muchas ocasiones ni siquiera la incorporan, a pesar de existir un mandato y exigencia en la normatividad y en tratados internacionales, y frente a escenarios propios de Justicia Transicional, se debe investigar quienes son responsables, y pasa en el proceso que se tienen jurisprudencias que ni siquiera hacen mención de hechos o elementos fácticos, conceptuales o contextuales sobre este VBG. Al lado de esta omisión en general, está la omisión de aplicar la estrategia de priorización para concentrarse en elementos tanto subjetivos como objetivos que involucran género, como también está la gravísima omisión del deber de reserva sobre las identidades de las víctimas que aparecen con nombres y apellidos, números de identificación y datos de ubicación en documentos y sentencias de carácter público.

Hay problemáticas de carácter general en la jurisprudencia frente a los patrones de conducta y sobre “patrones de macrocriminalidad” que por mandato de la Ley 1592 de 2012 deben estar contenidos para develar la verdad sobre los hechos ocurridos. Hay jurisprudencia en el proceso de Justicia y Paz que desde un inicio reconoce patrones, mientras que luego de

la reforma, algunas sentencias se han abstenido de reconocer tales patrones, situación que ha llevado el caso de apelación para que la Corte Suprema de Justicia corrija decisiones de primera instancia y consagre en la parte resolutive la existencia de tales patrones luego del análisis crítico de cada una de las situaciones. El alcance de los patrones es importante para la aplicación de la figura de “terminación anticipada del proceso” contenida en el artículo 18 de la Ley 975 de 2005. También, se tiene el caso de omitir el grado de responsabilidad penal con el cual hechos de VBG deben atribuirse a los postulados.

Recomendaciones

- Realizar la difusión de la presente investigación de cara al reconocimiento de las problemáticas que en el proceso se han tenido, involucrando a los operadores judiciales que si bien han omitido, también a ellos se debe lo avanzado.
- Profundizar en la perspectiva de difusión que parte de la conceptualización, conocimiento de estándares internacionales y conocimiento de distintas conductas punibles constitutivas de VBG, y que esté direccionada a operadores judiciales tanto en el proceso penal especial de Justicia y Paz, como en nuevos escenarios de Justicia Transicional que para finalizar el conflicto armado se proyectan en el país.
- Advertir sobre la revictimización que constituye la publicación de víctimas de formas de VBG con nombres e identidades que si bien se deben reservar para menores, también se le deben conceder ciertos derechos a las personas mayores, como otorgar su consentimiento para aparecer con sus datos en las sentencias u otro tipo de documento o auto en el marco del proceso.
- Destacar como sentencia con mayor número de hechos judicializados en el proceso penal especial de Justicia y Paz, la segunda decisión en contra del postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros proferida el 20 de noviembre de 2014 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.

- Destacar que en la sentencia contra el postulado Arnubio Triana Mahecha y otros de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el día 16 de diciembre de 2014, reconoce en extenso y a profundidad la violencia ejercida contra población LGBTI.
- Destacar que en la sentencia contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín el 2 de febrero de 2015, con fundamento en la contextualización y dos casos objeto de decisión, acreditaron un “patron de macrocriminalidad” asociado con la VBG.
- Destacar que la decisión en contra de Olimpo de Jesús Sánchez Caro y otros, proferida por el Tribunal Superior de Medellín frente a las conductas constitutivas de VBG perpetradas por exintegrantes de grupos guerrilleros ERG y el Frente Ernesto Che Guevara del ELN, flexibiliza el principio de legalidad y aplica la descripción típica sancionada en 2014 por la Ley 1719 en hechos constitutivos de aborto forzado en persona protegida por el DIH (artículo 139E del CP).
- Sugerir a los intervinientes en el proceso (defensa de quienes están posultados y de víctimas) que todo hecho correspondiente a un territorio y a una estructura de un GAOML pueda culminarse con la atribución de responsabilidad que vincula a quienes están procesados, como a las víctimas, para ser adheridos a patrones de macrocriminalidad de VBG develados y puedan ver terminados sus procesos y obtengan la reparación.

- Temas sobre formas de VBG ya están contenidas a lo largo de la legislación y de la jurisprudencia que paulatinamente se fue incorporando. Por lo mismo, se recomienda volver sobre el estudio de lo sucedido partir de lo aprendido y de lo ya consagrado en procura de abordajes técnicos de los hechos, calificaciones y adecuaciones típicas correspondientes, lo que involucra el seguimiento de lo desarrollado y la proyección para la finalización en el proceso penal especial de Justicia y Paz y la apertura ante la posible aplicación de un nuevo mecanismo de Justicia Transicional.

Referencias

- Amado, Y., López, D. y Molina, A. (Octubre de 2008). Violencia de género, mujeres víctimas del conflicto armado y reparación integral, Ley 975 de 2005. En: *Revista Tendencias & Retos* (13) pp. 247-272.
- Ambos, K. (2010). *Procedimiento de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y derecho penal internacional Estudio sobre la facultad de intervención complementaria de la Corte Penal Internacional a la luz del denominado proceso de 'Justicia y Paz' en Colombia*. Bogotá: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).
- Ambos, K. (coord.) (2011). *Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales. Un estudio comparado*. Bogotá: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Amnistía Internacional. (2005). *Colombia. Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?* Madrid: EDAI.
- Amnistía Internacional. (2007). *Sindicalismo en Colombia. Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte*. Madrid: EDAI.
- Amnistía Internacional. (2008). *¡Déjennos en Paz! La población civil, víctima del conflicto armado interno en Colombia*. Madrid: EDAI.
- Amnistía Internacional. (2011). *"Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia": Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia*. Madrid: EDAI.

Amnistía Internacional. (2012). *Colombia. Invisibles ante la justicia, impunidad por actos de violencia sexual cometidos en el conflicto: informe de seguimiento*. Madrid: EDAI.

Barbero, N. (2011). La violencia sexual contra mujeres en Derecho Internacional. En Papeles ICLA, *Memorias del Tercer Seminario Internacional sobre los Desafíos en la Judicialización de Crímenes de Violencia Sexual basado en Género*. Consejo Noruego para Refugiados, Bogotá.

Belge, K. y Bieschke, M. (2011). *Queer: The Ultimate LGBT. Guide for Teens*. San Francisco: Zest Books.

Bernal, G. (2013). Primera jurisprudencia en Violencia Basada en Género (VBG) en la Ley de Justicia y Paz en Colombia. En: E. Cortés, (comp.). *Decisiones Judiciales. Lubanga (D.R. Congo). Vencedores de Arauca (Colombia). Akayesu (Ruanda). Menéndez (Argentina). Río Negro (Guatemala). Comentarios*. Bogotá: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Proyecto Apoyo al Proceso de Paz en Colombia en el Contexto de la Ley de Justicia y Paz –un ejemplo de justicia transicional–, ProFis. p. 63-97.

Bernal, G. (comp.). (2011) *Visibilizar la Violencia de Género, sistematización de la experiencia en género*. Bogotá: ProFis-GIZ.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. (2010). *El derecho a la verdad, la justicia y la reparación, Análisis de la Ley 975 y Decreto 4760 de 2005 según estándares internacionales de protección de los derechos humanos*. San José: CEJIL.

Céspedes, L. (2011). Género y Derecho. En: Bernal, G. (comp.) *Visibilizar la Violencia de Género, sistematización de la experiencia en género*. Bogotá: Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Proyecto Apoyo al Proceso de Paz en Colombia en el Contexto de la Ley de Justicia y Paz –un ejemplo de justicia transicional–, ProFis. pp. 19-39.

Colectivo de Mujeres al Derecho (2009). *Práctica feminista del derecho. Atención a mujeres en Desplazamiento del derecho tensión situación de desplazamiento*. Bogotá: Asociación Colectivo de Mujeres al Derecho / ProFis-GTZ

Consultoría para los Derechos humanos y el desplazamiento, COHDES. (2010). Identificación y Documentación de Casos de Violencia Sexual. En: *Foreign Affairs and International Trade Canada/Consejo Noruego para Refugiados [NRC]. Lecciones aprendidas en judicialización de Violencia Sexual Basada en Género. Acompañamiento e intervención con mujeres sobrevivientes de violencia sexual y otros crímenes de Violencia Sexual Basada en Género, VSBG*. (pp. 13-20).

Corporación Humanas. (2009). *Guía para llevar casos de violencia sexual. Propuestas de argumentación para enjuiciar crímenes de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado colombiano*. Bogotá: Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género.

Corporación Humanas. (2012). *Balance y deudas a un año del tribunal simbólico*. Recuperado el 28 de abril de 2015, de: http://www.humanas.org.co/amplia_not.php?id=d791421df2fe178c5a94b5c8e4d78581

- Corporación Humanas. (2013). *La Violencia Sexual. Una estrategia paramilitar en Colombia. Argumentos para imputarle responsabilidad penal a Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo*. Bogotá: Corporación Humanas. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género/ ProFis-GIZ / Consejo Noruego para Refugiados y Fondo para la Paz y la Seguridad Global (GPSF) de Canadá.
- Corporación Humanas/Abogados sin Fronteras. (2013). *Represión de la violencia sexual en Colombia y justicia internacional. Informe de observación de juicio de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano*. Bogotá: Ecosueño.
- Cortés, E. y Bernal, G. (2012). *Marco argumentativo para la Violencia Basada en Género (VBG) en el contexto del conflicto armado colombiano*. Bogotá: ProFis-GIZ.
- Cortés, E. (2016). Contexto y patrones de macrocriminalidad en la violencia contra pueblos indígenas. En: Cortés, E. (comp.). *Proceso de Justicia y Paz. Evaluación y aportes en casos de Pueblos Indígenas*. [En prensa]. Barranquilla: Educosta.
- Eco, U. (s.f.). *Cómo se hace una tesis*. Recuperado de http://www.upv.es/laboluz/master/seminario/textos/umberto_eco.pdf
- Fiscalía General de la Nación. (2012, octubre 4). *Directiva 001 de octubre 4 de 2012*; "Por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquellos en la Fiscalía General de la Nación".

- Fraisse, G. (2003). El concepto filosófico de género. En: S. Tubert (ed.). *Del sexo al género. Los equívocos de un concepto*. Madrid: Huertas. pp. 39-46.
- Ibáñez, J. (2014). *Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad*. Bogotá: Instituto Berg.
- Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (2009). *Justicia y seguridad para las víctimas del conflicto armado. Análisis con perspectiva de género*. Documento público N° 4. Bogotá: IMP.
- Lagarde, M. (2009). *Declaración rendida ante fedatario público por la perita Lagarde y de los Ríos*. p. 10 – 11 (expediente de fondo, tomo XI, folio 3386). Disponible en Internet: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/expedientes/Lagarde.pdf>
- Nueva Sociedad. (1997). *Desarraigo, género y desplazamiento interno en Colombia*, 148. 30-43
- OACNUDH y ONU-Mujeres (2014). *Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género*. Panamá.
- ONU. (1948, diciembre 09). *Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio*. Resolución 260 III.
- ONU. (1948, diciembre 10). *Declaración Universal de Derechos Humanos*.
- ONU. (1949, agosto 12). *Convenio de Ginebra*. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra Relativo a la Protección de Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I).

- ONU. (1952, diciembre 20). *Convención sobre los derechos políticos de la Mujer*. Resolución 640 (VII).
- ONU. (1966, diciembre 16). *Pacto Internacional de Derechos, Sociales y Culturales Derechos Económicos*. Resolución 2200 A (XXI).
- ONU. (1974, diciembre 14). *Declaración sobre la Protección de la Mujer y el niño en Estados de Emergencia o Conflicto Armado*. Resolución 3318 (XXIX).
- ONU. (1979, diciembre 18). *Convención sobre la eliminación de todas la formas de discriminación contra la Mujer*. Resolución 34/180.
- ONU. (1993, mayo 25). *Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia*.
- ONU. (1993, diciembre 20). *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*. Asamblea General de las Naciones Unidas, 85ª sesión plenaria.
- ONU. (1994, noviembre 08). *Resolución 955 (1994), de 8 de noviembre, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, "por la que se crea un Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales perpetrados en Ruanda"*.
- ONU. (1998, julio 17). *Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*. Aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.
- ONU. (2000, octubre 31). Resolución 1325. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf>

- ONU. (2004, agosto 3). *El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos*, S/2004/616.
- ONU. (2006, enero 20). *Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: violencia contra la mujer la norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la violencia contra la mujer*. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, E/CN.4/2006/61.
- ONU. (2008, junio 19). *Resolución 1820*. Recuperado de http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10/UN_1820.pdf
- ONU. (2011, febrero 3). *Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia*.
- ONU. (2012). *Nacidos libres e iguales*. Orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos. Nueva York - Ginebra.
- ONU. (2013, junio 24). *Resolución 2106*. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 6984ª. S / RES/2106 (2013).
- ONU. Corte Penal Internacional (CPI) (2012, noviembre). *Situación en Colombia. Reporte intermedio*. Oficina del Fiscal.
- ONU. Corte Penal Internacional (CPI) (2014, diciembre 2). *Informe sobre las Actividades de Examen Preliminar de 2014. (Situaciones en Honduras y Colombia)*. Oficina del Fiscal. Anexos

- ONU. Corte Penal Internacional (CPI) The Office of the Prosecutor (2014, june). *Policy paper on sexual and Gender – Based Crimes*.
- Organización de Estados Americanos - OEA (1948, mayo 02). *Convención Interamericana sobre la Concepción de los Derechos Políticos a la Mujer*.
- Organización de Estados Americanos - OEA (1969, noviembre 22). *Convención americana sobre derechos humanos. "Pacto de San José de Costa Rica"*.
- Organización de Estados Americanos - OEA (1994, junio 9). *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer* (Convención Belém do Pará).
- Organización de Estados Americanos - OEA (2008, agosto 15). *Declaración sobre el Femicidio del Comité de Expertas y Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – CEVI –*. Washington D.C. Aprobada en la Cuarta Reunión del Comité de Expertas/os (CEVI).
- Organización de Estados Americanos - OEA. Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009, noviembre 16). *Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México*. Sentencia. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas.
- Organización Mundial de la Salud (OMS) (2003). *Informe mundial sobre la violencia y la salud*. Washington: Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la OMS.

- Orozco. I. (2005). *Sobre los límites de la conciencia humanitaria. Dilemas de la Paz y la Justicia en América Latina*. Bogotá: Temis, CESO, Uniandes.
- Quevedo, H. (2013). *Enfoque diferencial y de género para la protección de mujeres víctimas de violencia sexual de hechos ocurridos en el contexto de las acciones de los grupos armados que son postulados a la aplicación de Ley 975 de 2005 -de Justicia y Paz-*. [Monografía de maestría]. Bogotá: Universidad Nacional / Facultad de Derecho.
- Ramírez, M. (s.f.). *Estudio mujeres y conflicto armado en Colombia. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)*. Recuperado el 28 de abril de 2015, de <http://www.cladem.org/images/archivos/publicaciones/nacionales/colombia/Violencia-Sexual-en-conflicto-armado-Colombia.pdf>
- República de Colombia, Congreso de la República. (1968, diciembre 26). *Ley 74, "Por la cual se aprueban los 'Pactos internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966'"*. Diario Oficial No 32682. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional de Colombia.
- República de Colombia, Ministerio de Justicia. (1980, enero 23). *Decreto 100 del 23 de enero de 1980, "Por el cual se expide el Nuevo Código Penal"*. Diario Oficial No. 35461. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional de Colombia.

República de Colombia, Congreso de la República. (2000, julio 24). *Ley 599 de 2000, "Por la cual se expide el Código Penal"*. Diario Oficial No. 44.097. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional de Colombia.

República de Colombia, Congreso de la República (2002, julio 19). *Ley 747, "Por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones"*. Diario Oficial No 44872. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional de Colombia.

República de Colombia, Congreso de la República (2005, julio 25). *Ley 975 "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios"*. Diario Oficial No 45980. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional de Colombia.

República de Colombia, Congreso de la República. (2008, diciembre 04). *Ley 1257, "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones"*. Diario Oficial No. 47193. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional de Colombia.

República de Colombia, Congreso de la República. (2011, agosto 31). *Ley 1448 del 10 de junio de 2011, "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"*. Diario Oficial No. 48096. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional de Colombia.

República de Colombia, Congreso de la República. (2012, diciembre 03). *Ley 1592 del 03 de diciembre de 2012, "Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 'por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios' y se dictan otras disposiciones"*. Diario Oficial 48633. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional de Colombia.

República de Colombia, Congreso de la República. (2014, junio 18). *Ley 1719, "Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones"*. Diario Oficial No. 49186. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional de Colombia.

República de Colombia, Congreso de la República. (2015, junio 18). *Ley 1761, "Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones (Rosa Elvira Cely)"*. Diario Oficial No. 49565. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional de Colombia.

República de Colombia, Congreso de la República, Proyecto de Ley 107. (2013). *En el delito de feminicidio que se propone como un tipo penal autónomo, el bien jurídico protegido es la vida de las mujeres. Se trata de un tipo penal pluriofensivo, en tanto afecta un conjunto de derechos considerados fundamentales tales como la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, todos estos bienes jurídicos a proteger*. Gaceta del Congreso de la República 773.

República de Colombia, Corte Constitucional. (2006, mayo 18). *Sentencia C-370*. Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.

República de Colombia, Corte Constitucional. (2008, abril 14). *Auto 092*. "Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión". Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinoza.

República de Colombia, Corte Constitucional. (2013, febrero 18). *Auto 028*. "Solicitud de información al Gobierno Nacional sobre la implementación del Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus víctimas, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación sobre los avances en los procesos penales relativos a actos de violencia sexual contra mujeres desplazadas y la protección de sus derechos fundamentales, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y al auto 092 de 2008". Magistrado Presidente: Luis Ernesto Vargas Silva.

República de Colombia, Corte Constitucional. (2013, agosto 28). *Sentencia C-579*. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

República de Colombia, Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal (2009, julio 31). *Proceso No. 31539*. Magistrado Ponente: Augusto J. Ibáñez Guzmán.

República de Colombia, Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal (2009, septiembre 25). *Proceso No. 32022*. Magistrado Ponente: Sigifredo Espinosa Pérez.

República de Colombia, Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal (2010, marzo 11). *Proceso No. 33301*. Magistrado Ponente: Alfredo Gómez Quintero.

República de Colombia, Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal (2012, octubre 24). *Proceso No. 39957*. Magistrado Ponente: José Luis Barceló Camacho.

- República de Colombia, Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal (2012, diciembre 12). *Proceso n.º 37048*. Magistrado Ponente: Javier Zapata Ortiz.
- República de Colombia, Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal (2012, diciembre 12). *Proceso n.º 38222*. Magistrado Ponente: José Leonidas Bustos Ramírez.
- República de Colombia, Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal (2015, marzo 04). *Casación 41457*. Alexander de Jesús Ortiz Ramírez. Magistrada Ponente: Patricia Salazar Cuellar.
- República de Colombia, Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal (2015, diciembre 16). *Radicación N° 45547*. Magistrado Ponente: Gustavo Enrique Malo Fernández.
- Russel, D (2006). *Feminicidio, una perspectiva global*. México: Universidad Autónoma de México.
- Solórzano, R. (2005). *Medicina Legal. Criminología y toxicología para abogados*. 5a ed. Bogotá: Nomos.
- Stoller, R. (1968). *Sex and gender. The Development of Masculinity and Femininity*. London: H. Karnak (Books).
- Tojo, L. (comp.) (2010). *Sumarios de jurisprudencia. Violencia de género*. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
- Toledo, P. (2008). ¿Tipificar el feminicidio? *Anuario de Derechos Humanos* DOI: 10.5354/0718-2279.2008.13660

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz (2012, noviembre 29). *Control legal y material de los cargos Ferney Alberto Argumedo Torres. Rad. 11-001-60-002253-2008-83160*. Magistrado Ponente: Gustavo Aurelio Roa Avendaño.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz (2014, agosto 1). *Sentencia contra el postulado Luis Carlos Pestana Coronado. Rad. 1-001-60-002253-2008-83201*. Magistrado Ponente: Gustavo Aurelio Roa Avendaño.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz (2014, octubre 21). *Sentencia contra el postulado Jancy Antonio Novoa Peñaranda. Rad. 11-001-60-002253-2008-83374*. Magistrado Ponente: Gustavo Aurelio Roa Avendaño.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz (2015, julio 13). *Sentencia contra el postulado Ferney Alberto Argumedo Torres. Rad. 11-001-60-002253-2008-83160*. Magistrado Ponente: Gustavo Aurelio Roa Avendaño.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2009, marzo 19). *Sentencia contra el postulado Wilson Salazar Carrascal. Rad. 11001600253200680526*. Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos Roso.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2010, junio 29). *Sentencia contra los postulados Edwar Cobos Téllez y Úber Enrique Banquez. Rad. 110016000253200680077*. Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2010, diciembre 2). *Sentencia contra el postulado Jorge Iván Laverde Zapata. Rad. 110016000253200680281*. Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2011, junio 29). *Sentencia contra el postulado Aramis Machado Ortiz. Rad. 110016000253200782790*. Magistrada Ponente: Alexandra Valencia Molina.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2011, diciembre 01). *Sentencia contra los postulados José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas. Rad. 1100160002532008-83194; 1100160002532007-83070*. Magistrada Ponente: Léster González Romero.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2011, diciembre 07). *Sentencia contra los postulados Édgar Ignacio Fierro Flores y Andrés Mauricio Torres León. Rad. 110016000253-200681366*. Magistrada Ponente: Léster María González Romero.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2011, diciembre 16). *Sentencia contra el postulado Fredy Rendón Herrera. Rad. 110016000253200782701*. Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2012, enero 31). *Sentencia contra el postulado José Barney Veloza García. Rad. 110016000253200680585*. Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2012, abril 16). *Sentencia contra el postulado Orlando Villa Zapata. Rad. 110016000253200883280*. Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos Roso.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2012, julio 30). *Sentencia contra el postulado Edison Giraldo Paniagua. Rad. 110016000253200682222*. Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2012, septiembre 4). *Control formal y material de cargos contra el postulado Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera y otros. Rad. 11001 6000 253 2008 83612*. Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2012, septiembre 4). *Sentencia contra el postulado Gian Carlo Gutiérrez Suárez. Rad. 110016000253200880786*. Magistrada Ponente: Léster María González Romero.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2013, agosto 30). *Sentencia contra el postulado Rodrigo Pérez Alzate. Rad. 110016000253200680012*. Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2013, octubre 30). *Sentencia contra el postulado Hébert Veloza García. Rad. 11-001-60-00 253-2006-810099*. Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos Roso

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2013, diciembre 6). *Sentencia contra los postulados Armando Madriaga Picón y Jesús Noraldo Basto León. Rad. 110016000253 - 200782862 y 200680082.* Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2013, diciembre 6). *Sentencia contra el postulado José Baldomero Linares moreno y otros. Rad. 11-001-60-00 253-2006 80531.* Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos Roso.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2014, mayo 29). *Sentencia contra el postulado Ramón María Isaza y otros. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855.* Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos Roso.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2014, septiembre 1). *Sentencia contra el postulado Luis Eduardo Cifuentes Galindo y otros. Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00.* Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos Roso.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2014, septiembre 29). *Sentencia contra el postulado Guillermo Pérez Alzate y otros. Rad. 110016000253200680450.* Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2014, octubre 31). *Sentencia contra el postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros. Rad. 11001600253200680008.* Magistrada Ponente: Alexandra Valencia Molina.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2014, noviembre 20). *Sentencia contra el postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros. Rad. 11 001 22 52 000 2014 00027*. Magistrada Ponente: Léster María González Romero.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2014, diciembre 11). *Sentencia contra el postulado Juan Francisco Prada Márquez. Rad. 2006- 80014*. Magistrada Ponente: Léster María González Romero.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2014, diciembre 16). *Sentencia contra el postulado Arnubio Triana Mahecha y otros. Rad. 11001-22-52000-2014-00058-00*. Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos Roso.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2015, febrero 24). *Sentencia contra el postulado Orlando Villa Zapata y otros. Rad. 110016000253200883612-00*. Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2015, abril 10). *Sentencia contra el postulado Saúl Rincón Camelo. Rad. 110012252000201300069*. Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2015, julio 03). *Sentencia contra el postulado Jhon Fredy Rubio Sierra y otros. Rad. 110016000253 - 200883167*. Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2015, julio 31). *Sentencia contra los postulados José Gregorio Mangones Lugo y Ómar Enrique Martínez Ossías. Rads. 11-001-60-00253-2007 82791 / 11-001-60-00253-2007 82716.* Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos Roso.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2016, febrero 29). *Sentencia contra el postulado Ramón Isaza Arango y otros. Rad. 110016000253201300146.* Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz (2016, marzo 4). *Salvamento y aclaración de voto. Sentencia contra Ramón Isaza Arango y otros. Rad. 110016000253201300146-01.* Magistrada Ponente: Alexandra Valencia Molina.

Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2014, agosto 27). *Sentencia contra el postulado Darío Enrique Vélez Trujillo y otros. Rad. 1100160002532008 83241.* Magistrado Ponente: Juan Guillermo Cárdenas Gómez.

Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2014, diciembre 9). *Sentencia contra el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez. Rad. 10016000253-2006-82611.* Magistrado Ponente: Rubén Darío Píñilla Cogollo.

Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2015, febrero 2). *Sentencia contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo, alias "Cuco Vanoy. Rad. 110016000253200680018.* Magistrada Ponente: María Consuelo Rincón Jaramillo.

Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2015, abril 23). *Sentencia contra el postulado Jorge Eliécer Barranco Galván y otros. Rad. 110016000253-2006-82689*. Magistrado Ponente: Rubén Darío Pinilla Cogollo.

Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2015, julio 07). *Sentencia contra el postulado Úber Darío Yáñez Cadavías. Rad. 110016000253 2009 83825*. Magistrado Ponente: Juan Guillermo Cárdenas Gómez.

Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2015, septiembre 24). *Sentencia contra el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga. Rads. 0016000253-2007-82700, 0016000253-2008-83269, 0016000253-2007-82699, 0016000253-2008-83275, 0016000253-2006-80864, 0016000253-2008-83275 y 0016000253-2008-83285*. Magistrado Ponente: Rubén Darío Pinilla Cogollo.

Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2015, diciembre 16). *Sentencia contra el postulado Olimpo de Jesús Sánchez Caro y otros. Rads. 110016000253200883621 y ss*. Magistrada Ponente: María Consuelo Rincón Jaramillo.

Unidad Nacional para la Justicia y la Paz. (2013, enero 10). *Plan de acción de casos a priorizar por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz*. Bogotá.

Unidad Nacional para la Justicia y la Paz. (2014, enero 31). *Continuación Plan de acción priorización. Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz año 2014*. Bogotá.

- Uprimny, R. (2006). *Justicia Transicional ¿sin Transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia*. Bogotá: Antropos.
- VerdadAbierta.com (2011). *Consejos para agilizar Justicia y Paz*. Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/legislacion/3527-consejos-para-agilizar-justicia-y-paz>
- Wilches, I. (2011). Conceptos en violencias de género. En: G. Bernal (comp.) *Visibilizar la violencia de género, sistematización de la experiencia en género*. Bogotá: ProFis-GIZ. pp. 41-50.
- Women's Link Worldwide. (2010). *Crímenes de Género en el Derecho Penal Internacional*. Buenos Aires: Women's Link Worldwide.
- Zúñiga, J. (2001). *Verdad judicial hasta ahora contada por el Bloque Norte de las AUC*. Primer informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, suministrado por la Unidad Nacional de Justicia y Paz de Fiscalías.

**Sistematización de la
jurisprudencia proferida en los
casos judicializados en el proceso
penal especial de Justicia y Paz**

Código	Sala de JyP	Magistrado/a Ponente	Postulado(s)	GAOML	Ficha Bigliográfica
2010.06.29 (1)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Uldi Teresa Jiménez López	Edwar Cobos Téllez y Uber Enrique Banquez.	Bloque Montes de María y Frente Canal del Dique de las AUC	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2010, junio 29). Sentencia contra los postulados Edwar Cobos Téllez y Uber Enrique Banquez. Rad. 110016000253200680077. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.
2010.12.02 (2)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Uldi Teresa Jiménez López	Jorge Iván Laverde Zapata	Frente Fronteras de las AUC	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2010, diciembre 2). Sentencia contra el postulado Jorge Iván Laverde Zapata. Rad. 110016000253200680281. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.
2011.06.29 (3)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Alexandra Valencia Molina	Aramis Machado Ortiz	Frente Fronteras de las AUC	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2011, junio 29). Sentencia contra el postulado Aramis Machado Ortiz. Rad. 110016000253200782790. Magistrada Ponente Alexandra Valencia Molina.

2011.12.01 (4)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2011, diciembre 01). Sentencia contra los postulados José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas. Rad. 1100160002532008-83194; 1100160002532007-83070. Magistrada Ponente Léster González Romero.	Léster María González Romero	José Rubén Peña Tobón y Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas	Bloque Vencedores de Arauca de las AUC	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2011, diciembre 01). Sentencia contra los postulados José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas. Rad. 1100160002532008-83194; 1100160002532007-83070. Magistrada Ponente Léster González Romero.
2011.12.07 (5)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Léster María González Romero	Edgar Ignacio Fierro Flores y Andrés Mauricio Torres León	Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2011, diciembre 07). Sentencia contra los postulados Edgar Ignacio Torres Flores y Andrés Mauricio Torres León. Rad. 110016000253-200681366. Magistrada Ponente Léster María González Romero.
2011.12.16 (6)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Uldi Teresa Jiménez López	Fredy Rendón Herrera	Bloque Éimer Cárdenas de las AUC	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2011, diciembre 16). Sentencia contra el postulado Fredy Rendón Herrera. Rad. 110016000253200782701. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.

2012.01.31 (7)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2012, enero 31). Sentencia contra el postulado José Barney Veloza García. Rad. 110016000253200680585. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.	Uldi Teresa Jiménez López	José Barney Veloza García	Bloques Bananero, Calima y Centauros de las AUC	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2012, enero 31). Sentencia contra el postulado José Barney Veloza García. Rad. 110016000253200680585. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.
2012.04.16 (8)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Eduardo Castellanos Roso	Orlando Villa Zapata (1)	Bloque Vencedores de Arauca de las AUC	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2012, abril 16). Sentencia contra el Orlando Villa Zapata. Rad. 110016000253200883280. Magistrado Ponente Eduardo Castellanos Roso.
2012.07.30 (9)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Uldi Teresa Jiménez López	Edison Giraldo Paniagua	Bloque Héroes de Tolová	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2012, julio 30). Sentencia contra el postulado Edison Giraldo Paniagua. Rad. 11001600025320068222. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.

2012.09.04 (10)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2012, septiembre 4). Sentencia contra el postulado Gian Carlo Gutiérrez Suárez. Rad. 110016000253200880786. Magistrada Ponente Léster María González Romero.	Bloque Calima de las AUC	Gian Carlo Gutiérrez Suárez	Léster María González Romero	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2012, septiembre 4). Sentencia contra el postulado Gian Carlo Gutiérrez Suárez. Rad. 110016000253200880786. Magistrada Ponente Léster María González Romero.
2013.08.30 (11)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2013, agosto 30). Sentencia contra el postulado Rodrigo Pérez Alzate. Rad. 110016000253200680012. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.	Bloque Central Bolívar	Rodrigo Pérez Alzate	Uldi Teresa Jiménez López	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2013, agosto 30). Sentencia contra el postulado Rodrigo Pérez Alzate. Rad. 110016000253200680012. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.
2013.10.30 (12)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2013, octubre 30). Sentencia contra el postulado Hébert Veloza García. Rad. 11-001-60-00 253-2006-810099. Magistrado Ponente Eduardo Castellanos Roso	Bloque Bananero de las AUC	Hébert Veloza García	Eduardo Castellanos Roso	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2013, octubre 30). Sentencia contra el postulado Hébert Veloza García. Rad. 11-001-60-00 253-2006-810099. Magistrado Ponente Eduardo Castellanos Roso

2013.12.06 (13)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Uldi Teresa Jiménez López	Armando Madriaga Picón y Jesús Noraldo Basto León	Fronte Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2013, diciembre 6). Sentencia contra los postulados Armando Madriaga Picón y Jesús Noraldo Basto León. Rad. 110016000253 - 200782862 y 200680082. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.
2013.12.06 (14)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Eduardo Castellanos Roso	José Baldomero Linares y otros	Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2013, diciembre 6). Sentencia contra el postulado José Baldomero Linares moreno y otros. Rad. 11-001-60-00 253-2006 80531. Magistrado Ponente Eduardo Castellanos Roso.
2014.05.29 (15)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Eduardo Castellanos Roso	Ramón María Isaza Arango y otros (1)	Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2014, mayo 29). Sentencia contra el postulado Ramón María Isaza y otros. Rad. 11-001-60-00253-2007 82855. Magistrado Ponente Eduardo Castellanos Roso.

2014.08.01 (16)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz (2014, agosto 1).	Luis Carlos Pestana Coronado	Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Frente Juan Andrés Álvarez	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz (2014, agosto 1). Sentencia contra el postulado Luis Carlos Pestana Coronado. Rad. 1-001-60-002253-2008-83201. Magistrado ponente Gustavo Aurelio Roa Avendaño.
2014.08.27 (17)	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz	Juan Guillermo Cárdenas Gómez	Bloque Émer Cárdenas de las AUC	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2014, agosto 27). Sentencia contra el postulado Darío Enrique Vélez Trujillo y otros. Rad. 110016000253 2008 83241. Magistrado ponente Juan Guillermo Cárdenas Gómez.
2014.09.01 (18)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Luis Eduardo Cifuentes Galindo	Autodefensas Bloque Cundinamarca	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2014, septiembre 1). Sentencia contra el postulado Luis Eduardo Cifuentes Galindo y otros. Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00. Magistrado Ponente Eduardo Castellanos Roso.

2014.09.29 (19)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Uldi Teresa Jiménez López	Guillermo Pérez Alzate y otros	Libertadores del Sur del BCB	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2014, septiembre 29). Sentencia contra el postulado Guillermo Pérez Alzate y otros. Rad. 110016000253200680450. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.
2014.10.21 (20)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz	Gustavo Aurelio Roa Avendaño	Jancy Novoa Peñaranda	Resistencia Tayrona	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz (2014, octubre 21). Sentencia contra el postulado Jancy Antonio Novoa Peñaranda. Rad. 11-001-60-002253-2008-83374. Magistrado ponente Gustavo Aurelio Roa Avendaño.
2014.10.31 (21)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Alexandra Valencia Molina	Salvatore Mancuso Gómez y otros (1)	Bloque Catatumbo	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2014, octubre 31). Sentencia contra el postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros. Rad. 110016002532006800008. Magistrada Ponente Alexandra Valencia Molina.

2014.11.20 (22)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Léster María González Romero	Salvatore Mancuso Gómez y otros (2)	Bloque Catatumbo, Bloque Norte, Bloque Héroes de los Montes de María y Bloque Córdoba.	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2014, noviembre 20). Sentencia contra el postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros. Rad. 11 001 22 52 000 2014 00027. Magistrada Ponente Léster María González Romero.
2014.12.09 (23)	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz	Rubén Darío Pinilla Cogollo	Jesús Ignacio Roldán Pérez.	Bloque Calima de las AUC	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2014, diciembre 9). Sentencia contra el postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez. Rad. 10016000253-2006-82611. Magistrado Ponente Rubén Darío Pinilla Cogollo.
2014.12.11 (24)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Léster María González Romero	Juan Francisco Prada Márquez	Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2014, diciembre 11). Sentencia contra el postulado Juan Francisco Prada Márquez. Rad. 2006- 80014. Magistrada Ponente Léster María González Romero.

2014.12.16 (25)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Eduardo Castellanos Roso	Arnubio Triana Mahecha y otros	Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2014, diciembre 16). Sentencia contra el postulado Arnubio Triana Mahecha y otros. Rad. 11001-22-52000-2014-00058-00. Magistrado Ponente Eduardo Castellanos Roso.
2015.02.02 (26)	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz	María Consuelo Rincón Jaramillo	Ramiro Vanoy Murillo	Bloque Mineros de las AUC	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2015, febrero 2). Sentencia contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo, alias "Cuco Vanoy. Rad. 110016000253200680018. Magistrada Ponente María Consuelo Rincón Jaramillo.
2015.02.24 (27)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Uldi Teresa Jiménez López	Orlando Villa Zapata y otros (2)	Bloque Vencedores de Arauca	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2015, febrero 24). Sentencia contra el postulado Orlando Villa Zapata y otros. Rad. 110016000253200883612-00. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.

2015.04.10 (28)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2015, abril 10). Sentencia contra el postulado Saúl Rincón Camelo. Rad. 1100122520002013000069. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.	Bloque Central Bolívar	Saúl Rincón Camelo, Frente Fidel Castaño	Uldi Teresa Jiménez López	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz
2015.04.23 (29)	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2015, abril 23). Sentencia contra el postulado Jorge Eliécer Barranco Galván y otros. Rad. 110016000253-2006-82689. Magistrado Ponente Rubén Darío Pinilla Cogollo.	Bloque Tolima de las AUC	Jorge Eliécer Barranco Galván y otros.	Rubén Darío Pinilla Cogollo	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz
2015-07-03 (30)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2015, julio 03). Sentencia contra el postulado Jhon Fredy Rubio Sierra y otros. Rad. 110016000253 - 200883167. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.	Bloque Tolima de las AUC	Jhon Fredy Rubio Sierra y otros	Uldi Teresa Jiménez López	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz

2015.07.07 (31)	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz	Juan Guillermo Cárdenas Gómez	Uber Darío Yáñez Cavadías	Bloque Héroes de Tolová de la ACCU.	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2015, julio 07). Sentencia contra el postulado Uber Darío Yáñez Cadavías. Rad. 110016000253 2009 83825. Magistrado Ponente Juan Guillermo Cárdenas Gómez.
2015.07.13 (32)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz	Gustavo Aurelio Roa Avendaño	Ferney Alberto Argumedo Torres	Contra-insurgencia Wayúu del Bloque Norte de las AUC	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz (2015, julio 13). Sentencia contra el postulado Ferney Alberto Argumedo Torres. Rad. 11-001-60-002253-2008-83160. Magistrado ponente Gustavo Aurelio Roa Avendaño.
2015.07.31 (33)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Eduardo Castellanos Roso	Gregorio Mangones Lugo y Ómar Enrique Martínez Ossías	"Frente William Rivas" del Bloque Norte de las AUC	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2015, julio 31). Sentencia contra los postulados José Gregorio Mangones Lugo y Ómar Enrique Martínez Ossías. Rads. 11-001-60-00253-2007 82791 / 11-001-60-00253-2007 82716. Magistrado Ponente Eduardo Castellanos Roso.

2015.09.24 (34)	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz	Rubén Darío Pinilla Cogollo	Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga y otros.	Bloque Cacique Nutibara de las AUC	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2015, septiembre 24). Sentencia contra el postulado Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga. Rads. 0016000253-2007-82700, 0016000253-2008-83269, 0016000253-2007-82699, 0016000253-2008-83275, 0016000253-2006-80864, 0016000253-2008-83275 y 0016000253-2008-83285. Magistrado Ponente Rubén Darío Pinilla Cogollo.
2015.09.24 (35)	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz	María Consuelo Rincón Jaramillo	Olimpo de Jesús Sánchez Caro y otros	E.R.G. Ejército Revolucionario Guevarista y Frente ERNESTO CHE GUEVARA DEL E.L.N.	Tribunal Superior de Medellín - Sala de Justicia y Paz (2015, diciembre 16). Sentencia contra el postulado Olimpo de Jesús Sánchez Caro y otros. Rads. 110016000253200883621 y ss. Magistrada Ponente María Consuelo Rincón Jaramillo.
2016.02.29 (36)	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz	Uldi Teresa Jiménez López	Ramón María Isaza	Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio	Tribunal Superior del distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2016, febrero 29). Sentencia contra el postulado Ramón Isaza Arango y otros. Rad. 110016000253201300146. Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.

Alait De Jesús Freja Calao

Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Costa C.U.C. Especialista en Investigación Criminal y Juzgamiento en el Sistema Penal Acusatorio, Especialista en Derechos Humanos, Magíster en Derecho Penal y Criminología. Coordinador Académico de la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico. Se ha desempeñado como docente de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, abogado litigante en asuntos penales, docente investigador y Director del área de Derecho Penal Corporación Universitaria de la Costa C.U.C., este profesional cuenta con una trayectoria en materia de investigación, lo que ha permitido participar como conferencista en múltiples eventos en diferentes universidades de Colombia, además de ser autor de publicaciones de textos jurídicos en diferentes revistas especializadas. Contacto en: afreja1@cuc.edu.co.